



**CÁMARA DE  
DIPUTADOS**  
LXIV LEGISLATURA

# Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

## Comisión Permanente

Correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidenta  Diputada Laura Angélica Rojas Hernández	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año II	Ciudad de México, miércoles 15 de enero de 2020	Sesión 4 Apéndice

## SUMARIO

### INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente por la que informa los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 15 de enero de 2020 y que no fueron abordadas. . . . . 21

### INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 73 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.** . . . . . 30

LEY DE HIDROCARBUROS, LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, Y LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. **Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 41

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 45

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Educación. **Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 47

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación y el artículo 5o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. **Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.** 49

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

De la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. **Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 52

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de

Procedimientos Penales. <b>Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.</b> . . . . .	55
 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	
De la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. <b>Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados.</b> . . . . .	59
 CÓDIGO PENAL FEDERAL	
Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal. <b>Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.</b> . . . . .	69
 LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, LEY DE PUERTOS, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	
De la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, de la Ley de Puertos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. <b>Se turna a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.</b> . . . . .	71
 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN	
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 170 de la Ley General de Educación. <b>Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.</b> . . . . .	77
 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
De la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. <b>Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.</b> . . . . .	80

## LEY FEDERAL DEL MAR

De la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, en materia de investigaciones oceanográficas. **Se turna a la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.** . . . . . 82

## LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. **Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.** . . . . . 88

## LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

Del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. **Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.** . . . . . 90

## LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

De la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. **Se turna a la Comisión de Radio, Televisión, y Cinematografía de la Cámara de Senadores.** . . . . . 93

## EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES FEDERALES Y LOCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAPITALIDAD, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Coordinación entre los Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México en Materia de Capitalidad, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.** . . . . . 101

## LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

De los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 449 y 456 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales. **Se turna a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.** . . . . . 109

#### LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

De la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. **Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.** . . . 111

#### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.** . . . . . 114

#### CÓDIGO PENAL FEDERAL

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal. **Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.** . . . . . 117

#### LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

Del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de lengua incluyente. **Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.** . . . . . 120

#### LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

De la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. **Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.** . . . 134

## APÉNDICE II

#### LEY GENERAL DE TURISMO

Del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo. **Se turna a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.** . . . . . 139

## LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Del senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.** . . . . . 141

## CÓDIGO PENAL FEDERAL, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, Y LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

De la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. **Se turna a la Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 151

## LEY DE PUERTOS Y LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

De la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. **Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con opinión de la Comisión de Marina, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 156

## CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Del diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales. **Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 163

## LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de cambios al ordenamiento ecológico del territorio nacional. **Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 165

## LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

De la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. **Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 172

## LEY GENERAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. **Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores.** . . . . . 175

## LEY GENERAL DE SALUD

De la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud. **Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.** . . . . . 177

## PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

### EXHORTO PARA QUE LOS SISTEMAS QUE ENUNCIA EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, SEAN INTERCONECTADOS A LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

De los diputados Marco Antonio Andrade Zavala, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y del senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los entes públicos federales y estatales que tengan a su cargo los sistemas que enuncia el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a realizar todas las gestiones necesarias para interconectar dichos sistemas a la Plataforma Digital Nacional. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 179

### SE HAGAN PÚBLICOS LOS TABULADORES DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y SE EXPLIQUE A LA POBLACIÓN CUÁLES TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS NO SERÁN GRATUITOS

Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insabi y a la Secretaría de Salud, a hacer públicos los tabuladores de cuotas de recuperación en los servicios de salud y a explicar a la población cuáles tratamientos y medicamentos no serán gratuitos. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 181

SE PUBLIQUEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a publicar las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 184

EXHORTO AL DIF A PROPORCIONAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN EN FAMILIAS DISFUNCIONALES

De la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al DIF, a adoptar las medidas que sean necesarias para proporcionar atención psicológica a niñas, niños y adolescentes que viven en familias disfuncionales o que son objeto de abandono de sus padres. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 186

REFORZAR LAS NORMAS EN REFERENCIA A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN HOSPITALARIA Y ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO

Del diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al CSG a, reforzar las normas en referencia a la alimentación y nutrición hospitalaria y asegurar su cumplimiento. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 188

POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A DIVERSAS AUTORIDADES, PARA ESCLARECER LA SITUACIÓN CAÓTICA DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSABI

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud y del Insabi, a comparecer ante esta soberanía para esclarecer la situación caótica que prevalece en la operación y funcionamiento del Instituto, así como la situación financiera que guarda el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos canalizado hacia el mismo Instituto. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 191

ACCIONES PARA PREVENIR Y CONTROLAR INCENDIOS FORESTALES

Del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y diversas dependencias, a implementar acciones para prevenir y controlar incendios forestales en el territorio nacional. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** 193



## POLÍTICA PÚBLICA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL

De la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo relativo a la política pública de vacunación del gobierno federal. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 196

## SE INFORME DE LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS LLAMADAS DE EXTORSIÓN REALIZADAS A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE SENADORES

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, a informar los avances sobre la investigación de las llamadas de extorsión realizadas a las oficinas de la Cámara de Senadores. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 198

## SE REMITA INFORME DETALLADO DE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a remitir un informe detallado de las convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 201

## SE ATIENDAN Y SANCIONEN LOS COBROS Y CONDICIONANTES QUE SE ESTÁN APLICANDO A LOS BENEFICIARIOS EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA

De la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insabi, a instruir la revisión, atención y sanción por las diversas irregularidades en los cobros y condicionantes que se están aplicando a los beneficiarios en materia de atención médica, así como a la Secretaría de la Función Pública, a investigar y sancionar a los funcionarios públicos involucrados en la autorización y ejecución de dichos cobros y condicionantes. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** 204

## EXHORTO A LOS CONGRESOS DE PUEBLA Y GUERRERO, A INCORPORAR EN SU MARCO JURÍDICO LA MODALIDAD DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

De la diputada Claudia Reyes Montiel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de Puebla y Guerrero, a incorporar la modalidad de violencia política contra las mujeres en su marco jurídico. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 206

INFORME PORMENORIZADO DE LA ESTRATEGIA “SISTEMA DE EMPACADO VOLUNTARIO DE MERCANCÍAS”

De la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inapam, a entregar y difundir un informe pormenorizado del estado que guarda la estrategia “Sistema de Empacado Voluntario de Mercancías” correspondiente al Programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . .

208

SE ELABORE Y PUBLIQUE EL PROGRAMA DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY

Del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Semarnat, elabore y publique a la brevedad el Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en Nuevo León. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . .

211

EN TANTO CONCLUYA EL PROCESO DE ENAJENACIÓN DEL AVIÓN PRESIDENCIAL, SEA UTILIZADO PARA AUXILIAR A LAS PERSONAS EN CASOS DE DESASTRES NATURALES Y DE PROTECCIÓN DE LA SALUD

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que, en tanto concluya el proceso de enajenación del avión presidencial, sea utilizado para auxiliar a la población en casos de desastres naturales, así como para apoyar la protección de la salud de los mexicanos. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . .

213

SE EMITA EL REGLAMENTO Y NORMATIVIDAD SOBRE EL CONTROL MEDICINAL DEL CANNABIS

De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a emitir el reglamento y lineamientos que contengan normatividad sobre el control medicinal del cannabis. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . .

214

PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ATENDER A LOS MUNICIPIOS QUE PRESENTAN MAYOR ÍNDICE DE EMBARAZO ADOLESCENTE EN VERACRUZ

De la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, al Conapo y al Coespo de Veracruz, a diseñar programas específicos de acción focalizada para atender a los municipios que presentan mayor índice de embarazo adolescente en el estado. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . .

218

MODIFICAR LA NOM-016-CRE-2016, RELATIVO AL USO DE ETANOL DESDE UN 10 POR CIENTO EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS DEL VALLE DE MÉXICO, GUADALAJARA Y MONTERREY

De la diputada Mónica Almeida López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CRE, a modificar la NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde un 10 por ciento en las áreas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Monterrey. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 221

EXHORTO A LA FGR, A EJERCER SU FACULTAD DE ATRACCIÓN EN DIVERSAS INVESTIGACIONES QUE PERMANECEN EN IMPUNIDAD EN OAXACA

Del senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, a ejercer su facultad de atracción en diversas investigaciones que permanecen en impunidad en Oaxaca. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 226

SE ATIENDA LA EMERGENCIA DEL SERVICIO DE SALUD

Del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales y locales, a tomar las medidas necesarias para atender la emergencia del servicio de salud en nuestro país. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 228

RELATIVO A LAS FALLAS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL INSABI

Del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo relativo a las fallas en la puesta en marcha del Insabi. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 231

EXHORTO A LAS FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS DE 11 ENTIDADES FEDERATIVAS, A INFORMAR DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS EN SUS ESTADOS

Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las fiscalías y procuradurías de 11 entidades federativas, a brindar información actualizada sobre personas desaparecidas en sus estados a la Comisión Nacional de Búsqueda. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 233

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS CON MOTIVO DEL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

Del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta

al Gobierno de Nuevo León, a implementar las acciones, estrategias y políticas públicas necesarias, con motivo del incremento en el número de casos de mujeres víctimas de violencia familiar en el estado. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 235

#### ACCIONES PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES DE CICLISTAS

De la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a implementar las acciones para prevenir los accidentes de ciclistas. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 237

#### PROGRAMA QUE PREVENGA LA INTRODUCCIÓN Y PORTACIÓN DE ARMAS Y DROGAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN JALISCO

Del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades de Jalisco, a revisar la aplicación del programa Mochila Segura o implementar un programa que prevenga la introducción y portación de armas y drogas a los centros educativos. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 239

#### EXTRAÑAMIENTO AL EJECUTIVO FEDERAL, POR INCUMPLIR CON LA LEY DE PLANEACIÓN, EN RELACIÓN CON EL PND 2019-2024

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo para realizar un extrañamiento al Ejecutivo federal, por incumplir con la Ley de Planeación al no publicar en tiempo y forma los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al PND 2019-2024. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 241

#### EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES PARA QUE ARMONICEN SUS CONSTITUCIONES CON LA CPEUM E INCORPOREN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

De la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a incorporar en sus constituciones la igualdad entre mujeres y hombres de forma expresa, de tal manera que se armonicen con la Constitución Federal. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 242

#### EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS CON MAYOR RIESGO DE INCENDIOS

De la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a designar un porcentaje del Fopreden para equipamiento y adquisición de uniformes nuevos de los cuerpos de bomberos de los estados y municipios con mayor riesgo de incendios. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 243

PROTECCIÓN DE LA ESPECIE ECHINOCACTUS PLATYACANTUS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA DE GUANAJUATO

Del diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a emprender acciones para el cumplimiento de la NOM-059-Semarnat-2010 en cuanto a la protección de la especie Echinocactus Platyacantus y evitar su saqueo en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 245

COLOCACIÓN DE DESPACHADORES GRATUITOS DE TOALLAS SANITARIAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a implementar las acciones necesarias para colocar, de manera gratuita, despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de educación básica, media y media superior del país. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 248

SE REVISE Y, EN SU CASO, REVOQUE EL INCREMENTO A LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE MÉXICO

Del senador Ricardo Moreno Bastida, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a revisar y en su caso revocar el incremento a las tarifas del transporte público en la entidad. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 251

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE SAN LUIS POTOSÍ, A DAR CUMPLIMIENTO A LOS TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL

Del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a fin de que dé cumplimiento a los artículos transitorios segundo y noveno del Decreto 1045, publicado el pasado 20 de agosto de 2018, que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de dicha entidad. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 252

SE MEJORE LA SEGURIDAD DE LA AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO

De la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en coordinación con la empresa Roadis, titular de la concesión de la autopista Monterrey-Saltillo, tomen las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad a lo largo de dicha autopista. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 254

## APÉNDICE III

## SE HAGA PÚBLICO EL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

De la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a hacer público el Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 257

## EXHORTO AL CONACYT, A INFORMAR SOBRE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FORO CONSULTIVO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar al Conacyt, a informar a esta soberanía sobre la puntual entrega de recursos públicos tendientes a garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 259

## SE INFORME SOBRE LAS CAUSAS DEL INCREMENTO DE INFECCIONES HOSPITALARIAS, DE CASOS DE INFLUENZA ESTACIONAL, ASÍ COMO EL IMPACTO QUE HA TENIDO EN ELLAS, LA CANCELACIÓN DEL PROGRAMA PROSPERA

De la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a informar a esta soberanía las causas que inciden en el incremento de infecciones adquiridas en los hospitales durante 2019, sobre las correspondientes al incremento de casos de influenza estacional, así como el impacto que ha tenido en ellas, la cancelación del programa Prospera. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 261

## POLÍTICA PÚBLICA QUE MEJORE LA SEGURIDAD DE LOS PLANTELES ESCOLARES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA

De la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, a llevar a cabo la implementación de acciones preventivas de política pública que mejoren las condiciones de seguridad al interior y en el entorno de los planteles escolares públicos y privados de educación básica. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 266

## SE INCLUYA A LA TORTILLA DE MAÍZ EN LA CANASTA BÁSICA

De senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a incluir a la tortilla de maíz en la canasta básica. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 271

SOLIDARIDAD POR LAS PÉRDIDAS HUMANAS, ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS, OCURRIDAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN AUSTRALIA

De la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, ocurridas por los incendios forestales registrados en Australia. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . .

273

SE POSPONGA, HASTA ENERO DE 2021, EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE MÉXICO

De la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a posponer, hasta enero de 2021, el incremento en las tarifas del servicio de transporte público y realizar un diálogo con los diversos sectores de la sociedad mexicana para formular y acordar acciones integrales para mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del servicio. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . .

275

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBIERNO DE GUANAJUATO Y EL MUNICIPIO DE SALAMANCA PARA QUE RESTABLEZCAN EL PLAN SALAMANCA

Del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a establecer una reunión de trabajo con el gobierno de Guanajuato y el municipio de Salamanca para que restablezcan el Plan Salamanca. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . .

277

SE TRASPARENTE Y GARANTICE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES Y ACUERDOS REALIZADOS EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES

Del diputado Héctor Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que transparente y garantice el acceso a la información de todas las negociaciones y acuerdos realizados por nuestro país en los diversos foros y reuniones internacionales. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . .

280

EXHORTO AL GOBIERNO DE VERACRUZ, A INFORMAR RESPECTO A LOS RECURSOS ECONÓMICOS SOLICITADOS POR CONCEPTO DE PRÉSTAMOS

De la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se

exhorta al gobierno de Veracruz, a informar y transparentar los motivos, montos y destino de los recursos económicos solicitados por concepto de préstamos. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 282

SE LIBEREN FONDOS A LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN CON RESPECTO AL PROGRAMA DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE

De los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a aplicar las Reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y liberen fondos a los estados de la República debido a la disminución con respecto al programa de la Recaudación Federal Participable. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 283

SE HAGA PÚBLICO UN INFORME DE LOS REGISTROS DEL MANTENIMIENTO DE LOS AVIONES DE LAS AEROLÍNEAS MEXICANAS QUE OPERAN EN EL PAÍS

Del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y las dependencias responsables de las bitácoras de mantenimiento de las aeronaves, hagan público un informe pormenorizado de los registros actualizados del mantenimiento de los aviones de las diferentes aerolíneas mexicanas que operan en el país. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 285

SE ARMONICEN LOS CONTENIDOS DEL ACUERDO 286, CON EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, para que armonice los contenidos del acuerdo 286, con el artículo 145 de la Ley General de Educación. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 288

EXHORTO A LA CNDH, A INFORMAR DE LAS CONCLUSIONES RESPECTO DEL PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA SOBRE EL PROYECTO TREN MAYA

De los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a informar a esta soberanía sus conclusiones respecto del proceso de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano realizada entre los días 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en diversos estados sobre el proyecto Tren Maya. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 290



RESTRINGIR LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA, EN ZONAS FORESTALES SINIESTRADAS POR INCENDIOS Y TALA CLANDESTINA

Del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Conafor y de la Secretaría de Bienestar, a restringir la aplicación del programa Sembrando Vida, en zonas forestales siniestradas por incendios y tala clandestina. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 300

SE DISEÑE UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR Y CONTRARRESTAR EL INCREMENTO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia integral para prevenir y contrarrestar el incremento del sobrepeso y la obesidad que padecen millones de mexicanos. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 304

SE ESTABLEZCAN OBJETIVOS E INDICADORES RESPECTO A LOS EJES TRANSVERSALES MENCIONADOS EN EL PEF 2020

De la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se establezcan objetivos e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el PEF 2020, los cuales, deberán ser detallados mediante informes trimestrales y, enviados a la Cámara de Diputados. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 306

IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN E INCORPORACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y PLATAFORMAS DIGITALES PARA PROMOVER LA CULTURA DE LA DENUNCIA

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que, a través de la Segob y de SSPC, a fortalecer sus acciones a fin de identificar, prevenir y sancionar el delito de extorsión e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 307

SE CUMPLA CON EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD MENTAL 2013-2020 ELABORADO POR LA OMS

De la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a cumplir con el Plan de Acción en Salud Mental 2013-2020 elaborado por la OMS. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** 309

EXHORTO RELATIVO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL BANCO DEL BIENESTAR, A LA CONSTRUCCIÓN DE SUCURSALES, ASÍ COMO LA ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y DIGITALIZACIÓN

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a actualizar periódicamente la información financiera de dicho banco, transparenten todo lo referente a la construcción de las sucursales bancarias e informen a esta soberanía sobre la estrategia y/o acciones complementarias que se realizarán en materia de inclusión financiera y digitalización. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . .

311

SE REALICE DE MANERA PERMANENTE EL PROGRAMA MOCHILA SEGURA EN LAS ESCUELAS

De la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar el programa Mochila Segura de manera permanente en las escuelas, a fin de salvaguardar y proteger la seguridad de las niñas, niños y adolescentes. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . .

314

PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las entidades federativas, a implementar programas y protocolos para la prevención y eliminación de la violencia en las escuelas, a fin de garantizar un entorno seguro para los alumnos, el personal docente y administrativo. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . .

316

VIGILAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LOS TRABAJOS DE DESMONTE Y CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MONTERREY

De los diputados José Martín López Cisneros y Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat y de la Profepa, a implementar operativos para vigilar la normatividad ambiental, en los trabajos de desmonte y las obras civiles de construcción que se desarrollan dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . .

318

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y APLICACIÓN DE EXÁMENES ANTI-DOPAJE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se

exhorta al gobierno federal, a sus unidades administrativas y a sus órganos desconcentrados, a implementar campañas de prevención de las adicciones, renovar los controles en materia de consumo de sustancias ilícitas y la aplicación de exámenes anti-dopaje de manera periódica entre sus correspondientes funcionarios públicos. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 319

#### CREACIÓN DE UN TRATADO DE COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIÓN EUROPEA, PARA LA RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES ROBADOS

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a buscar la creación de un tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea, para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, ante el ejercicio de subastas de bienes culturales en otros países. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 321

#### REFORZAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES ANTE EL INCREMENTO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS Y DE NUEVAS DROGAS COMO EL FENTANILO

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Conadic, a reforzar los programas de prevención de adicciones y las campañas informativas que los integran, ante el incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas como el Fentanilo. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 324

#### CREAR UN CATÁLOGO DIGITAL GENERAL DE LOS BIENES CULTURALES QUE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE MUSEOS PÚBLICOS, SECRETARÍAS U ORGANISMOS GUBERNAMENTALES DE LA FEDERACIÓN

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a la Sectur y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a crear un catálogo digital general de los bienes culturales que se encuentran en posesión de museos públicos, secretarías u organismos gubernamentales de la federación. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** 326

#### TRANSICIÓN GRADUAL A HARDWARE Y SOFTWARE NACIONAL USADO POR EMPLEADOS DE LAS OFICINAS GUBERNAMENTALES FEDERALES, ANTE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar una transición gradual a hardware y

software nacional usado por empleados de las oficinas gubernamentales federales en el país, ante los riesgos para la seguridad nacional del uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia para áreas críticas en el desarrollo del país. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 328

#### ADOPCIÓN GENERALIZADA DE TELÉFONOS DE ALTA SEGURIDAD ENTRE ALTOS FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS FEDERALES, ANTE LOS RIESGOS DE CIBERATAQUES

Del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a implementar la adopción generalizada de teléfonos de alta seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las secretarías federales, ante los riesgos de ciberataques. **Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.** . . . . . 331

#### SE INFORME RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE NUESTRO PAÍS EN LOS FONDOS ROTATORIO Y ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OPS/OMS

Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a dar a conocer de manera puntual los alcances, riesgos y beneficios de la participación de nuestro país en los Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** . . . . . 333

#### SE INCLUYA EL MIELOMA MÚLTIPLE EN LA COBERTURA DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR

Del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General, a incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar. **Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.** 335

#### EXHORTO PARA LIBERAR DEL AMBULANTAJE LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO MUNICIPIO DE OAXACA

De la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, a liberar las calles de su centro histórico de los puestos ambulantes actualmente establecidos y reubicar a dichos comerciantes. **Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.** . . . . . 337

## INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Se informa a la Comisión Permanente los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 15 de enero de 2020 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta.»

### «Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 61, 73 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de la Cámara de Diputados.

3. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

4. Que reforma el artículo 103 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.

5. Que reforma la denominación y el artículo 5o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

6. Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, suscrita por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

7. Que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

**Turno:** Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

8. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados.

9. Que adiciona un artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, de la Ley de Puertos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

11. Que reforma los artículos 75 y 170 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

12. Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

13. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, en materia de investigaciones oceanográficas, suscrita por la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

**Turno:** Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.

14. Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

15. Que reforma el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

16. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Radio, Televisión, y Cinematografía de la Cámara de Senadores.

17. Que expide la Ley de Coordinación entre los Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México en materia de capitalidad, Reglamentaria del Apartado B del artículo 122

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

18. Que reforma y adiciona los artículos 449 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

19. Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

20. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

21. Que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

22. Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de lengua incluyente, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

23. Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada

Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

24. Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

25. Que reforma los artículos 9o., 23 y 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.

26. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

27. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, suscrita por la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Comunicaciones y Transportes, con opinión de la Comisión de Marina, de la Cámara de Diputados.

28. Que reforma el artículo 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

29. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente, en materia de cambios al ordenamiento ecológico del territorio nacional, suscrita por el diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

30. Que reforma los artículos 42 y 49 Bis de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.

31. Que reforma el artículo 81 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, suscrita por la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores.

32. Que reforma los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.

### Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los entes públicos federales y estatales que tengan a su cargo los sistemas que enuncia el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a realizar todas las gestiones necesarias para interconectar dichos sistemas a la Plataforma Digital Nacional, a cargo de los diputados Marco Antonio Andrade Zavala, Sergio Carlos Gutiérrez Luna y del senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Insabi y a la Secretaría de Salud, a hacer públicos los tabuladores de cuotas de recuperación en los servicios de salud y a explicar

a la población cuáles tratamientos y medicamentos no serán gratuitos, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a publicar las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, suscrito por el diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF, a adoptar las medidas que sean necesarias para proporcionar atención psicológica a niñas, niños y adolescentes que viven en familias disfuncionales o que son objeto de abandono de sus padres, suscrito por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al CSG a, reforzar las normas en referencia a la alimentación y nutrición hospitalaria y asegurar su cumplimiento, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se cita a los titulares de la SHCP, de la Secretaría de Salud y del INSABI, a comparecer ante esta soberanía para esclarecer la situación caótica que prevalece en la operación y funcionamiento del Instituto, así como la situación financiera que guarda el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos canalizado hacia el mismo Instituto, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y diversas dependencias, a implementar acciones para prevenir y controlar incendios forestales en el territorio nacional, suscrito por el senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, relativo a la política pública de vacunación del gobierno federal, suscrito por la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a informar los avances sobre la investigación de las llamadas de extorsión realizadas a las oficinas de la Cámara de Senadores, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a remitir un informe detallado de las convocatorias realizadas a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, suscrito por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INSABI, a instruir la revisión, atención y sanción por las diversas irregularidades en los cobros y condicionantes que se están aplicando a los beneficiarios en materia de atención médica, así como a la SFP, a investigar y sancionar a los funcionarios públicos involucrados en la autorización y ejecución de dichos cobros y condicionantes, suscrito por la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de Puebla y Guerrero, a incorporar la modalidad de violencia política contra las mujeres en su marco jurídico, suscrito por la diputada Claudia Reyes Montiel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inapam, a entregar y difundir un informe pormenorizado del estado que guarda la estrategia “Sistema de Empacado Voluntario de



Mercancías” correspondiente al Programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores, suscrito por la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la Semarnat, elabore y publique a la brevedad el Programa de Manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en Nuevo León, a cargo del diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que, en tanto concluya el proceso de enajenación del avión presidencial, sea utilizado para auxiliar a la población en casos de desastres naturales, así como para apoyar la protección de la salud de los mexicanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a emitir el reglamento y lineamientos que contengan normatividad sobre el control medicinal del cannabis, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, al Conapo y al COESPO de Veracruz, a diseñar programas específicos de acción focalizada para atender a los municipios que presentan mayor índice de embarazo adolescente en el estado, suscrito por la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE, a modificar la NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde un 10 por ciento en las áreas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Monterrey, suscrito por la diputada Mónica Almeida López y diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a ejercer su facultad de atracción en diversas investigaciones que permanecen en impunidad en Oaxaca, suscrito por el senador Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades federales y locales, a tomar las medidas necesarias para atender la emergencia del servicio de salud en nuestro país, a cargo del senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, relativo a las fallas en la puesta en marcha del INSABI, suscrito por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fiscalías y procuradurías de 11 entidades federativas, a brindar información actualizada sobre personas desaparecidas en sus estados a la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a implementar las acciones, estrategias y políticas públicas necesarias, con motivo del incremento en el número de casos de mujeres víctimas de violencia familiar en el estado, a cargo del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a implementar las acciones para prevenir los accidentes de ciclistas, suscrito por

la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades de Jalisco, a revisar la aplicación del programa Mochila Segura o implementar un programa que prevenga la introducción y portación de armas y drogas a los centros educativos, suscrito por el diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, para realizar un extrañamiento al Ejecutivo federal, por incumplir con la Ley de Planeación al no publicar en tiempo y forma los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales relativos al PND 2019-2024, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales, a incorporar en sus constituciones la igualdad entre mujeres y hombres de forma expresa, de tal manera que se armonicen con la Constitución Federal, suscrito por la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a designar un porcentaje del Fopreden para equipamiento y adquisición de uniformes nuevos de los cuerpos de bomberos de los estados y municipios con mayor riesgo de incendios, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a emprender acciones para el cumplimiento de la NOM-059-Semarnat-2010 en cuanto a la protección de la especie Echinocactus Platyacantus y evitar su saqueo en la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, suscrito por el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, a implementar las acciones necesarias para colocar, de manera gratuita, despachadores de toallas sanitarias en las escuelas de educación básica, media y media superior del país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a revisar y en su caso revocar el incremento a las tarifas del transporte público en la entidad, suscrito por el senador Ricardo Moreno Bastida, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí, a fin de que dé cumplimiento a los artículos transitorios segundo y noveno del decreto 1045 publicado el pasado 20 de agosto de 2018, que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de dicha entidad, a cargo del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que, en coordinación con la empresa Roadis, titular de la concesión de la autopista Monterrey-Salttillo, tomen las acciones necesarias para mejorar las condiciones de seguridad a lo largo de dicha autopista, suscrito por la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a hacer público el Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrito por la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt, a informar a esta soberanía sobre la puntual entrega de recursos públicos tendientes a garantizar el adecuado

funcionamiento del foro consultivo científico y tecnológico, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a informar a esta soberanía las causas que inciden en el incremento de infecciones adquiridas en los hospitales durante 2019, sobre las correspondientes al incremento de casos de influenza estacional, así como el impacto que ha tenido en ellas, la cancelación del programa Prospera, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a sus homologas en las entidades federativas, a llevar a cabo la implementación de acciones preventivas de política pública que mejoren las condiciones de seguridad al interior y en el entorno de los planteles escolares públicos y privados de educación básica, suscrito por la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a incluir a la tortilla de maíz en la canasta básica, suscrito por los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

39. Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad por las lamentables pérdidas humanas, ecológicas y económicas, ocurridas por los incendios forestales registrados en Australia, suscrito por la senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a posponer, hasta enero de 2021, el incremento en las tarifas del servicio de transporte público y realizar un diálogo con los diversos sectores de la sociedad mexicana para formular y acordar acciones integrales para

mejorar la calidad, la seguridad y la accesibilidad del servicio, suscrito por la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a establecer una reunión de trabajo con el Gobierno de Guanajuato y el municipio de Salamanca para que restablezcan el Plan Salamanca, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que, transparente y garantice el acceso a la información de todas las negociaciones y acuerdos realizados por nuestro país en los diversos foros y reuniones internacionales, suscrito por el diputado Héctor Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz, a informar y transparentar los motivos, montos y destino de los recursos económicos solicitados por concepto de préstamos, suscrito por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a aplicar las reglas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas y liberen fondos a los estados de la República debido a la disminución con respecto al programa de la Recaudación Federal Participable, suscrito por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a que a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil y las dependencias responsables de las bitácoras de mantenimiento de las aeronaves, hagan público un informe pormenorizado de los registros actualizados del

mantenimiento de los aviones de las diferentes aerolíneas mexicanas que operan en el país, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que, armonice los contenidos del acuerdo 286 con el artículo 145 de la Ley General de Educación, suscrito por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, a informar a esta soberanía sus conclusiones respecto del proceso de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano realizada entre los días 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, en diversos estados sobre el proyecto Tren Maya, suscrito por los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Conafor y de la Secretaría de Bienestar, a restringir la aplicación del programa Sembrando Vida, en zonas forestales siniestradas por incendios y tala clandestina, suscrito por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

49. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que, a través de la Secretaría de Salud, diseñe una estrategia integral para prevenir y contrarrestar el incremento del sobrepeso y la obesidad que padecen millones de mexicanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, a efecto de que se establezcan objetivos e indicadores claros respecto a los ejes transversales mencionados en el PEF 2020, los cuales, deberán ser

detallados mediante informes trimestrales y, enviados a la Cámara de Diputados, suscrito por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que, a través de la Segob y de SSPC, a fortalecer sus acciones a fin de identificar, prevenir y sancionar el delito de extorsión e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, herramientas y plataformas digitales para promover la cultura de la denuncia, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a cumplir con el Plan de acción en salud mental 2013-2020 elaborado por la OMS, suscrito por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco del Bienestar y a la SHCP, a actualizar periódicamente la información financiera de dicho banco, transparenten todo lo referente a la construcción de las sucursales bancarias e informen a esta soberanía sobre la estrategia y/o acciones complementarias que se realizarán en materia de inclusión financiera y digitalización, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar el programa Mochila Segura de manera permanente en las escuelas, a fin de salvaguardar y proteger la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, suscrito por la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SSPC, en coordinación con las entidades federativas, a implementar programas y protocolos para la prevención y eliminación de la violencia en las escuelas, a fin de garantizar

un entorno seguro para los alumnos, el personal docente y administrativo, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

56. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat y de la Profepa, a implementar operativos para vigilar la normatividad ambiental, en los trabajos de desmonte y las obras civiles de construcción que se desarrollan dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en el estado de Nuevo León, suscrito por los diputados José Martín López Cisneros y Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.

57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a sus unidades administrativas y a sus órganos desconcentrados, a implementar campañas de prevención de las adicciones, renovar los controles en materia de consumo de sustancias ilícitas y la aplicación de exámenes anti-dopaje de manera periódica entre sus correspondientes funcionarios públicos, suscrito por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

58. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la Secretaría de Cultura y al INAH, a buscar la creación de un tratado de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Unión Europea, para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos, históricos y culturales robados, ante el ejercicio de subastas de bienes culturales en otros países, suscrito por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

59. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la CONADIC, a reforzar los programas de prevención de adicciones y las campañas informativas que los integran, ante el incremento del consumo de sustancias ilícitas y la peligrosidad de nuevas drogas como el Fentanilo, suscrito por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

60. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, a la Sectur y al INAH, a crear un catálogo digital general de los bienes culturales que se encuentran en posesión de museos públicos, secretarías u organismos gubernamentales de la federación, suscrito por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar una transición gradual a hardware y software nacional usado por empleados de las oficinas gubernamentales federales en el país, ante los riesgos para la seguridad nacional del uso de innovaciones de origen extranjero y la necesidad de generar tecnología propia para áreas críticas en el desarrollo del país, suscrito por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a implementar la adopción generalizada de teléfonos de alta seguridad, propios, adquiridos o modificados, entre altos funcionarios de las secretarías federales, ante los riesgos de ciberataques, suscrito por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Primera Comisión de Trabajo.

63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a dar a conocer de manera puntual los alcances, riesgos y beneficios de la participación de nuestro país en los Fondos Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

64. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General, a incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Fondo de Salud para el Bienestar, suscrito por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Segunda Comisión de Trabajo.

65. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, a liberar las calles de su centro histórico de los puestos ambulantes actualmente establecidos y reubicar a dichos comerciantes, suscrito por la diputada Dulce Alejandra García Morlán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

**Turno:** Tercera Comisión de Trabajo.»

---

## INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

---

«Iniciativa que reforma los artículos 61, 73 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Lorena Villavicencio Ayala, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción I del artículo 61, se reforma el párrafo primero del artículo 73 y el inciso A) de la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

#### Exposición de Motivos

#### I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los mecanismos de control constitucional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico, ya que instituye una estructura para el funcionamiento del Estado mexicano, prevé los derechos fundamentales que toda persona goza por el sólo hecho de encontrarse en territorio

nacional, y establece los mecanismos necesarios para la protección de la propia norma suprema.

La Constitución, como norma suprema, determina los procesos de creación y validez del resto del ordenamiento jurídico, y tiene como función, entre otras, configurarse como organizadora del ejercicio del poder, de la vida en sociedad y como garante de derechos fundamentales, además de **establecerse como instrumento límite del ejercicio del poder**, en su cualidad de norma que establece sistemas de control del ejercicio del poder, tanto interorgánicos como intraorgánicos.<sup>1</sup>

En este sentido, las disposiciones constitucionales no son simples reglas o principios, sino que son mandatos fundacionales que surgen de un órgano popular, por lo que se constituyen en normas obligatorias que deben ser observadas por todos.

Por su importancia, se han establecido diversas formas de defensa de la Constitución, para que lo ordenado sea estrictamente cumplido, esto es, los **denominados medios de control constitucional**.

**Los medios de control constitucional son mecanismos jurídicos** por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional, a través de la protección de las normas generales y de los actos de autoridad, como cúspide del **estado constitucional social democrático de derecho**.

Debemos resaltar que el control de constitucionalidad representa la garantía democrática inherente a los estados constitucionales modernos, en un marco de pesos y contrapesos, toda vez que se erige en un mecanismo de control del poder público.

En México, el sistema jurídico previene seis medios de control constitucional. El Juicio de Amparo;

1. Las acciones de inconstitucionalidad;
2. Las controversias constitucionales;
3. El juicio para la protección de los derechos político electorales; y
4. El juicio de revisión constitucional electoral.
5. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y

## 6. El juicio político.

Cabe señalar que los cuatro primeros instrumentos, son considerados como medios de control constitucional de orden jurisdiccional; y, los dos mecanismos restantes, son herramientas de control no jurisdiccionales.

De todos ellos, los instrumentos que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atender de manera exclusiva, son:

1. Las controversias constitucionales;
2. Las acciones de inconstitucionalidad;
3. El juicio de amparo, en lo referido a:
  - A. Amparos directos trascendentales.
  - B. Recursos.
  - C. Casos de incumplimiento de sentencias o repetición de actos reclamados.
  - D. Casos de violaciones a la suspensión del acto reclamado o de admisión de fianzas ilusorias o insuficientes.
  - E. Determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares.

Como puede observarse, del entramado jurídico en materia de control constitucional, existen, al menos, dos grandes vertientes:

En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación a través de: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

Es decir, contamos con un **sistema centrado**, en una parte, y, **difuso** en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la SCJN para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional.

Al efecto la SCJN de la nación señala:

“**Sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano.**<sup>2</sup> Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente: y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número LXX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.

Nota: En la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó: “Único. Han quedado sin



efectos las tesis jurisprudenciales números P/J. 73/99 y P/J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘Control judicial de la Constitución. Es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación.’ y ‘control difuso de la constitucionalidad de normas generales. No lo autoriza el artículo 133 de la Constitución.’, conclusión a la que se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.

La tesis P/J. 73/99 y P/J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 283/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.

Por ejecutoria del 19 de septiembre de 2012, la Segunda Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 286/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.”

Como puede observarse, México ha logrado un gran avance en materia de control constitucional en los últimos años; sin embargo, aún falta dar pasos en la búsqueda del pleno respeto a los derechos humanos, en el marco de la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En este orden de ideas, derivado de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, por la que se modificó la denominación del capítulo I del título primero y se reconocen constitucionalmente los derechos humanos de las personas y establece las garantías para lograr su efectiva protección, e incorpora disposiciones en materia de derechos humanos que den cumplimiento a los tratados internacionales de los que México sea parte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,<sup>3</sup> resulta claro que **todas las autoridades del país se encuentran obligadas a velar por el cumplimiento de los derechos humanos**, bien sean de fuente nacional (**constitucional**) o internacional (**convencional**).

En este sentido los órganos jurisdiccionales, el mandato del artículo 1o. constitucional debe correlacionarse con el artículo 133 de la misma Carta Magna a fin de determinar el marco dentro del que se debe realizar el control de convencionalidad.

Los artículos 1o. y 133 del Código Político fundamental a la letra señalan:

“**Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

**Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.**

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

**Artículo 133.** Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda



**la Unión.** Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”

En cada caso, lo relevante consiste en saber aquello contra lo que se contrasta la norma jurídica impugnada. Dependiendo del tipo de proceso de que se trate, en algunos casos podrá ser cualquier norma constitucional, mientras que, en otros, sólo será posible respecto de un tipo específico, como los derechos humanos, **lo que se realiza primordialmente mediante el juicio de amparo, lo que ha hecho de este instrumento el medio de control más utilizado en nuestro sistema jurídico.**

## II. Improcedencia del Juicio de Amparo contra reformas o adiciones constitucionales

El amparo es un medio de control constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los gobernados que pudieran verse afectados por cualquier norma, acto u omisión emanado de una autoridad estatal o de un particular, en los casos específicos en que la ley de la materia lo permite.

El Juicio de Amparo tiene su fundamento, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, el juicio constitucional se sujeta en cuanto a su procedencia a reglas de carácter técnico-procesal cuyo incumplimiento acarrea necesariamente su improcedencia. Así, las causas de improcedencia del juicio de pueden ser de naturaleza constitucional, legal o jurisprudencial, atendiendo a su fuente.

Las causas de improcedencia contempladas en la Constitución obedecen a la necesidad de preservar determinadas decisiones políticas fundamentales, mientras que las previstas en la Ley de Amparo, tienden, en primer lugar, a reiterar a nivel legal las hipótesis contempladas en la Carta Magna y, en segundo término, a explicitar y enumerar las hipótesis de incumplimiento de aquellos requisitos técnico-procesales. De lo anterior se desprende que en lo relativo a la improcedencia constitucional, es el propio constituyente quien detecta situaciones concretas cuya protección se garantiza vedando al amparo la posibilidad de promoverse tratándose de dichos supuestos:

1. En materia electoral, decretado en los artículos 41fracción VI; 60, segundo y tercer párrafo; y, 99, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM);

2. Inconstitucionalidad de normas electorales, previstos en los artículos 105 fracción II, antepenúltimo párrafo, de la CPEUM;

3. Decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, señaladas en el artículo 100, penúltimo párrafo, de la CPEUM;

4. Resoluciones en materia de juicio político, asentadas en el artículo 110, sexto párrafo, de la CPEUM;

5. Resoluciones en materia de declaración de procedencia, establecidas en el artículo 111, sexto párrafo, de la CPEUM;

6. Resoluciones de Tribunales Colegiados de Circuito en materia de revisión fiscal-administrativa, dispuestas en el artículo 104, fracción III, de la CPEUM;

7. Resoluciones en materia de conflictos de límites entre entidades federativas, mandatadas en los artículos 46 y 105, fracción I, de la CPEUM;

8. Resoluciones en materia de transparencia provenientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el caso de los sujetos obligados, estatuidas en el artículo 6º, apartado A, fracción VIII, séptimo párrafo, de la CPEUM;

9. Actos del proceso de selección y designación de Comisionados a la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, instituidas en el artículo 28, último párrafo, de la CPEUM, ya sea porque se prevean medios de defensa específicos o bien, porque estima que la preservación de la decisión política fundamental resulte indispensable para el Estado Mexicano y por lo mismo se califica de inatacable.

**Fuera de estos supuestos previstos por la Constitución y reiterados en la legislación secundaria, las restantes causas de improcedencia previstas en la ley de la materia se limitan a enumerar las hipótesis de incumplimiento de aquellos requisitos de carácter técnico-procesal a que se sujeta el juicio,** los cuales permiten a la acción de amparo ser idónea para lograr el fin que se pretende.

En la parte que nos interesa, respecto del contenido de esta iniciativa, el artículo 61 fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente “contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Si partimos de la base de que una Constitución es, en esencia la expresión normativa del poder dominante, podemos concluir que dicha hipótesis de improcedencia tiende a preservar una decisión política fundamental y por este motivo debería haber sido prevista por el propio constituyente en el cuerpo de la Carta Magna, sin embargo, no hay disposición alguna en dicho texto que dé fundamento a lo que establece el legislador ordinario en la norma secundaria, motivo por el cual, dicha disposición podría estimarse en sí misma inconstitucional.

Sin embargo, podría estimarse que la disposición legal en análisis encuentra su fundamento en el principio de supremacía constitucional, en este caso la limitante sería válida siempre que nos encontráramos en un Estado de Derecho pleno, donde el respeto a la Constitución por parte de todos los actores sociales fuera la regla y sus mecanismos de protección excepcionales.

Pero, ¿qué pasaría en aquellos casos en los que arbitrariamente se pasa por encima de la propia norma fundamental y se le reforma y modifica al antojo y conveniencia del poder dominante?

Tal y como ha ocurrido en la historia reciente del país, en anteriores gobiernos, particularmente en los últimos 37 años, donde el poder estatuido ha modificado preceptos fundamentales de la Carta Magna, sin ningún impedimento, echando atrás conquistas sociales y soberanas, tales como: la contra-reforma al artículo 27 constitucional en 1992, cuando se dio fin al reparto agrario y se permitió el arrendamiento y compra de tierras a gran escala, como en tiempos del Porfirio Díaz; o la contra-reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 de la Carta Magna para permitir la inversión extranjera en materia de hidrocarburos, como antes de la expropiación petrolera en 1936.

Frente a estos actos de autoridad, el juicio de amparo, debió haber sido el instrumento jurídico al que teóricamente deben tener acceso los ciudadanos para defenderse. Pero no fue así por una restricción establecida en una ley secundaria que contraviene lo dispuesto por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17 y por el Pacto de San José en su numeral 25.

Entonces ¿por qué la prohibición impuesta por el artículo 61 fracción I de la Ley de Amparo?

Para responder a tales interrogantes, debemos recordar que antes de que existiese la prohibición expresa contenida en el artículo 61, fracción I, ya se habían intentado diversos juicios contra distintos procesos de reformas a la Carta Magna, en la mayoría de los cuáles el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que “lo único que no puede ser inconstitucional es la propia Constitución”, además de que “el principio de relatividad de las sentencias implicaría que existiesen diferentes textos constitucionales” en un mismo Estado, tal y como se asita en la siguiente tesis de jurisprudencia:

**“Adiciones o reformas a la Constitución federal. Es improcedente el juicio de amparo en su contra.”<sup>4</sup>** El juicio de amparo es uno de los mecanismos a través de los cuales se hace efectiva la supremacía constitucional, la cual hace de la Ley Fundamental el referente de validez de la producción normativa que se somete a juicio; de ahí que, por ser auto referente, la Carta Magna no puede ser juzgada a la luz de ella misma. Luego, al ser la Constitución Federal la piedra angular del resto del sistema jurídico, rige en únicos e iguales términos para todos; y es justo en este punto donde se erige como el gran obstáculo que impide su análisis a través del juicio de amparo, ya que, en caso de dictarse una sentencia estimatoria, se producirían resultados inadmisibles dentro del sistema jurídico, pues no podría existir una Constitución para los quejosos amparados y otra para los demás gobernados. Por tanto, la improcedencia del juicio en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una limitación natural impuesta por el diseño constitucional del propio juicio, cuya ingeniería lo repele, en virtud de que lo único que no puede ser inconstitucional es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptar la procedencia del juicio contra reformas constitucionales, sea en lo atinente a aspectos de procedimiento legislativo o de contenido normativo, trastocaría elementos centrales del sistema de división de poderes y trastornaría, a la vez, el del propio juicio constitucional.

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Queja 68/2016. Juan Romero Tenorio y otros. 17 de mayo de 2016. Mayoría de votos. Disidente: Armando Cruz

Espinosa. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretario: Jerson Sastré Castelán”.

Tales postulados resultan ser parcialmente ciertos, por las siguientes razones, a saber:

**A) Porque es evidente que no puede ser inconstitucional lo que por virtud de una reforma o adición ya forma parte de la Constitución; pero sólo en los casos en que se hayan respetado las formas y procedimientos previstos en la misma para ello.**

En caso contrario cabe preguntar que, **si en el supuesto que el proceso de reformas o adiciones a la Carta Magna no se ajusta a los postulados constitucionales que en ella misma se establece y que debe observar el poder reformador de la Constitución, entonces: ¿debemos considerar que el resultado de dicho proceso viciado, válidamente forma parte de la norma suprema? La respuesta es simple: NO.**

Pensar lo contrario sería una aberración jurídica y desde luego debe combatirse por los medios de control al alcance de aquellos que resulten afectados. En este último caso, conviene precisar que el amparo es el único remedio al alcance de cualquier gobernado, pues las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales exclusivamente legitiman para su promoción a determinados sujetos u órganos del Estado, como los casos fijados en el artículo 105, fracciones I y II del código político fundamental.<sup>5</sup>

Es por ello que se considera conveniente ir más allá de lo plasmado, a fin de hacer viable la posibilidad combatir por vía de amparo ya no sólo el proceso, sino el resultado, cuando sean contrarias a los principios básicos establecidos por el constituyente originario, es decir al espíritu o esencia de nuestra Constitución.

Por ello se considera factible derogar la fracción I del artículo 61, de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

“**Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

I. Se deroga

II. ...”

**B) Respecto del obstáculo que representa la relatividad de las sentencias, a fin de evitar que con una eventual sentencia**

concesoria del amparo se creen diversas constituciones para un mismo estado, es dable adicionar el artículo 73 de la Ley de Amparo, para introducir una excepción necesaria a ese principio:

“**Artículo 73.** Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, **salvo aquellos casos en los que se reclamaran reformas o adiciones a esta Constitución por estimarlos contrarios a los principios fundamentales que la estructuran de origen así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte o cuando se reclamaran procedimientos de reformas violatorios a las formalidades previstas para tal efecto, supuestos en los que la sentencia de amparo que dicte el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá efectos generales inmediatos.**”

### III. Objeto de la iniciativa

Esta iniciativa tiene por objeto abrir la posibilidad de revisar modificaciones a la Constitución vía juicio de amparo, y con ello ampliar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la naturaleza del órgano revisor. Es decir, ejercer medios de control constitucional en contra de la posible violación a las normas del procedimiento reformatorio de la Constitución federal.

Al efecto debemos señalar que hasta el año 2002 **sí procedía la revisión del procedimiento de reforma constitucional, pero no del contenido. Se partía de la idea que no podía impugnarse, mediante juicio de amparo, el contenido de alguna disposición constitucional, pero que sí era posible dirigir una demanda de garantías en contra del procedimiento reformatorio.**

En ese caso, se decía, el interés jurídico se identificaba con los efectos que produciría la vigencia del nuevo precepto constitucional que podrían producir un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado.

El criterio anterior quedó asentado en los siguientes términos:

**“Reforma constitucional, amparo contra su proceso de creación. El interés jurídico deriva de la afectación que produce, en la esfera de derechos del quejoso, el contenido de los preceptos modificados.”**<sup>6</sup> El pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que amparo en revisión 186/2008 cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante el juicio de amparo, por violación al principio de legalidad. Asimismo, estableció que la circunstancia de que aun cuando el proceso de reforma hubiese sido elevado a la categoría de norma suprema, tal situación no podría desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que de ser así no habría forma de remediar el posible incumplimiento de las formalidades consagradas en el artículo 135 de la Carta Magna ni, por ende, podría restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, con lo que se autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo sólo atacable el proceso de reforma correspondiente, y el interés jurídico se identifica como la tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, la cual autoriza al quejoso el ejercicio de los medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, debe concluirse que el interés jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma relativo debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son éstos los que producen un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado.

Amparo en revisión 1334/98. Manuel Camacho Solís. 9 de septiembre de 1999. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el nueve de septiembre en curso, aprobó, con el número LXII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación

es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a nueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: El criterio contenido en esta tesis fue superado por la jurisprudencia P/J. 39/2002 del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: “Procedimiento de reformas y adiciones a la constitución federal. No es susceptible de control jurisdiccional.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1136.”

Por otra parte, el amparo en revisión 186/2008, establece los distintos criterios que la corte ha venido sosteniendo en los últimos años y argumenta:

“este tribunal pleno estima que los precedentes citados sugieren interesantes puntos de vista con respeto de la naturaleza del Poder Reformador de la Constitución: Por un lado, **se reconoce que el referido poder no puede ser ilimitado, al menos en lo que se refiere al ejercicio de las facultades constitucionales relativas al procedimiento de reforma;** por otro, se llega a sostener que se trata de un poder ilimitado soberano”<sup>7</sup>

Así, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considero que:

**“no se puede identificar el poder reformador con el poder constituyente,** porque entonces queda en entredicho el principio jurídico de supremacía constitucional, dando prevalencia al principio político de soberanía popular... **las posibilidades de actuación del Poder Reformador de la Constitución son solamente las que el ordenamiento constitucional le confiere.** Asimismo, lo son sus posibilidades materiales en la modificación de los contenidos de la Constitución. Esto último, porque el poder de reforma que tiene la competencia para modificar la Constitución, pero no para destruirla... se está en condiciones de concluir que, **si el poder reformador es un poder limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado constitucional debe prever medios de control sobre aquéllos actos reformativos que se aparten de las reglas constitucionales.** Es decir, **cabe la posibilidad de ejercer medios de control constitucional en contra de la posible violación a las normas del procedimiento reformativo.** En el caso mexicano ¿cuáles serían estos

límites? Indudablemente, en el caso de los **individuos, el juicio de amparo** y en el caso de los Poderes del Estado, la controversia constitucional. Los tribunales competentes de dichos medios de control, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la cabeza, están facultados constitucionalmente para ejercer ese control sobre los procedimientos de reforma que puedan poner eventualmente en entredicho los valores antes mencionados”.<sup>8</sup>

Es decir, **a pesar de que la SCJN ya había declarado desde 2008 que era procedente la revisión del procedimiento de reforma**, en el cumplimiento del órgano revisor con el artículo 135 constitucional, de manera por demás **incomprensible**, la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en su artículo 61 numeral I estableció que no es posible la revisión de las reformas a la Constitución por la vía del amparo, por ser causa de improcedencia.

Esta prohibición incluso está en contra de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que incorporó al orden jurídico nacional, entre otros puntos, la INTERPRETACIÓN CONFORME y el BLOQUE DE CONVENCIONALIDAD.

De acuerdo con lo arriba señalado, el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 17 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estamos obligados a respetar conforme al bloque de convencionalidad, mismos que a letra señalan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos<sup>9</sup>:

**“Artículo 17.** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

**Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.**

...”

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)<sup>10</sup> estatuye:

**“Artículo 25.** Protección Judicial.

**1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.**

2. Los estados parte se comprometen:

**a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;**

**b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y**

**c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.**

Adicionalmente, con respecto a considerar la protección judicial como un pilar fundamental del estado de derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:

“...Esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención...”<sup>11</sup>

Y, además que:

“[...]. No basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es decir, deben ser capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, en el sentido de la Convención”.<sup>12</sup>

Asimismo, debe considerarse el hecho de que existe jurisprudencia, la cual señala que, como parte del sistema de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos, se encuentra tutelado, y señala:

**“Derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa.”**<sup>13</sup> El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa

adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos.

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.

Reclamación 5/2012. José Ascención Mojica Mendoza. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.”

En este orden de ideas, a fin para garantizar el **derecho humano** que toda persona tiene a contar con “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención Interamericana de Derechos Humanos” se propone una solución simple, posible y trascendente: Reformar la Ley de Amparo en tres artículos.

**1. Se propone derogar la fracción I del artículo 61,** con lo que se elimina como causal de improcedencia del Juicio de Amparo el promoverlo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

**2. Se reforma el párrafo primero del artículo 73;** para establecer que en las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, **salvo aquellos casos en los que se reclamaran reformas o adiciones a esta Constitución por estimarlos contrarios a los principios fundamentales que la estructuran de origen, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República,**

que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte o cuando se reclamaran procedimientos de reformas violatorios a las formalidades previstas para tal efecto, supuestos en los que la sentencia de amparo que dicte el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá efectos generales inmediatos; y,

**3. Se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 107, para permitir el amparo indirecto contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,** además de los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos.

Una reforma de esta magnitud, es perfectamente posible, jurídica y materialmente. Considerando las disertaciones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debemos materializar una reforma que permita a los ciudadanos hacer efectivo el derecho humano a contar con un recurso judicial efectivo, como el Juicio de Amparo, sobre el procedimiento de reforma constitucional y sus alcances, con la finalidad de que no contravengan los derechos fundamentales previstos en los primeros 29 artículos constitucionales, los derechos y prerrogativas básicas de los ciudadanos o gobernados contenidos en artículos como el 31 y 35 de la propia Constitución, ni la soberanía nacional ni la forma de gobierno.

Es claro que debe reformarse la norma para dotar de facultades constitucionales y legales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar las reformas constitucionales.

La protección de los derechos fundamentales permite dirigir una demanda de garantías en contra del procedimiento reformatorio. Pues en ese caso el interés jurídico se identificaría con los efectos que produciría la vigencia del nuevo precepto constitucional si estos ocasionan un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado.

No debemos perder de vista que, **si el poder reformador es un poder limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un estado constitucional debe prever medios**

de control sobre aquéllos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. Es decir, cabe la posibilidad de ejercer medios de control constitucional en contra de la posible violación a las normas del procedimiento reformatorio.

Para mayor comprensión de lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo:

**Ley de Amparo**

Texto Vigente	Propuesta de Modificación
<p><b>Artículo 61.</b> El juicio de amparo es improcedente:</p> <p>I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;</p> <p>II. a XXIII...</p>	<p><b>Artículo 61.</b> El juicio de amparo es improcedente:</p> <p>I. Se deroga.</p> <p>II. a XXIII...</p>
<p><b>Artículo 73.</b> Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p><b>Artículo 73.</b> Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, salvo aquellos casos en los que se reclamaran reformas o adiciones a esta Constitución por estimarlos contrarios a los principios fundamentales que la estructuran de origen, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte o cuando se reclamaran procedimientos de reformas violatorios a las formalidades previstas para tal efecto, supuestos en los que la sentencia de amparo que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá efectos generales inmediatos.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Artículo 107.</b> El amparo indirecto procede:</p>	<p><b>Artículo 107.</b> El amparo indirecto procede:</p> <p>I. ...</p>

<p>I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.</p> <p>Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:</p> <p>a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;</p> <p>b) ... a g) ...</p> <p>II. a IX...</p>	<p>...</p> <p>a) Adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;</p> <p>b) ... a g) ...</p> <p>II.... a IX....</p>
--	---



Por las razones anteriormente expuestas se propone a esta soberanía

**Decreto por la que se deroga la fracción I del artículo 61, se reforma el párrafo primero del artículo 73 y el inciso A) de la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:**

**Artículo Único. Se deroga la fracción I del artículo 61; se reforma el párrafo primero del artículo 73 y el inciso a) de la fracción I del artículo 107 de La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:**

**Artículo 61.** El juicio de amparo es improcedente:

**I. Se deroga.**

**II. a XXIII. ...**

**Artículo 73.** Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, **salvo aquellos casos en los que se reclamaran reformas o adiciones a esta Constitución por estimarlos contrarios a los principios fundamentales que la estructuran de origen, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte o cuando se reclamaran procedimientos de reformas violatorios a las formalidades previstas para tal efecto, supuestos en los que la sentencia de amparo que dicte el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá efectos generales inmediatos.**

...

...

...

...

**Artículo 107.** El amparo indirecto procede:

**I. ...**

...

**a) Adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;**

**b) a g) ...**

**II. a IX. ...**

### **Artículo Transitorio**

**Único.** La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### **Notas**

1 Karl Loewenstein. Teoría de la Constitución. Editorial Ariel. 1986. Página 232 y ss.

file:///C:/Users/usuario/Downloads/TEORIA\_DE\_LA\_CONSTITUCION\_-\_KARL\_LOEWENS.pdf

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano. Tesis: P. LXX/2011 (9a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 160480. Pleno Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Pág. 557. Tesis Aislada (Constitucional).

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=160480&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0>

3 DOF 10 de junio de 2011. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reformaron los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM\\_ref\\_194\\_10jun11.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10jun11.pdf)



4 SCJN. Adiciones o reformas a la Constitución federal. Es improcedente el juicio de amparo en su contra. Tesis: I.18o.A.3 CS (10a.).Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Pág. 2833, Tesis Aislada (Común, Constitucional). Esta tesis se publicó el viernes 28 de octubre de 2016 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2012958&Clase=DetalleTesisBL>

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 105 fracciones I y II. Páginas 98 a 101.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_090819.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf)

6 SCJN. Reforma constitucional, amparo contra su proceso de creación. El interés jurídico deriva de la afectación que produce, en la esfera de derechos del quejoso, el contenido de los preceptos modificados. Tesis: P. LXII/99. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 193249. Pleno Tomo X, septiembre de 1999, Página 11. Tesis Aislada (Constitucional).

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=193249&Clase=DetalleTesisBL>

7 SCJN. Amparo en revisión 186/2008. Quejosa: Ponente: ministro José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintinueve de septiembre de dos mil ocho.

[https://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia//docs/Ministros2/A\\_GOM\\_Ejecutoria\\_186-2008.pdf](https://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia//docs/Ministros2/A_GOM_Ejecutoria_186-2008.pdf)

8 Ídem.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 17, página 19.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\\_090819.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf)

10 Organización de Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32). San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969.

[https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm)

11 Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34. Página 22. Punto 82.

[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_34\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_34_esp.pdf)

12 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. Página 71, Proceso Penal, punto 192.

[http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec\\_149\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf)

13 Derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, tutelado por el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su efectividad no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa. 2001299. XVI.1o.A.T.5 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Pág. 1753.

<https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2001/2001299.pdf>

Palacio Legislativo San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputada Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

### Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

---

#### LEY DE HIDROCARBUROS, LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, Y LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

---

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Hidrocarburos; General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, suscrita por el diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Martín López Cisneros, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se**

**reforma el artículo 48, fracción II de la Ley de Hidrocarburos; se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y se adiciona la fracción XXX del artículo 5 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con el objeto de eliminar obstáculos a la competencia en la regulación de los mercados de hidrocarburos, lo anterior al tenor de la siguiente**

### **Exposición de Motivos**

Mediante decreto del 20 de diciembre de 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía; el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Hidrocarburos, misma que en términos de sus transitorios primero y segundo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, misma que en términos de sus transitorios primero y segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, abrogando la Ley de la Comisión, publicada en el DOF 31 de octubre de 1995.

Las anteriores reformas constitucionales y legales regulan la materia energética, es decir, la industria de los hidrocarburos en nuestro país al establecer en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación secundaria, los ejes rectores, objeto, objetivos de política, reglas y la forma en la que estará organizado el diseño institucional para construir mercados competidos.

En relación con los mercados de gasolinas, diésel y gas licuado del petróleo (LP), el régimen transitorio de la Ley de Hidrocarburos establece que los precios de venta al público de estos combustibles estarán determinados bajo condiciones de libre competencia, y se establecieron una serie de obligaciones e instrumentos de regulación que deberán diseñar e implementar diferentes autoridades a fin de generar espacios para la competencia de manera gradual, por ejemplo, en materia de precios, permisos para llevar a cabo las actividades reguladas, acceso abierto para la infraestructura de transporte por ducto y terminales de almacenamiento, así como especificaciones técnicas sobre combustibles y para la construcción de estaciones de servicio.

Es precisamente esa transformación en el modelo de organización de dicha industria, donde adquiere la obligación el Estado, de mantener información clara de precios, detonar el desarrollo de nueva infraestructura, inducir la modernización y, en general, promover el funcionamiento eficiente de estos mercados.

En ese sentido, la revocación del monopolio de la industria, debe ser esencial, sin traer consigo problemas de suministro, aumentos injustificados de precios en algunas regiones del país o la formación de agentes económicos con posición dominante que pudiera propiciar la realización de conductas anticompetitivas en los mercados de estos combustibles. Para ello, las políticas públicas y medidas aplicadas durante este periodo de transición deben generar las condiciones que permitan transitar hacia un mercado competido de combustibles líquidos.

Para lograr los objetivos que corresponden a la reforma energética, es importante que exista la adopción de principios de libre competencia y competencia en materia de venta, suministro y almacenamiento de hidrocarburos por parte de las autoridades públicas de todos los órdenes e instancias de gobierno, en mercados de alto impacto en la economía nacional y el bienestar para los consumidores, de conformidad con los criterios establecidos en su Plan Estratégico Nacional.

La libre competencia y competencia económica se debe garantizar mediante acciones como: I) investigar y sancionar la realización de prácticas monopólicas; II) prevenir estructuras de mercado que impliquen riesgos a la competencia; y, III) determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia.

Un estudio del Banco de México, que fue señalado por la Comisión Federal de Competencia Económica, en su estudio de los obstáculos que existen para lograr la libre competencia, establece que entre más estaciones de servicio existan en un área: • Menores márgenes; • La disminución en el precio a los consumidores cuando bajan los precios al mayoreo es más rápida (mayor velocidad de traspaso).

Por otro lado, cabe mencionar que la federación tiene la facultad exclusiva de la materia energética, y es a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que es un órgano regulador que promueve el desarrollo energético y el suministro confiable de hidrocarburos y electricidad, dicha comisión está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y

capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

Entre sus múltiples atribuciones, la CRE tiene la facultad de otorgar permisos vinculados a las actividades del sector, entre ellas, otorga permisos para el expendio de petrolíferos, para los efectos de la presente proposición, nos referimos al expendio de gasolinas y diésel que se ofertan al público a través de estaciones de servicio o gasolineras. Esta atribución está regulada en la fracción II del artículo 48 de la Ley de Hidrocarburos.

Las estaciones de servicio, antes de operar deben contar con el permiso correspondiente, las personas físicas o morales deben realizar los trámites ante la Unidad de Petrolíferos de la CRE, encargada de expedir y administrar tales permisos.

En materia de hidrocarburos, existen diversas restricciones en la normativa estatal y municipal que complican la instalación de nuevas estaciones de servicio, y como consecuencia de ello hay menos competitividad, y el precio es mayor de dichos insumos, mediante reglamentos pretenden legislar en materia exclusiva del orden federal, al normar la distancia que debe existir entre estaciones de servicio destinadas para la venta directa al público en general, de gasolina, diésel, gas LP y cualquier otro combustible autorizado, lo que evidencia la invasión de la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión para regular la materia de hidrocarburos, con lo que se vulnera lo dispuesto en los preceptos 25, 27 y 28 de la Constitución federal, siendo que en el numeral 2, de la Ley de Hidrocarburos, se establece que tiene por objeto regular, entre otras cuestiones, el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural y petrolíferos; aunado a que en los artículos 81, 82, 83 y 84 de la ley citada en último término se indica que corresponde a la CRE supervisar y regular la comercialización y expendio al público del gas natural y petrolíferos, para lo cual deberá expedir las disposiciones de aplicación general para la regulación de esas actividades.

El uso de la gasolina y el diésel es esencial para el correcto funcionamiento de las actividades cotidianas de la sociedad mexicana y el número reducido de expendios de hidrocarburos, y trae aparejada con ello, consecuencias negativas en el comercio, el transporte, la industria, la producción de alimentos, entre otros.

La ausencia de una libre competencia entre expendios de hidrocarburos y la carencia de gasolina tiene afectación sobre las actividades sociales diarias que derivan en una gran pérdida económica, e implica diversas externalidades negativas como la pérdida de empleos y la incapacidad de satisfacción de las necesidades básicas de la población. De acuerdo con lo anterior, las personas que habitan en zonas rurales son las más afectadas, principalmente debido a los costos de traslado de una estación de servicio a otra, mismo que implica tiempo y un costo económico.

El número de estaciones de servicio y la presión competitiva que ejercen entre sí en una localidad o zona tienen impacto directo en los márgenes de ganancia obtenidos por cada unidad de negocio y, en consecuencia, en el nivel de precio final de la gasolina pagada por los consumidores.

Por lo que es necesario modificar la normatividad por la que se expiden los permisos, ya que queda al arbitrio de las autoridades administrativas, muchas veces municipales, la demora o la expedición de los mismos, trayendo consigo que se paralice la posibilidad de abrir más competencia en los mercados, que baje el precio y que se beneficie con ello a la sociedad.

Es necesario destacar que los procedimientos administrativos para la obtención de las licencias para el suministro, almacenamiento y venta al público, se han visto involucradas en procesos tediosos y burocráticos, en los que los actores materiales de los mismos son servidores públicos, e instituciones que se empeñan en poner trabas al servicio y avanzar hacia un mercado competente en materia de hidrocarburos.

Por lo anterior, es necesario revertir esas prácticas burocráticas para el otorgamiento de permisos, y es necesario regular de forma clara; así como darle más fuerza vinculatoria a las resoluciones de la comisión, en ese sentido es necesario reformar la Ley de Hidrocarburos y hacer obligatorias sus resoluciones a todos los niveles de gobierno, en razón de que se esté en presencia de regular una materia estratégica del país.

Con base en lo anterior, a continuación, se muestra un cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley de Hidrocarburos, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; así como la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la propuesta que se realiza, quedando como sigue:

LEY DE HIDROCARBUROS TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
<p>Artículo 48.- La realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p>II. Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía.</p>	<p>Artículo 48.- La realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p>II. Para el Transporte, Almacenamiento, Distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y Expendio al Público de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de Sistemas Integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, quien deberá resolver la solicitud de cesión dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. En caso de no emitirse una resolución, dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.</p>
<p>LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.</p>	<p>PROPUESTA</p>
	<p>Artículo 8 Bis.- Corresponde igualmente a la Federación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la regulación sobre las distancias mínimas entre las estaciones de servicio destinadas al expendio al público de hidrocarburos.</p>
<p>LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.</p> <p>TEXTO VIGENTE</p>	<p>PROPUESTA</p>

<p>Artículo 50.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>(...)</p> <p>XXX. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables.</p>	<p>Artículo 50.- La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:</p> <p>(...)</p> <p>XXX. Emitir la normatividad aplicable tendiente a regular las distancias mínimas entre las estaciones de servicio destinadas al expendio al público de hidrocarburos, y</p> <p>XXXI. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos aplicables.</p>
--	--

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

**Decreto por el que se reforma el artículo 48, fracción II de la Ley de Hidrocarburos; se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se adiciona la fracción XXX del artículo 5 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Artículo Único.** Se reforma el artículo 48, fracción II de la Ley de Hidrocarburos; se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se adiciona la fracción

XXX del artículo 5 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para quedar como sigue:

**Ley de Hidrocarburos**

**Artículo 48.** La realización de las actividades siguientes requerirá de permiso conforme a lo siguiente:

(...)

II. Para el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, según corresponda, así como la gestión de sistemas integrados, que serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, **quien deberá resolver la solicitud de cesión dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. En caso de no emitirse una resolución, dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.**

**Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano**

**Artículo 8 Bis.** Corresponde igualmente a la federación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la regulación sobre las distancias mínimas entre las estaciones de servicio destinadas al expendio al público de hidrocarburos.

**Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Artículo 50.** La Agencia tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XXX. Emitir la normatividad aplicable tendiente a regular las distancias mínimas entre las estaciones de servicio destinadas al expendio al público de hidrocarburos, y

XXXI. Las demás que le confieran esta ley y otros ordenamientos aplicables.

### Transitorio

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Energía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, de la Cámara de Diputados.**

---

### CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

---

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Jacobo David Cheja Alfaro, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. constitucional, para que se incluya la protección civil y la prevención de desastres como criterio de educación en los programas y planes de estudio, al tenor de la siguiente:

### Exposición de Motivos

Nuestro país, al igual que el resto del orbe, está sufriendo los efectos del incremento de los fenómenos naturales como consecuencia del cambio climático.<sup>1</sup> Dichos fenómenos se manifiestan y materializan a través de sequías, inundaciones, sismos, etc., provocando pérdidas humanas, materiales, económicas y ambientales.

La nueva realidad exige que todos los niños y adolescentes tengan una formación integral que incluya la enseñanza de la cultura de la Protección civil y la Prevención de Desastres para que los acompañen el resto de sus vidas, y para ello, la formación impartida desde el sistema educativo es fundamental y necesaria.

Las instituciones de educación en todos los niveles de educación básica y media superior tienen la responsabilidad no solo de la enseñanza de la ciencia y las humanidades, sino también de fomentar los valores cívicos y solidarios. La educación que se imparte en las aulas es de vital importancia para el desarrollo de las capacidades y valores de todo individuo, por lo que fomentar las acciones de solidaridad y participación social por medio de la enseñanza de la cultura de la Protección Civil es indispensable en el contexto actual en el que nos encontramos.

En el sexenio anterior las escuelas del país contaron con un Programa Escolar de Protección Civil<sup>2</sup> que iba encaminado a la protección de los alumnos en las escuelas, para que estos fueran capaces de afrontar emergencias que pudieran afectarlos dentro del plantel escolar. Sin embargo, dicho programa estaba incompleto, pues las escuelas del país no cuentan una materia o un curso obligatorio enfocado al fomento de la Protección Civil y Prevención de Desastres. Es decir, no se cuenta con la enseñanza de la prevención ante desastres naturales para aplicarla ante cualquier situación de riesgo. Los niños y jóvenes deben aprender la importancia de velar por la autoprotección y la protección de las demás personas, del medio ambiente, de bienes culturales, de la infraestructura productiva, o según sea el caso y la circunstancia.

En un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC) advierten que para 2050, 55 millones de mexicanos quedarían severamente afectados como consecuencia de la crecida del nivel del mar, afectado así a gran parte de las poblaciones de las costas.<sup>3</sup>

En lo que va de este siglo, México ha afrontado severos daños de inundaciones en el sureste del país, sismos en la región centro-sur (en México es común la actividad sísmica pues nuestro país se ubica en una zona donde coinciden cinco placas tectónicas) sequías en el norte, huracanes en el golfo y pacífico, así como demás fenómenos que traen consecuencias en la población tanto urbana como rural. Basta recordar los sismos que sacudieron a la zona central-occidental del país en 1985, la mega inundación de Tabasco en 2007, y el sismo de 2017 que nuevamente sacudió la parte

central de nuestro país. Como lo mencionamos, los fenómenos naturales cada día son más intensos como consecuencia del cambio climático, además tenemos volcanes activos con un potencial de hacer erupción en cualquier momento, como el Popocatepetl, que es el más peligroso por la cantidad de personas que viven cerca de él.

Después de los sismos de 1985, surgieron diversos organismos y organizaciones relacionados a la protección civil, como lo fue el Sistema Nacional de Protección Civil. Además, en los estados y municipios se crearon organismos y programas encaminados a la protección civil y salvaguardia de la integridad de la población. Pero en nuestro país este tipo de Protección actúa de manera reactiva y no tanto preventiva ni tampoco se entiende como un acto de solidaridad y participación social. Por ello la importancia de incluir cursos o materias obligatorias, de manera periódica, en el nivel básico y media superior, para fomentar el valor de este tipo de cultura, y evitar así la pérdida significativa de vidas humanas y económicas, lo cual debe prevenirse en la medida de lo posible.

Por ello, consideramos necesario que los planes y programas de estudio deben incluir la enseñanza de la cultura de la Protección Civil y Prevención de Desastres en el nivel básico y medio superior, como parte del derecho a la educación plasmado en el artículo 3o. de nuestra carta magna, y que el fomento de la solidaridad y participación social, también queden plasmadas en dicho artículo de la aparte dogmática de la Constitución.

Para efectos de ilustración, se presenta el siguiente cuadro comparativo con la propuesta de adición:

Texto vigente, artículo 3° (CPEUM)	Texto propuesto, artículo 3° (CPEUM)
<p>Artículo 3° (...) Párrafos del segundo al décimo (...) Párrafo once (...) I... II... Además: a) (...) b) (...) c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;</p> <p>(sin correlativo)</p> <p>...</p>	<p>Artículo 3° (...) Párrafos del segundo al décimo (...) Párrafo once (...) I... II... Además: a) (...) b) (...) c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.</p> <p>Enseñará la cultura de la protección civil y la prevención de desastres con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, el patrimonio cultural, el medio ambiente y la infraestructura productiva; fomentando la solidaridad y la participación social.</p> <p>...</p>

Por todo lo anterior expuesto, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

**Decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

**Único.** Se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción II del artículo 3o. para quedar como sigue:

**Artículo 3o. (...)**

...

**I. (...)**

**II.** El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) ...

b) ...

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

**Enseñará la cultura de la protección civil y la prevención de desastres con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población, el patrimonio cultural, el medio ambiente y la infraestructura productiva; fomentando la solidaridad y la participación social;**

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

- h) ... 2 Guía para elaborar o actualizar el Programa Escolar de Protección Civil. Consultada el 07 de enero de 2020, desde <http://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201808/201808-RSC-cYNgcsRRbr-proteccionC2018.pdf>
- i) ...
- III. ...
- IV. ... 3 Domínguez Leonardo. “Dos bocas y 55 millones de mexicanos bajo el agua en 2050”. El universal. 04 de diciembre de 2019. Consultado el 03 de enero de 2020. Desde <https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/dos-bocas-y-55-millones-de-mexicanos-bajo-el-agua-en-2050>
- V. ...
- VI. ...
- VII. ...
- VIII. ...
- IX. ...
- X. ...

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputado Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.**

### Transitorios

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Para dar cumplimiento a la adecuación de los planes de estudio, la Cámara de Diputados garantizará suficiencia presupuestaria en el rubro de educación para los ejercicios fiscales subsecuentes a la entrada en vigor del presente decreto.

**Tercero.** La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las entidades federativas, adecuará los programas y planes de estudio de la educación básica y media superior para incluir materias o cursos obligatorios que tengan la finalidad de la enseñanza de la cultura de la Protección Civil y la Prevención de Desastres. Dichas materias o cursos serán impartidos a partir del ciclo escolar inmediato al inicio del primero de los ejercicios fiscales referidos en el segundo transitorio.

### Notas

1 Calentamiento récord de los océanos en 2019: el equivalente a 3.600 millones de bombas de Hiroshima. Consultado el 14 de enero de 2019, desde

<https://es.euronews.com/2020/01/14/record-historico-de-temperatura-de-los-oceanos-en-2019-por-que-te-afectara>

### LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 103 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

### Planteamiento del problema a resolver con la presente iniciativa

La presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 103 de la Ley General de Educación, busca sensibilizar para garantizar el estado óptimo de las instalaciones educativas, y de esta manera también se brinde mayor protección y seguridad al alumnado.

### Argumentos

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.<sup>1</sup>

En el artículo 3o. de la Constitución federal, se establece que:

“**Artículo 3o.** Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y



municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.”<sup>2</sup>

Como se sabe, la educación juega un papel muy importante, pues constituye la principal promotora del desarrollo de las capacidades humanas que a la vez, permite a las personas participar de manera activa, creativa y constructiva en la sociedad y en los ámbitos laboral y productivo.

Pero para alcanzar esta meta de desarrollo personal y colectivo, es necesario contar con los espacios adecuados y seguros para realizar esta tarea. Sobre todo, cuando debe enfrentarse a un fenómeno de carácter natural.

Como se sabe, dada la ubicación geográfica de México en el mundo, hemos enfrentado el impacto de fenómenos naturales y humanos que han dejado a su paso importantes pérdidas materiales y humanas. Experiencias como los sismos de 1985, de 2017, la erupción del Chichonal en 1982, frecuentes inundaciones en el sureste del país o la muerte de aficionados en el Estadio Olímpico Universitario en 1985, dan muestras nuestras vulnerabilidades.

Es por esto que surge la necesidad de adoptar medidas que nos permitan actuar de manera consciente y preventiva ante fenómenos potencialmente destructivos de origen natural y humano. Debido a esto, en 1986 se estableció el marco normativo para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). El Sinaproc fue creado con la finalidad de proteger y salvaguardar a la población en casos de emergencia o desastre por efectos de algún fenómeno perturbador.

La necesidad de proteger y defenderse de las adversidades es tan antigua como la vida misma, la historia es proclive en hechos que son ejemplos de preparación, previsión, rescate y rehabilitación que afianzaron la supervivencia de la humanidad. Por ello sorprende que el sismo que azotó a

México el 19 de septiembre de 2017, provocó la muerte de 369 personas en el centro del país, evidenció lecciones no aprendidas o que se olvidaron en poco tiempo.

Durante 32 años estas medidas funcionaron sin problemas, especialmente en la capital del país. Pero al mediodía del 19 de septiembre de 2017, la situación cambió. Un sismo de magnitud 7.1 sacudió a la ciudad y provocó el derrumbe de varios edificios y casas. Y, como sucedió hace tres décadas, las investigaciones posteriores revelaron una serie de irregularidades que explican los daños a inmuebles y la muerte de decenas de personas.

Además, se debe mencionar que, en el ámbito escolar se indica que, tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se registraron afectaciones en 17 mil 848 planteles de educación básica, de los cuales en 201 se reportaron daños graves, que es como la Secretaría de Educación Pública (SEP) clasificó a las escuelas en donde la destrucción del inmueble fue total. Mientras tanto, en otras 6 mil 28 escuelas hubo daños que fueron clasificados como de moderados a severos, en donde fue necesaria una intervención mayor. Del total de escuelas afectadas por los sismos, en 11 mil 619 las afectaciones fueron menores, las que a esta fecha están reparadas en su totalidad.

Sobre el particular, poco después del terremoto, la organización no gubernamental Save The Children alertaba sobre la salud de los niños afectados. Un año después, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el que habla al respecto: en un informe, indicó que en Chiapas y Oaxaca aún quedan 3 mil 444 escuelas parcial o totalmente dañadas y que el agua que llega a los hogares “ha disminuido”.<sup>3</sup> Por lo que en el sismo de 2017 fue notoria la aplicación insuficiente de los protocolos de protección civil en los planteles públicos y privados de la Ciudad de México.

Así también UNICEF indicó que la vida “ha cambiado sustancialmente” y que persisten “necesidades de atención psicosocial en niños”, pero que los servicios de atención “son limitados”. “Recuperar espacios adecuados y seguros para que niñas, niños y adolescentes puedan aprender, socializar, esparcirse, jugar y participar en actividades comunitarias es una necesidad urgente, y la reconstrucción del sector educativo en particular debe continuar siendo una prioridad para el país”, indicó la organización.<sup>4</sup> Ejemplo de ello fue lo ocurrido en el colegio Enrique Rébsamen. Escuela ubicada en la calle Rancho Tamboreo, en la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, donde dos de los tres edificios que



componen la escuela se derrumbaron, uno de forma parcial y el otro colapsó totalmente, causando la muerte de 19 niños y siete adultos.

A la conclusión del peritaje solicitado sobre la catástrofe, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer los resultados de las causas del derrumbe del colegio Rébsamen, en el que se concluye que el colapso fue provocado por castillos débiles y sobrepeso de su estructura. Ante estos resultados, la Secretaría de Educación Pública revocó las autorizaciones al colegio Enrique Rébsamen y le prohibió continuar prestando servicios de educación en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.<sup>5</sup> Actualmente el colegio está bajo el resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sucesos como los anteriormente señalados son de las historias que no queremos que se repitan en ninguna parte del país, sobre todo cuando se enlazan con la pérdida de vidas y, más aun, cuando pueden ser prevenidos con la aplicación de acciones adecuadas para ello.

### Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa.

### Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 103 de la Ley General de Educación.

**Artículo Único.** Se reforma la fracción VI del artículo 103 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

#### Artículo 103. ...

...

I. a V. ...

**VI. Programas de protección especiales con base en un calendario de aplicación anual** para la prevención y atención de los daños causados a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del

servicio público de educación por desastres naturales o fenómenos antropogénicos, y

VII. ...

...

...

### Transitorio

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### Notas

1 Ley General de educación, Cámara de Diputados, México.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. México.

3 <https://cnnespanol.cnn.com/2018/09/13/mexico-un-ano-despues-del-terremoto-del-19-s-todo-lo-que-queda-por-hacer/>

4 *Ibidem*

5 <https://www.milenio.com/policia/sismo-19-s-colegio-rebsamen-cronologia-caso>

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

### Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.

---

## LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

---

«Iniciativa que reforma la denominación y el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Martí Batres Guadarrama, senador de la República a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en

los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el título de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la fracción I, artículo 5 del mismo ordenamiento, para denominarla Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, con base en la siguiente:

### Exposición de Motivos

El 4 de enero de 2019, Abril Cecilia Pérez Sagaón despierta al ser golpeada con un bate. La denuncia que presenta detalla que su entonces esposo Juan Carlos García Sánchez, la golpea en la cabeza y el rostro. Según el testimonio de Abril ante el Ministerio Público, su marido entró a la habitación de ambos cuando ella dormía y la despertó de un fuerte golpe en el cráneo, al abrir los ojos, vio a García con un bate de béisbol en la mano; la golpeó de nuevo en el lado izquierdo de la cara, ella comenzó a gritar pidiendo auxilio. La puerta estaba cerrada con seguro, no podía salir, declara en su testimonio. Él la agarró del cabello y le gritaba: “¡Te voy a matar. Destrozaste nuestra familia!”, señala en la declaración. Entonces, intentó cortarle en el cuello con un “objeto punzocortante”, detalla el texto, ella se resistió, pero le hizo un corte en el mentón. Después, intentó asfixiarla con sus manos, según la denuncia y los informes médicos. Ella relata haber comenzado a perder el aliento y todo a su alrededor se había fundido a negro. “Su hijo fue determinante” para evitar que su padre la matara, reza la declaración. El menor irrumpió en el cuarto y empujó a su padre y, también según la denuncia, su madre huyó por una ventana.

Abril denunció a Juan Carlos, quien fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y fue remitido al Reclusorio Oriente.

En una audiencia, en septiembre, tras ser detenido, el juez de control Federico Mosco considera que el MP no reunió pruebas para acreditar el delito. Entonces reclasifica el delito e imputa a Juan Carlos García Sánchez por lesiones y violencia familiar y decreta prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La defensa apela la decisión y el magistrado de la Cuarta Sala Penal, Héctor Jiménez López, desestima la prisión preventiva

y ordena la medida cautelar de firma periódica. El juez Luis Alejandro Díaz cumplimenta el fallo que permite a García Sánchez salir del Reclusorio Oriente, el 8 de noviembre de 2019; es decir, días antes de que Abril, quien había regresado a vivir a Monterrey, sea asesinada.

El 25 de noviembre de 2019 Abril regresa con su abogado y sus dos hijos al aeropuerto de la Ciudad de México, tras acudir a una audiencia por el litigio de custodia sobre los dos menores de edad. A la altura de la colonia Del Carmen, en Coyoacán, un motociclista dispara contra la mujer que viaja en el asiento del copiloto. Abril muere en un hospital.

La Procuraduría capitalina, además de la investigación por el feminicidio, abre otra contra los jueces y el magistrado por la liberación del ex esposo. Desde entonces García Sánchez deja de ir a firmar la medida cautelar y no asiste a audiencias.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México obtiene una orden de reaprehensión por el delito de violencia familiar y la Interpol gira una ficha roja en contra de Juan Carlos García Sánchez, quien presuntamente se esconde en San Diego, Estados Unidos.

El 10 de diciembre de 2019, el Consejo de la Judicatura informó que requirió un informe detallado al magistrado Héctor Jiménez López sobre su responsabilidad en el fallo que liberó al ex esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón.

A la fecha sólo los dos jueces fueron suspendidos tras la revocación de la prisión preventiva a Juan Carlos García Sánchez.

Una mujer asesinada, un ex esposo prófugo, una familia destruida, dos jueces suspendidos por su actuación indebida por decir lo menos, un magistrado en proceso de investigación... ese es el saldo del feminicidio del llamado caso Abril.

Este feminicidio indignó a la sociedad mexicana, desde el Senado de la República exigimos sanción para los jueces y el magistrado por la actuación indebida en este asunto. Es evidente que de haber llevado el proceso penal adecuadamente se habría evitado este feminicidio, tal como lo afirmó la procuradora capitalina **“El tema de perspectiva de género no es una cosa etérea, es un método de análisis. Entonces, (los jueces y el magistrado) tenían que haber utilizado ese método”**.

Es cierto que se requieren diversas herramientas para prevenir y combatir el delito de feminicidio; sin embargo, también es cierto que en la Ciudad de México hay un gran avance en este tema; es decir, existe marco legal aplicable, en este caso en particular, se presentó la denuncia respectiva, el Ministerio Público formuló la acusación y aportó los elementos que consideró suficientes para acreditar el delito de feminicidio, no obstante, la actuación irregular de los jueces y el magistrado dejaron en libertad al presunto feminicida. Esperamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se aplique las sanciones correspondientes que generen un precedente en el sistema judicial mexicano para evitar que se repitan este tipo de conductas que pueden culminar en desenlaces trágicos.

En este sentido, el objeto de esta iniciativa en un hecho simbólico es modificar el nombre de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que lleve el nombre de Abril como un modesto homenaje a esta mujer asesinada en la Ciudad de México.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es, precisamente, el ordenamiento legal que tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Es por ello, que de hoy en adelante las mujeres deberán reivindicar la aplicación de la “Ley Abril” para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En mérito de lo expuesto, el texto sometido a su consideración se expresa de la siguiente manera:

### **Texto vigente**

#### **Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia**

##### **Título Primero**

##### **Capítulo I Disposiciones generales**

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

II. a XI. ...

### **Texto propuesto**

Ley general de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “Abril Cecilia Pérez Sagaón”

##### **Título Primero**

##### **Capítulo I Disposiciones generales**

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “Abril Cecilia Pérez Sagaón”.

II. a XI. ...

Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

### **Decreto**

**Único.** Se modifica el título de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la fracción I del artículo 5 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “Abril Cecilia Pérez Sagaón”

##### **Título Primero**

##### **Capítulo I Disposiciones generales**

**Artículo 5.** Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Ley: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “Abril Cecilia Pérez Sagaón”.

II. a XI. ...

### Transitorios

**Artículo Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Artículo Segundo.** Todas las referencias que hagan mención a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en las leyes y demás normatividad vigente, se entenderán realizadas a la La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “Abril Cecilia Pérez Sagaón”, de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.**

---

### LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

---

«Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, suscrita por la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo octavo y décimo primero del acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de ley que reforma el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de la siguiente

### Exposición de Motivos

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquél por el cual toda persona, como integrante de una sociedad, puede acceder a los órganos jurisdiccionales para el ejercicio o

defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a que sea atendida a través de un proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. El calificativo de efectiva que se da le añade una connotación de realidad a la tutela jurisdiccional, llenándola de contenido.

Asimismo, se puede definir el derecho a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder a tribunales independientes e imparciales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un proceso equitativo y razonable, en el que se respeten los derechos que corresponden a las partes; así como para que tales tribunales emitan una decisión jurisdiccional sobre la pretensión o la defensa y, en su oportunidad, ejecuten esa resolución.

Por otra parte, y ligado a lo anterior, la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios:

1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes;
2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;
3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y
4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las

autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

La garantía descrita en párrafos anteriores se haya inmersa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en su artículo 17, al establecer:

**“Artículo 17.** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.”

El derecho internacional también ha consolidado el derecho al acceso a la impartición de justicia, así los ordenamientos legales siguientes han establecido:

### **Convención Americana sobre Derechos Humanos**

#### Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;

c) concesión al inculcado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni a declarar culpable,

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

### Convención Americana sobre Derechos Humanos

#### Artículo 25. Protección Judicial.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los estados parte se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

El artículo 42, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al disponer que cuando un

escrito se presente ante autoridad incompetente se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo de esta última, salvo en el caso de que haya advertido al promovente, de que recibe el escrito solamente para el efecto de que se remita a la competente, es violatorio de los artículos 17 de la Constitución General de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al entorpecer el acceso del gobernado a un recurso efectivo.

Del precepto de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se advierte que discrecionalmente la autoridad incompetente puede actuar en dos sentidos: recibir lisa y llanamente el recurso y remitirlo a la autoridad competente, en cuyo caso, el plazo sí se interrumpe; o bien, sin justificación objetiva alguna, recibir el recurso, pero apercibiendo al particular de que así se hace sólo para el efecto de remitirlo a la autoridad competente, en cuyo caso, el plazo no queda interrumpido, es decir, se considera como fecha de presentación aquella en que el libelo se presente ante la autoridad competente.

Luego, queda más bien a merced de la autoridad recibir el recurso y remitirlo sin apercibimiento; o bien, recibirlo y apercibir al promovente, sin que la decisión en este último sentido deba justificarse a partir de alguna razón objetiva, a pesar de que las consecuencias que produce son notoriamente perjudiciales.

De ese modo, el precepto en estudio propicia el comportamiento arbitrario de la autoridad y, por eso, es de suyo atentatorio de las garantías judiciales reconocidas por la Constitución General de la República y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habida cuenta de que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 17 de la Carta Magna, así como 8 y 25 de la citada convención, es una obligación del Estado Mexicano establecer para los gobernados, tribunales donde se les administre justicia de manera pronta, completa e imparcial.

Ello a fin de garantizar el derecho fundamental de que sean oídos, con las debidas garantías, por un órgano jurisdiccional competente en la determinación de sus derechos civiles, laborales, fiscales o de cualquier otra clase; así como el de contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo que los proteja contra actos que transgredan sus derechos fundamentales, dentro de lo cual se encuentra el deber de implementar dicho recurso judicial, de tal manera que se garantice su eficacia en la realidad, lo que no ocurre en la hipótesis examinada, por las razones apuntadas.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

### Decreto

**Artículo Único.** Se reforma el párrafo segundo del artículo 42 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

#### Artículo 42. (...)

Cuando un escrito sea presentado ante un órgano incompetente, dicho órgano remitirá la promoción al que sea competente en el plazo de cinco días. En tal caso, se tendrá como fecha de presentación la del acuse de recibo del órgano incompetente; de esta circunstancia deberá dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se exhiba.

(...)

### Artículos Transitorios

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.**

---

## CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

---

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado a la LXIV Legislatura, del Partido Encuentro Social, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal; y se adiciona la fracción XII al artículo 167 y sexto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de extorsión, considerando la siguiente

### Exposición de Motivos

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano descentralizado encargado de medir la incidencia delictiva en el país. A partir de 1997 reporta la incidencia delictiva del fuero común y del fuero federal por municipio y por entidad federativa.

El delito de extorsión forma parte de los delitos del fuero común, y desde el año 2000 que el sistema de telefonía celular en México se amplió ha ocasionado una evolución en los esquemas e incidencia del delito. La extorsión en años recientes ha implicado un grave daño a la seguridad pública en América Latina y en México.

La extorsión ha sido identificada como un problema de seguridad pública cada vez más amplio, no ha importado qué gobierno esté al mando, las organizaciones criminales han incorporado y perfeccionado métodos y técnicas que afectan profundamente la vida comunitaria.

Puesto que su esfera de penetración es la vida íntima de las personas, el delito de extorsión se vuelve un peligro constante en la vida diaria de las familias, su bien patrimonial, su economía, su estabilidad emocional y en grado último, su vida. Los victimarios por lo regular conocen la rutina y los ingresos de sus víctimas. Desde su marco semántico, la extorsión refiere a un acto de arrebatar, separar o usurpar a una persona, es una acción que implica el uso de la violencia y se consuma con la entrega de dinero o un bien patrimonial.

La extorsión es una amenaza de seguridad constante para las víctimas, su círculo cercano y la sociedad en su conjunto y es una práctica común entre pandillas, grupos criminales con presencia territorial y reos que actúan desde la prisión.



Dependiendo de la estructura del grupo, la presencia territorial, la frecuencia de la práctica y la relación con las comunidades, la extorsión puede instalarse en las estructuras sociales y económicas convirtiendo el fenómeno en un asunto sumamente complejo.

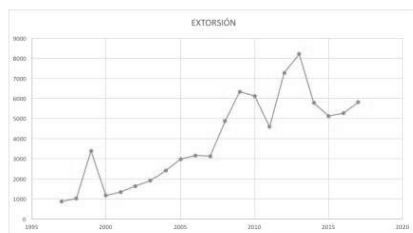
Ahora bien, el delito de extorsión, bajo las mediciones cuantitativas del Secretariado Ejecutivo<sup>1</sup> reporta un total de 82 mil 404 casos de ocurrencia en el periodo comprendido entre 1997 a 2017 en el país. La antigua metodología válida hasta el año 2017, compara cuatro delitos que reflejan la afectada situación de seguridad en el país:

Cifras por delitos, periodo, 1997-2017:

ROBO DE VEHICULO SIN VIOLENCIA	ROBO DE VEHICULO CON VIOLENCIA	HOMICIDIO DOLOSO	EXTORSIÓN	SECUESTRO
2,551,829	1,051,291	334,057	82,404	18,695

En el caso de la extorsión, de 2000 a 2017, el delito ha ido en aumento como se observa en la siguiente gráfica. Desde que se inició el registro, el delito no ha mostrado una tendencia de disminución consistente.

AÑO	EXTORSION
1997	278
1998	1570
1999	3291
2000	1382
2001	1527
2002	1818
2003	1910
2004	2418
2005	2879
2006	2967
2007	3122
2008	4589
2009	6522
2010	6118
2011	4629
2012	7520
2013	5212
2014	6720
2015	6122
2016	6582
2017	6218
100 NL	2004



En la nueva metodología del Secretariado Ejecutivo se reportan los delitos desde el año 2015 y agrupa mes con mes las carpetas de investigación abiertas en las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

La metodología del Secretariado clasifica en siete los delitos del fuero común, el delito de extorsión se registra en el clasificado cuatro de delitos contra el patrimonio.

AÑO	2015	2016	2017	2018	2019
DELITO EXORSIÓN	5,072	5,273	5,812	6,183	7,129

Para el año 2019 se contemplan como fecha de corte el mes de octubre,<sup>2</sup> con un alza importante con respecto a años precedentes.

Los tres años comparativos, 2015-2017, las cifras reportadas por el delito de extorsión en la antigua y nueva metodología presenta datos similares:

AÑO	2015	2016	2017
ANTIGUA METODOLOGÍA	5,128	5,268	5,816
NEUEVA METODOLOGÍA	5,072	5,273	5,812

Sin embargo, en el año 2018 la extorsión es uno de los delitos que registran una mayor incidencia, lo cual impacta en las economías regionales y la apertura de establecimientos que agilicen el poder financiero de las familias.

Comparativamente con otros delitos del fuero común, la extorsión –al igual que el homicidio doloso– ya sea por una medición de datos absolutos o por tasa por cada cien mil habitantes, registra un incremento anual.

Entre los tres delitos, considerados de especial gravedad, las cifras en aumento suponen un reto para la seguridad humana, pública y nacional.

AÑO	ROBO A CASA HABITACION	ROBO A TRANSCUNTE EN VIA PUBLICA	NARCOTRAFICO	HOMICIDIO DOLOSO	EXTORSION	SECUESTRO
2015	86,927	59,969	38,962	16,124	5,072	1,061
2016	87,777	68,111	34,531	20,167	5,273	1,128
2017	90,790	86,811	44,101	25,035	5,812	1,149
2018	81,998	68,581	58,554	28,839	6,183	1,010
2019*	68,047	66,838	58,918	24,484	7,129	1,142

\*Octubre

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad, (Envipe) 2018,<sup>3</sup> entre sus estimaciones señala que para el año 2018 se cometieron poco más de 6 mil 500 extorsiones por cada 100 mil habitantes. 91.6 por ciento del delito correspondió a extorsión telefónica y 7.1 por ciento de los casos, la extorsión fue saldada mediante la entrega de pago económico.

En el comparativo de cifras de 2017, en cuanto al lugar de ocurrencia, 70.3 por ciento sucedió en casa, 13 por ciento en el trabajo, 2.2 por ciento en un lugar público y 1.3 por ciento en el transporte público. La extorsión privilegió como víctimas al género femenino con 51.4 por ciento, frente al 48.6 por ciento de género masculino, 54 por ciento de las extorsiones estima ocurrieron en el horario entre las 12 y las 6 pm.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce que para afrontar un análisis de delitos como la extorsión las cifras deben ser revisadas con mucho



cuidado dada la ocurrencia de “cifra oculta”. La Envipe 2018, estima la cifra negra (no hubo denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación) del delito extorsión en 98.2 por ciento y la Envipe 2019, 97.9 por ciento.

La cultura de la denuncia en el país es aún débil, delitos como la extorsión y el secuestro, presenta vacíos en la información disponible o falta de desagregados, como pueden ser el cobro de derecho de piso, la amenaza telefónica, la simulación u otras ramificaciones; el secuestro, por su parte, usa la extorsión para perpetrar el delito, sin embargo su clasificación se da de manera separada. Una de las recomendaciones que se encuentran en la literatura especializada es la activación de líneas abiertas para atender delitos sensibles, favorablemente a las autoridades les permitiría contar con elementos de análisis dirigidos a estrategias de respuesta más eficientes y adecuadas.

La extorsión es un delito que puede clasificarse de manera directa e indirecta.<sup>4</sup> La primera se refiere a aquella en la que el victimario se presenta de manera física frente a las víctimas. Por lo regular la irrupción se presenta con violencia y amenazas, el delincuente se identifica como parte de un grupo delincuencia que brinda seguridad o pide derecho de piso, bajo amenaza de causar daño a algún familiar cercano o modificar el objetivo final del delito al amenazar con la privación de la libertad. El esquema económico de extorsión consiste en el cobro de cuotas periódicas que pueden ser diarias, semanales, quincenales o mensuales a cambio de “protección”: de no aceptar la extorsión pueden dar inicio las represalias.

La extorsión indirecta se basa en el servicio de telefonía, opera bajo seis categorías en el país: 1) mediante la notificación de un premio que requiere de un depósito, 2) el secuestro virtual de un familiar que exige pago por la no infringir un daño y dejarlo en libertad, 3) familiar que proviene del extranjero y requiere el envío de dinero, 4) amenaza de muerte después de mencionar que la vivienda o la persona se encuentra vigilada y solicitar un depósito a cambio de dejar en paz a la persona o familias amenazadas, 5) amenaza de empleados federales, el delincuente se hace pasar por un empleado de seguridad o procuración de justicia e informa de la detención de un familiar de la víctima por lo que demanda un depósito económico, 6) deudas contraídas, que se resuelven mediante un pago fijado por el delincuente.

La población más vulnerable para contestar el teléfono son los niños, adolescentes y adultos mayores en situación de riesgo. Aunque la extorsión telefónica ha llegado a

considerarse de bajo riesgo, es importante denunciar para que las autoridades analicen, prevenga y combatan la incidencia del delito.

Las situaciones de riesgo que muchas veces conlleva lenguaje agresivo o, en la evolución del delito, planteamientos más sofisticado de situaciones creíbles –como el uso de las redes sociales para conocer la vida íntima de las personas, la posesión de agendas con números de telefónicos e información personal– utiliza la violencia psicológica como forma de intimidación a la víctima. La elección de la víctima es azarosa y las repercusiones no se suscriben exclusivamente al ámbito económico, ocasionan daño emocional, pérdida de la tranquilidad y la paz, en ocasiones, cambios en la personalidad en el que sus vidas, simplemente, no vuelven a ser las mismas.

El Código Penal Federal lo conceptualiza en su artículo 390 el delito: “Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial...” Sin embargo, la tipificación sancionadora es insuficiente. El sistema institucional también se ha visto afectado por el alto nivel de corrupción e impunidad de las autoridades con los grupos delincuenciales.

Aunado a lo anterior, la extorsión se ha convertido en un freno para la inversión y estabilidad económica, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. El costo del “cobro” o “impuesto” ha hecho difícil la productividad y ha producido desigualdad para la libre competencia. La Envipe 2018, estima una pérdida anual superior a los 6 mil millones de pesos por el delito de extorsión. No debe sorprender que el cobro de piso se ha convertido en el sostén económico de las estructuras criminales o su ramificación operativa para controlar el territorio.

A nivel regional afecta la apertura de empleos formales y la seguridad ciudadana, impide el desarrollo social y la creación de infraestructura dada la obstrucción en las dinámicas de transferencia económica entre empresa y empleado. Cuando una Pyme crece, la extorsión aparece y en vez de aumentar la inversión que genera productividad, la carga del “impuesto” por los extorsionadores ha obligado, en el caso de algunos empresarios, a cerrar los negocios.

Y lo que resulta alarmante es que los datos se inscriben en contextos de daño social y económico. Las extorsiones tienen un impacto fuerte para el emprendedor promedio, el crecimiento económico y el impulso regional.



**Transitorio**

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XII del artículo 167, sexto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales**

**Único.** Se adiciona la fracción XII del artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

**Artículo 167.** Causas de procedencia

...

**XII. Extorsión, previsto en el artículo 390.**

...

**Transitorio**

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Notas**

1 [http://secretariadodejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV\\_022019.pdf](http://secretariadodejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_022019.pdf)

2 <https://drive.google.com/file/d/1FjQuxsKIWSCmsbgMgg5bFBGAz97uAP4x/view>

3 [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf)

4 <https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/conoce-los-tipos-de-extorsion>; existen otras clasificaciones, en tres modalidades: engaño telefónico, amenaza telefónica y cobro de derecho de piso: Pérez Morales, Vania, Vélez Salas, Doria, et al, “Evolución de la extorsión en México: un análisis estadístico regional (2012-2013)” en Revista de Opinión Pública, vol, 18, enero-junio, México, UNAM, 2015, pp 112-135.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.**

---

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

---

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

Claudia Tello Espinosa, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

**Exposición de Motivos****Planteamiento del problema**

En México, la cuestión relacionada con el envejecimiento de nuestra población debe ser considerada un tema prioritario, debido a que se ha presentado un aumento de tal magnitud, que en el año 2000 las personas que tenían una edad mayor de 65 años no sobrepasaban los cinco millones de habitantes, los resultados de la Encuesta Intercensal del 2015<sup>1</sup> reportó que en ese año este segmento de población había aumentado a 12.4 millones de personas mayores de 65 años.

De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se prevé que para el año 2030, la población mayor de 60 años será de más de 20 millones de individuos y para el 2050 se proyecta que esta población de adultos mayores constituirá el 27.7 por ciento de la población mexicana.<sup>2</sup> Actualmente, los adultos mayores en México suman poco más de 13.9 millones, de los cuales el 54.2 por ciento son mujeres y el 45.8 por ciento hombres. Se estima que para el año 2030, este segmento alcanzará los 20.5 millones de personas, conformado por el 54.6 por ciento de mujeres y el resto hombres, es decir, serán casi 10 veces más que los que había en 1970.

### Personas adultas mayores, población vulnerable

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores<sup>3</sup> establece que las personas adultas mayores son aquellas que cuentan con sesenta años de edad o más y se encuentran domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. En el artículo 5 de la misma ley señala, de manera enunciativa y no limitativa, que tiene por objeto garantizar los derechos de las personas adultas mayores, entre los que se destaca para esta iniciativa los relativos a la integridad, dignidad, preferencia, certeza jurídica, de trabajo y sus capacidades económicas. Acorde con estas garantías, el artículo 6 de dicho ordenamiento, establece que el Estado debe garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores.

Atendiendo a la garantía de certeza, las personas adultas mayores deben recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento administrativo o judicial que los involucre, ya sea en calidad de beneficiarios, clientes, solicitantes, agraviados, indiciados o sentenciados; recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos: recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, así como tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

El derecho al debido proceso para las personas en estado de vulnerabilidad tomando en cuenta las pocas o nulas posibilidades para acceder a una debida defensa, obliga a establecer garantías para su efectividad. Esta vulnerabilidad deriva no solo de la edad de los adultos mayores, sino de las condiciones económicas y sociales en las que se encuentran.

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018,<sup>4</sup> realizada por el Inegi, el número de personas de 60 años o más que reside en México es de 15.4 millones, cifra que representa 12.3 por ciento de la población total. La mayoría de las personas adultas mayores (47.9 por ciento) vive en hogares nucleares (formado por un solo núcleo familiar: puede incluir a una pareja con o sin hijos solteros o un jefe o jefa con hijos solteros; casi cuatro de cada diez (39.8 por ciento) residen en hogares ampliados (un solo núcleo familiar o más, y otras personas emparentadas con él o ellos; y 11.4 por ciento conforman hogares unipersonales, es decir, viven solos.

El Inegi señala que en el país 1.7 millones de personas de 60 años o más viven solas. De éstas, 60 por ciento son mujeres (1 048 426) y 40 por ciento son hombres (697 699). Su estructura por edad indica que 43.1 por ciento tiene entre 60 y 69 años, mientras que más de la tercera parte (36.4 por ciento) entre 70 y 79 años. En edades más avanzadas su participación porcentual es menor, 17.4 por ciento y 3.1 por ciento en aquellos que cuentan con 80 a 89 y 90 años o más, respectivamente.

Por cuanto hace a la actividad económica e ingresos, estimaciones de la Enadid 2018 indican que el porcentaje de las personas de edad que viven solas y son económicamente activas es de 41.4 por ciento. De éstas, 54.1 por ciento son hombres y 45.9 por ciento son mujeres.

En cuanto a sus condiciones laborales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que, para el segundo trimestre de 2019, el 21.7 por ciento de los adultos mayores que viven solos y están ocupados, no reciben prestaciones, 15.7 por ciento reciben aguinaldo y solo 13.4 por ciento tienen vacaciones con goce de sueldo. Ubica como la principal fuente de ingreso de las personas de edad que viven solas la jubilación o pensión (36.7 por ciento); le siguen algún programa de gobierno (36.6 por ciento) y/o por su trabajo (34.4 por ciento).

Es importante señalar que estos ingresos pueden ser complementarios, es decir, una persona puede recibir recursos monetarios de diferentes fuentes. Es de considerar que se estima que las personas de edad que viven solas y reciben ayuda monetaria de familiares o amigos que residen en el país es el 16.4 por ciento y que residen en otro país el 6.5 por ciento. De los de adultos mayores que viven solos, 4 de cada 100 obtienen ingresos por intereses bancarios, rentas o alquiler de alguna propiedad (3.8 por ciento).

En el campo de salud, el 85.4 por ciento de las personas de edad que viven solas en el país, están afiliadas a una institución de servicios de salud. De éstas, 44.1 por ciento está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 40 por ciento al Seguro Popular o Seguro Médico Siglo XXI y 14.8 por ciento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La mayoría se atienden cuando tienen un problema de salud (96.8 por ciento), siendo el IMSS la principal institución a la que acuden para atenderse (30.7 por ciento), una cuarta parte (25.4 por ciento) va a los centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud y uno de cada cinco (20 por ciento), a clínicas o instituciones privadas. Por distintos motivos, la

población no siempre acude a la institución a la cual es derechohabiente para atender sus problemas de salud. De hecho, 9 de cada 100 se atienden en el consultorio de una farmacia (9.5 por ciento).

De las personas adultas mayores que viven solas, 27.1 por ciento tiene discapacidad y 42.3 por ciento alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica (por ejemplo; caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver; mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse y realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales).

La relación entre el incremento de la edad y la discapacidad es más que evidente. En el grupo de 60 a 69 años, 18.1 por ciento de los adultos mayores que viven solos tiene discapacidad; entre los que tienen 80 años o más, casi la mitad de ellos (48.2 por ciento) son personas con discapacidad. Mientras que la proporción de personas sin discapacidad o limitación se va reduciendo conforme avanza la edad: 41.1 por ciento de los adultos mayores de 60 a 69 años tienen esta condición; solo 14.3 por ciento de los que tienen 80 años o más reportan no tener dificultad para desarrollar sus actividades diarias.

El 18.9 por ciento de las personas de edad que viven solas no sabe leer ni escribir. Por sexo, el porcentaje es mayor en las mujeres (20.8 por ciento) que en los varones (15.9 por ciento). Si bien es cierto que la mayoría es alfabeta, el nivel de escolaridad que alcanzan es de apenas 6 años (5.9), lo que indica que sólo lograron concluir la primaria.

Los gastos destinados por las personas de 60 años o más que viven solas para alimentarse son, en promedio, de 5 mil 209 pesos trimestrales según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2018. Otros gastos que son trascendentes para mantener su calidad de vida son los relacionados con la salud. En promedio, esta población gasta trimestralmente 112 pesos en medicinas.

En 2018, la mayor parte de las viviendas donde habitan las personas de 60 años o más que viven solas, cuentan con servicios de agua entubada (94.1 por ciento) y drenaje (94.2 por ciento). Sobre el material de los pisos, en su mayoría es de cemento o firme de madera o mosaico (96.5 por ciento). Un aspecto vinculado a enfermedades respiratorias es el combustible con el que se cocina. En el caso de los adultos mayores que viven solos, en la vivienda donde residen 82.5

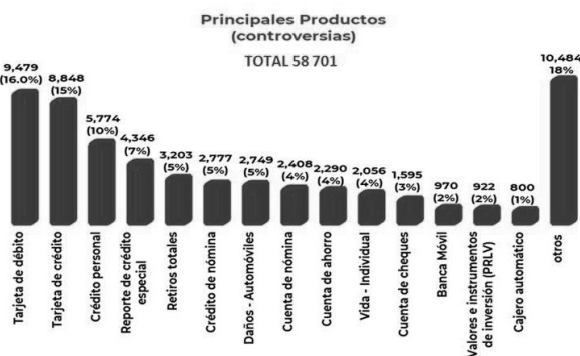
por ciento se cocina con gas o electricidad y en 13.1 por ciento se cocina con leña o carbón.

Para hacer efectivas las garantías que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y las leyes que regulan derechos de las personas adultas mayores, debe atenderse a las circunstancias que derivan de la aplicación de tecnologías de la comunicación y la información en los trámites, procedimientos administrativos y/o judiciales que los adultos mayores realizan en su vida cotidiana o se ven involucrados por actos arbitrarios e incluso ilegales.

Actualmente, una de cada 3 personas que acude a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a presentar una controversia, es un adulto mayor, cifra que ha incrementado en los últimos años en la medida en que avanza la inclusión financiera y la dispersión de apoyos de diversos programas sociales. Por ejemplo, durante el año 2018 las 58 mil 701 controversias de adultos mayores que atendió esta Comisión Nacional presentaron un crecimiento de 19 por ciento, mientras que las de jóvenes y adultos se elevaron a razón del 12 por ciento y 11 por ciento, respectivamente. Los cinco estados que concentraron el 43 por ciento de las controversias atendidas de adultos mayores fueron la Ciudad de México (17 por ciento), Estado de México (9 por ciento), Jalisco (7 por ciento), Chihuahua (5 por ciento) y Puebla (5 por ciento).

En el caso particular de las controversias de los adultos mayores por cargos o consumos no reconocidos, se ha tenido un incremento mensual promedio del 3.2 por ciento. Es importante destacar que entre enero de 2018 y al cierre de junio de 2019, se tuvo un crecimiento de más de la mitad de los asuntos en tema de adultos mayores. Se identificó que la principal forma ilícita de obtener los recursos es a través del robo del plástico sin violencia, el tallado y la clonación. De igual forma ha incrementado el fraude a través de aplicaciones móviles, muchas de las veces ofrecidas y contratadas sin la debida capacitación para su adecuado uso y conocimiento de las medidas preventivas que se deben considerar.

Los principales productos respecto de los cuales se llevaron a cabo las controversias a nivel nacional en el año 2018 fueron los siguientes:



Es importante considerar el impacto de las tecnologías en las transacciones financieras y de toda operación que afecte el patrimonio de los adultos mayores como un segmento de la población altamente vulnerable.

El derecho a una vida con seguridad jurídica, libre de violencia, calidad, respeto a su integridad, y la protección de su patrimonio personal y familiar exige modificar la Ley de Personas Adultas Mayores, para establecer las bases procesales que garanticen un debido proceso a partir de su condición de personas altamente vulnerables.

Por lo anterior y tomando como punto de partida la concepción de los derechos humanos como aquellos derechos –civiles y políticos, económicos, sociales y culturales– inherentes a la persona humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables, reconocidas por el Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación, para lograr un proyecto de vida digna. Es necesario establecer en la ley el reconocimiento y exigibilidad del principio de igualdad en forma relativa a partir de la vulnerabilidad de la población. La manera de lograrlo es a través de la “acción afirmativa” (positive action), la que puede entenderse como la oportunidad de una mayor oportunidad a personas o grupos que no disfrutaban del mismo nivel de ventajas que el común denominador de las personas. En la sociedad actual diversos grupos de personas son excluidas por su condición étnica (indígenas y afrodescendientes), de género (mujeres), edad (niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores) o por algún tipo de discapacidad, mismos que requieren de un trato diferenciado o especial para compensar las desventajas con las que enfrentan su lucha por mejores condiciones de vida.

La forma más objetiva de realizar las acciones afirmativas es mediante la creación de leyes que promuevan la igualdad y equidad de los grupos de personas con vulnerabilidad, como

base para implementar políticas públicas y programas institucionales cuyo objeto es el de crear mejores condiciones para el acceso a una vida más digna y una mejor retribución de la riqueza nacional. Atendiendo a la asimetría económica, cultural y social, el principio de igualdad debe atender a las distintas circunstancias y condiciones para resolver situaciones específicas en donde no puede darse un trato igual a los desiguales y estar en condiciones de resolver con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, atendiendo siempre a lo que más convenga a la persona que se encuentra vulnerable.

En el propósito de establecer un marco legal que garantice el pleno ejercicio de derechos y sus garantías para la población de adultos mayores, es importante, reconociendo las mejores prácticas en el ámbito internacional, retomar las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de Grupos en condición de vulnerabilidad.

Si bien es cierto que dichas reglas no son obligatorias para el Estado mexicano, sus estándares deben ser considerados en beneficio de los grupos vulnerables, tal y como se reconoce por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis Acceso a la justicia de las personas vulnerables. Interpretación de las reglas básicas en la materia, adoptadas en la Declaración de Brasilia, en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de marzo de 2008, en relación con el beneficio de la suplicia de la queja deficiente, tratándose de adultos mayores,<sup>5</sup> en la que se determina lo siguiente:

“Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí **que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante** para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, **pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad**, favorecen que estas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, **se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerarse**



vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando estos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto solo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad.”

Las reglas de Brasilia ponen el acento en la interacción de los operadores judiciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De estas reglas se destaca que “es menester promover la asistencia técnico-jurídica de las personas en condiciones de vulnerabilidad en los ámbitos de asistencia legal, y principalmente en el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales; por supuesto que la premisa de dicha atención descansa en la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a dichas personas”.

En forma particular la Regla 29 establece que “se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a **garantizar la asistencia técnico-jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales**: ya sea a través de la ampliación de funciones de la defensoría pública, no solamente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de justicia, intervención de colegios o barras de abogados”.

También es pertinente acudir a las Reglas 30 y 31 que señalan el derecho a la asistencia de calidad, especializada y gratuita: “Se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. A tal fin, **se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la**

**asistencia**. Se promoverán acciones destinadas a **garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones”**.

Las circunstancias específicas que en la vida cotidiana enfrentan grupos vulnerables como el de los adultos mayores, exige un análisis coyuntural que considere los distintos aspectos que afectan su calidad de vida y su seguridad jurídica y económica.

Sin lugar a duda, el envejecimiento constituye una causa de vulnerabilidad, cuando persona adulta mayor encuentra dificultades en la comunicación y en el acceso a procedimientos en los que pone en riesgo su patrimonio o recursos económicos. Problema que enfrentan personas adultas mayores de edad ante trámites que realizan ante las instituciones del servicio financiero, los notarios públicos y entidades responsables del registro inmobiliario en sus respectivas entidades.

Esto es así, puesto que actualmente, la hipoteca inversa está regulada en el estado de México<sup>6</sup> y en la Ciudad de México,<sup>7</sup> con un potencial importante para implementarse en otras entidades de la federación. Mediante el contrato de hipoteca inversa, la entidad financiera se obliga a pagar, en una sola exhibición o en forma periódica, el monto del crédito otorgado a la persona adulta mayor o a su beneficiario que deberá ser su cónyuge, concubina o concubinario de edad igual o superior a los 60 años. Para otorgar esta hipoteca están autorizadas las instituciones privadas del sistema bancario mexicano facultadas, y su contratación requiere un avalúo que deberá actualizarse cada dos años, para estar acorde con la plusvalía que el bien inmueble adquiera con el tiempo. Para dicho avalúo, precisó, la cantidad pactada entre la entidad financiera y el adulto mayor debe ser suficiente para que éste último cumpla sus necesidades básicas, por lo que no podrá ser inferior a 70 por ciento de valor comercial del inmueble establecido.

La hipoteca inversa es una oportunidad de financiamiento para los adultos mayores de edad, como complemento de un sistema de pensiones cada vez más precarios. Lo cual detonará el mercado de compraventa de vivienda usada. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2014, 83.3 por ciento de las personas mayores de 60 años son dueños de una vivienda.<sup>8</sup> el 82 por ciento de los adultos mayores es propietario de inmuebles que no rebasan los 800 mil pesos). La hipoteca inversa coloca

en vulnerabilidad extrema el patrimonio de los que opten por este recurso.

En este esquema de financiamiento para adultos mayores de edad, gana los bancos, constructores y todo aquel habilitado como institución crediticia, quienes podrán hacerse de un inmueble prestando una cantidad menor al valor comercial del inmueble que se da en garantía. En forma disfrazada, los gobiernos que las permiten o alientan, encuentran una salida a la presión política y fiscal que representa el crecimiento de la población de la tercera edad sin recursos suficientes para su manutención.

Además, es de considerar que una de las principales empresas inmobiliarias, Century 21, informa que tres de cada cuatro compraventas que se realizan en nuestro país, es llevada a cabo por personas mayores de 60 años. Por ello, el sector inmobiliario se ha enfocado al adulto mayor de edad: “Con los cambios sociales y demográficos que estamos viviendo en occidente, nos encontramos que gran parte de las viviendas céntricas de mayor tamaño están ocupadas por una sola persona, en la mayoría de casos con movilidad condicionada y en edificios que por su antigüedad tampoco reúnen las mejores condiciones para personas de estas edades”, opina Ricardo Sousa, CEO de Century21 para España y Portugal.<sup>9</sup>

Por ello, cada vez más inmobiliarias intentan complacer las exigencias de un segmento que, por sus características, solicitan cada vez más que sus pisos estén adaptados a sus futuras necesidades. De esta manera, la mayoría de los mayores de 60 suelen cambiar de domicilio tras la marcha de los hijos a casas más pequeñas, cerca de hospitales y zonas comerciales. En general, apuestan por viviendas de unos 70 metros cuadrados, con una o dos habitaciones y ubicadas cerca de sus familiares.

Es en esta movilidad del mercado inmobiliario en donde deben crearse procedimientos que garanticen los derechos y mecanismos de defensa de este sector de la población, que por la edad representan una gran vulnerabilidad.

Considerando que la función notarial es competencia de las entidades federativas en términos de los artículos 12, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la distribución de competencia residual, es por ello que existen 32 leyes del notariado, puesto que es a partir de éstas que se da fe y crédito de hechos y actos jurídicos con validez y eficacia en cada una de las entidades con plena validez y reconocimiento en las otras.

Esta función que el Estado otorga a los notarios públicos incide en los derechos de los adultos mayores al intervenir en actos que afectan su patrimonio, como es el caso de transmisión de propiedades o registro de testamentos, entre otros. Por ello es importante que quienes ejercen la función notarial consideren la vulnerabilidad de los adultos mayores para expresar en forma libre y personal su voluntad pro cuanto hace a la disposición de su patrimonio. Para lo cual es necesario que los principios de protección y garantías que contiene la Ley de Adultos Mayores sean observados por quienes ejercen la función notarial en su carácter de fedatarios públicos.

Por otra parte, la finalidad del Servicio Público Registral es la de proporcionar seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles, mediante la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, dándole una apariencia jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece asentado y anotado en el Registro Público. Cada una de las 32 entidades federativas expide sus propias leyes del Registro Público de la Propiedad con su Reglamento con fundamento en sus propios códigos civiles. En la función registral debe garantizarse el derecho a la seguridad jurídica de las Personas Adultas Mayores, para tal efecto, los órganos registrales deben observar los principios contenidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por ello se propone modificar la fracción I y adicionar una nueva fracción IV, recorriendo el contenido de la actual fracción IV a la fracción V, todas en el artículo 2 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objeto de señalar como sujetos obligados en su aplicación y observación en los órganos autónomos, las instituciones del sistema bancario, a quienes ejercen las funciones notarial y registral en las entidades de la federación, para que en sus servicios y trámites observen los principios rectores de la ley en la atención y orientación de los usuarios adultos mayores.

Con lo anterior se garantiza el derecho a la seguridad jurídica y certeza en todos los actos en que intervienen personas adultas mayores de edad, evitando la afectación de su patrimonio por vicios en la expresión de su voluntad.

Por otra parte, se propone reformar la fracción III del artículo 30. Bis, con el objeto de especificar que constituye violencia patrimonial la alteración de la voluntad de los adultos mayores en sus trámites en instituciones financieras, en la elaboración de instrumentos notariales y en el registro de sus



bienes por autoridades registrales en las entidades de la federación. Actos que también se consideran para calificar la violencia económica en el desvío de recursos públicos aplicados a programas sociales que benefician a este sector de la población.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subrayado la importancia de la protección reforzada a cargo de las autoridades del Estado mexicano que merecen los grupos vulnerables, así como la transversalidad de los derechos humanos, en particular la protección especial exigible para los adultos mayores, ante quienes deben adoptar una postura diligente y pro-derechos, allegándose de los elementos para la eficiencia y eficacia de los derechos que otorga la Ley de las Personas Adultas Mayores.<sup>10</sup>

El razonamiento de la tesis subraya que dada la importancia de la **protección reforzada a cargo de las autoridades del Estado, que merecen los grupos vulnerables**, como los adultos mayores, así como de la transversalidad de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano, resulta lógico y jurídico que ese deber de protección especial sea exigible a partir de la sospecha fundada de que una persona pertenezca a aquéllos, sin ser necesario que esa situación se haya probado fehacientemente pues, en estos casos, la autoridad de que se trate debe adoptar una postura diligente y pro-derechos, a fin de determinar si un individuo tiene o no aquella calidad y si, por tanto, debe gozar de los derechos que le otorga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

En la misma tesis, se destaca que al iniciar un procedimiento administrativo de sanción, la autoridad instructora duda de la pertenencia de su destinatario a dicho colectivo vulnerable, debe actuar diligentemente y allegarse de los elementos que considere necesarios para disipar esa incertidumbre, a fin de garantizar la máxima tutela y evitar supuestos contrarios al ordenamiento mencionando, al determinar si se otorgan o no los derechos que, como adulto mayor, corresponden al particular involucrado.

Lo anterior se refuerza con el contenido garantista de la tesis **Derechos de las personas adultas mayores. El artículo 5o., fracción II, inciso C), de la ley relativa, al proteger valores constitucionales y derechos fundamentales, debe observarse por todas las autoridades del Estado mexicano.**<sup>11</sup> **En la cual se destaca el reconocimiento de los grupos vulnerables en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que requieren una**

particular protección del Estado para poder desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros de la sociedad, y no se vean reducidos, con menoscabo de su dignidad, a colectividades oprimidas por las necesidades de orden más básicas, lo que justifica que sea el propio Estado tome determinadas acciones en favor de estos grupos para inhibir las desigualdades que afronta, en atención a los principios de solidaridad e igualdad sustantiva, conferidos en el artículo 1o. constitucional. Por ello, determina que conforme al contenido del artículo 5o., fracción II, inciso c), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al disponer que las personas titulares de las prerrogativas en él prescritas tienen derecho a recibir asesoría jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sean parte, y a contar con un representante legal cuando lo consideren necesario, con el objeto conferirles un mismo nivel de oportunidad para el goce y ejercicio de sus derechos humanos, por lo cual, consigna un principio que permea al resto de los componentes del sistema jurídico, al operar de modo transversal y prevalente en las demás materias o especialidades del orden jurídico, de manera que impone a las autoridades el deber de colmar ese beneficio al sujetar a las personas adultas mayores a los procedimientos administrativos o judiciales, en coordinación con las reglas previstas para éstos, lo que implica una variación al debido proceso legal que permitirá cumplir con el propósito perseguido en la ley tutelar. Concluyendo que el precepto citado, al proteger valores constitucionales y derechos fundamentales, prevalece en el sistema jurídico mexicano y, por tanto, debe observarse por todas las autoridades del Estado.

Aunado a las consideraciones anteriores, encontramos que el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo regula la suplencia e la queja:

Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:

I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.

III. En materia agraria, conforme lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley.

IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.

V. En favor de los menores de edad o incapaces.

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción V, procede la suplencia de la queja cuando se trate de menores o incapacitados y se adviertan violaciones manifiestas de la ley que hayan dejado sin defensa al quejoso, garantizando la tutela efectiva de sus derechos, concretando la garantía de seguridad jurídica que deviene en certeza para las partes. Esto lo confirma la tesis

**Adultos mayores. Al pertenecer a un grupo vulnerable que los incluye en una categoría sospechosa, opera en su favor la suplencia de la queja deficiente conforme al artículo 79, fracciones VI y VII, de la Ley de Amparo.<sup>12</sup>**

Con los argumentos anteriores, y la vinculación que deriva para el Estado mexicano de la integración de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al bloque de constitucionalidad del sistema jurídico nacional, prevalece el respeto de la norma internacional que fue ratificada en un tratado, acorde con el principio pacta sunt servanda y principio de no invocación del derecho interno para no cumplir una obligación internacional –artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Lo anterior obliga a modificar el sistema interior conforme los parámetros del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que a la letra dispone:

Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales

derechos y libertades. Consecuentemente el Estado mexicano debe adaptarse a los estándares internacionales.

Atendiendo a la información que proporcionan las instituciones de servicios financieros en nuestro país, y la necesidad de proteger el patrimonio que a lo largo de su vida han construido los adultos mayores, ante posibles prácticas desleales que los perjudiquen o los coloquen en un estado de indefensión, es necesario y exigible que para que los adultos mayores ejerciten con plenitud sus derechos cuenten con protección adicional en los actos en los que está en juego su patrimonio y recursos económicos. Para su mejor protección y garantía de certeza jurídica se propone reformar el inciso d) de la fracción II del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

A continuación, se muestra el siguiente cuadro comparativo de la legislación vigente con la propuesta de modificación.

Artículo vigente	Propuesta de reforma
<p>Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:</p> <p>I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;</p> <p>II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;</p> <p>III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y</p> <p>IV. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores</p>	<p>Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:</p> <p>I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, y <b>órganos autónomos</b> en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;</p> <p>II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;</p> <p>III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada;</p> <p><b>IV. Las instituciones del sistema financiero, así como quienes ejercen la función notarial y registral en las entidades federativas, y</b></p> <p>V. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores</p>
<p>Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia contra las Personas Adultas Mayores, son:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;</p>	<p>Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia contra las Personas Adultas Mayores son:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes</p>

<p>hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado.</p> <p>IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas; <u>así como</u> la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro de trabajo;</p> <p>V. ...</p> <p>VI. ...</p>	<p>comunes o propios de la víctima, o <b>alteración de instrumentos notariales, datos o asientos registrales de bienes muebles o inmuebles de su propiedad</b>, hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado.</p> <p>IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas; la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro de trabajo; <b>así como el desvío de recursos financieros de su propiedad, la alteración de registros patrimoniales y el desvío de beneficios de programas sociales a los que tenga derecho.</b></p> <p>V. ...</p> <p>VI. ...</p>
<p><b>Artículo 5o.</b> De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:</p> <p>I. ...</p> <p>II. De la certeza jurídica:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, <u>se deberá tener atención preferente</u> en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presión ni violencia.</p> <p>III a la IX...</p>	<p><b>Artículo 5o.</b> De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:</p> <p>I. ...</p> <p>II. De la certeza jurídica:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, <b>se suplirá la queja deficiente</b> en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presión ni violencia.</p> <p>III a la IX...</p>

Las reformas que se presentan no tienen impacto presupuestal en los operadores administrativos y judiciales que deben observar y garantizar el cumplimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Además de garantizar derechos reconocidos en el Derecho Internacional, se da pauta para implementar las mejores prácticas para un trato con dignidad a nuestros Adultos Mayores.

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente el siguiente proyecto de

**Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas mayores para garantizar su patrimonio y defensa financiera**

**Único.** Se **reforma** la fracción I del artículo 2; fracciones III y IV del artículo 3 Bis; inciso d) de la fracción II del artículo 5. Se **adicionan** la fracción IV del artículo 2, recorriéndose la subsecuente. Todos de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde a:

I. El Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como las entidades federativas, los municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, **y órganos autónomos** en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

II. ...

III. ...

**IV. Las instituciones del sistema financiero, así como quienes ejercen la función notarial y registral en las entidades federativas, y**

V. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Artículo 3o. Bis. Los tipos de violencia contra las personas adultas mayores, son:

I. ...

II. ...

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, **o alteración de instrumentos notariales, datos o asientos registrales de bienes muebles o inmuebles de su propiedad**, hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado.

IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas; la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro de trabajo; **así como el desvío de recursos financieros de su propiedad, la alteración de registros patrimoniales y el desvío de beneficios de programas sociales a los que tenga derecho.**

V. ...

VI. ...

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. ...

II. De la certeza jurídica:

a. ...

b. ...

c. ...

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, **se suplirá la queja deficiente** en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presión ni violencia.

III a la IX...

### Transitorios

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Se derogan las disposiciones que se opongán al presente decreto.

### Notas

1 La Encuesta Intercensal 2015, se llevó a cabo con la finalidad de actualizar la información sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre el Censo de 2010 y el que habrá de realizarse en 2020. La cual se puede consultar en

<http://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/>

2 [http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/edad2016\\_0.pdf](http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/edad2016_0.pdf).

3 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, últimas reformas publicadas el 12 de julio de 2018.

4 La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 se llevó a cabo con la finalidad de proporcionar información estadística relacionada con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y migración (interna e

internacional); así como otros temas referidos a la población, los hogares y las viviendas. La cual se puede consultar en:

<https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/default.html>

5 2011523. 1a. CXXXIII/2016 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Página 1103. Amparo directo en revisión 1399/2013. Olivia Garza Barajas. 15 de abril de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

6 Gaceta del Gobierno del Estado de México, 7 de mayo de 2013, Decreto 87. Se reforma el artículo 7.1124, se adiciona un Capítulo III Bis denominado De la Hipoteca Inversa del Título Decimoquinto denominado De la Hipoteca, del artículo 7.1124 Bis al artículo 7.1144 Undecies del Código Civil del Estado de México.

7 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 27 de marzo de 2017. Se adiciona un Capítulo III Bis al Título Décimo Quinto del Código Civil para el Distrito Federal, bajo la denominación de "Hipoteca Inversa".

8 <https://www.bbva.com/es/la-hipoteca-inversa-en-mexico-como-mecanismo-de-pension/>

9 <https://www.lainformacion.com/empresas/inmobiliario/el-negocio-de-la-vejez-las-inmobiliarias-pelean-por-los-8-7-millones-de-jubilados/6341921/>

10 **Personas adultas mayores. Ante la duda de la pertenencia del particular destinatario de un procedimiento administrativo de sanción a ese grupo vulnerable, la autoridad que emite el acuerdo de su inicio debe actuar diligentemente, para garantizar la máxima tutela.** SCJN. Décima Época. Número de Registro: 2010861. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, enero de 2016, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: I.1o.A.E.96 A (10a.). Página: 3382.

11 Suprema Corte de Justicia. Tribunales Colegiados. Décima Época. Número de Registro: 2010840. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, enero de 2016, Tomo IV. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.1o.A.E.1 CS (10a.). Página: 3248

12 SCJN. Tribunales Colegiados. Décima Época. Número de Registro: 2014880. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Gaceta del

Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, agosto de 2017, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: XXVII.3o.121 K (10a.) Página: 2752

Sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica).»

### Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados.

---

#### CÓDIGO PENAL FEDERAL

---

«Iniciativa que adiciona el artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, **José Salvador Rosas Quintanilla**, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se por el que se adiciona el artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal**.

#### Considerando

La amplia oferta de atractivos con la que cuenta nuestro país trasciende cualquier imagen que se tenga de él tanto por propios como extraños. La existencia de ecosistemas variados, la riqueza gastronómica, la presencia de zonas arqueológicas, las producciones artísticas de los grandes creativos mexicanos, la turbulenta historia nacional, las obras arquitectónicas de gran índole y sus paisajes urbanos y rurales, dan muestra de lo mucho que como país tenemos que ofrecerle al mundo. Muchos de estos bienes materiales e inmateriales, se encuentran protegidos, donde el proceso ha sido largo y extenso en el plano del derecho internacional para protegerlos, siendo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) una de las principales instituciones que ha logrado consolidar acciones y normativas preocupadas en la materia.

Las acciones y regulaciones, por desgracia, corresponden a un mercado negro que se ha desarrollado por décadas: el de

los bienes culturales. Estos abarcan esculturas, pinturas, indumentaria, gastronomía, entre otras cosas, donde la facilidad de transporte los ha vuelto objetos de colección sumamente atractivos para coleccionistas privados, los cuales pueden ser adquiridos de forma legal o ilegal de acorde a lo estipulado respecto a las normatividades de cada nación.

La valía de la preservación y protección de estos bienes es un acto ejemplar que organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) realizan constantes obras al respecto, haciendo uso de especialistas egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía *Manuel del Castillo Negrete* (ENCRyM), donde la preparación profesional que estos reciben usualmente va enfocada a la preservación del patrimonio, donde sus conocimientos colaboran no solo al mantenimiento del bienestar físico de los objetos y estructuras, sino también a la historia e información pertinente entorno al contexto histórico-social de las obras, contenido que abona al atractivo estético que esta clase de objetos cuentan.

Por desgracia, la carencia de especialistas en la materia, la inexistencia de una base de datos centralizada de bienes culturales y la proliferación de zonas arqueológicas o históricas sin ser exploradas a profundidad, ha derivado en un escenario de vulnerabilidad para esta clase de objetos históricos, sujetos al vandalismo y saqueo por parte de delincuentes que comercian en el mercado negro de bienes culturales. La dificultad para el seguimiento de ellas, desafortunadamente, corresponde a la naturaleza desconocida de lo nuevo: la aparición de nuevos bienes únicamente puede ser identificada si aquel que la encuentra decide llevarla con las autoridades adecuadas, por lo que quedar sujetos a la buena voluntad de los saqueadores es una expectativa irreal, mostrando un gran problema en la materia y la relevancia de las autoridades aduaneras y de control migratorio que eviten que ésta práctica siga operando.

La preocupación, a futuro, irá en aumento, donde el mercado de bienes culturales es uno de los de mayor generación de ingresos entre los mercados negros internacionales, solo detrás del tráfico de drogas y de armas. Para el año 2014, la Unesco presentó el reporte: “La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales; La Convención de 1970: Pasado y Futuro”,<sup>1</sup> en el cual se menciona que hasta el primer tercio de la presente década, el valor de las ventas de bienes culturales, legales e ilegales, alcanzaba una cantidad cercana a los 60 mil millones de dólares<sup>2</sup> por sus operaciones de carácter

internacional, donde la parte legal de estas actividades se caracteriza por la realización de subastas de colecciones enteras. Muchas de ellas corresponden a la obtención de bienes de forma ilegal a lo largo de décadas pasadas, como la realizada por el hotel Drouot en septiembre de 2019<sup>3</sup> y la realizada por la casa Sotheby's a finales de octubre de 2019,<sup>4</sup> ambas en territorio francés.

Representando pérdidas en el plano de lo “legal”, esta clase de situaciones deben ser evitadas a toda costa mediante la erradicación del hurto de bienes culturales al interior de nuestro país, donde las labores que se han realizado en la última década muestran un panorama desalentador ante la incidencia del delito. Entre 2008 y 2018, el gobierno mexicano ha logrado recuperar un total de 634 objetos que pretendían atravesar sus fronteras,<sup>5</sup> donde la relevancia o no de dichas confiscaciones es inconmensurable ante el desconocimiento sobre la cantidad de bienes que se encuentran en circulación al interior del mercado negro. Sobre el desconocimiento de los productos ofertados, la opacidad de los criterios de valuación y la secrecía que implica cualquier mercado negro, la información detallada sobre los bienes extraídos únicamente puede ser vista posteriormente al hecho, lo que implica la carencia de datos concisos que permitan tomar decisiones definitivas para la erradicación del crimen.

Tomando en cuenta la relevancia de dichos bienes para la memoria histórica de nuestras comunidades, como catalizadores de la industria turística, al igual que el impacto simbólico que éstas tienen, dejar de lado esta clase de labores únicamente tiene un impacto sobre el bienestar histórico y económico del país, ya que la existencia y preservación de dichos bienes sigue operando como un gran incentivo turístico para los visitantes extranjeros, según palabras de Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia.<sup>6</sup> De acuerdo con la información explicitada por él, la industria turística motivada por nuestros bienes culturales representa 2 mil 500 millones de dólares al año por concepto de visitas a museos o zonas arqueológicas.<sup>7</sup> Con esto, no garantizar la protección adecuada de bienes nacionales únicamente es contraproducente para nuestro país, por lo que dotar de un marco legal pertinente para la prevención del robo de bienes culturales resulta necesario.

La labor, importantísima en el plano operativo de las autoridades pertinentes, requiere de más herramientas legales que permitan emitir las sanciones adecuadas, por lo que proponerlo al interior del Código Penal Federal ayudará a darle su correcta dimensión y tratamiento de acorde a la ley.

Por lo tanto, proponer un periodo en prisión de 4 a 10 años me parece pertinente ante el daño que esto provoca para la historia de los pueblos, las arcas de la nación y el bienestar de la ciudadanía en general.

Sobre este escenario, a continuación clarifico los cambios que se proponen en el siguiente cuadro:

Código Penal Federal VIGENTE	Código Penal Federal MODIFICACIÓN
Artículo 376 Quáter. ... Artículo 377.- Se sancionará ...	Artículo 376 Quinquies. A quien cometa el delito de robo de bienes culturales que son propiedad de la nación, se le impondrá una pena de 4 a 10 años de prisión, sin importar el objeto o el periodo histórico de lo robado.  Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.

Con esto, se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

### **Decreto por el que se adiciona el artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal**

**Único.** Se adiciona el artículo 376 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 376 Quinquies.** A quien cometa el delito de robo de bienes culturales que son propiedad de la nación, se le impondrá una pena de 4 a 10 años de prisión, sin importar el objeto o el periodo histórico de lo robado.

**Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.**

### **Transitorio**

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### **Notas**

1 Unesco. (2014). La lucha contra el tráfico ilícito de objetos culturales.L. convención de 1970: pasado y futuro, 2 de diciembre de 2019, de Unesco. Sitio web:

[http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Info\\_Kit\\_ES.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Info_Kit_ES.pdf)

2 Ídem

3 Kasia Wyderko. (2019). Francia avaló subasta, “quejas son ridículas”, revira la Casa Millon, 2 de diciembre de 2019, de 24 horas. Sitio web:

<https://www.24-horas.mx/2019/09/20/francia-avalo-subasta-quejas-son-ridiculas-revira-la-casa-millon/>

4 Georgina Zerega. (2019). México pierde otra batalla por 44 piezas de arte precolombino subastadas en Francia, 2 de Diciembre de 2019, de El País. Sitio web:

[https://elpais.com/cultura/2019/10/31/actualidad/1572544644\\_868267.html](https://elpais.com/cultura/2019/10/31/actualidad/1572544644_868267.html)

5 Manuel Espino. (2019). Piezas arqueológicas robadas en México llegan al extranjero, 2 de diciembre de 2019, de El Universal. Sitio web:

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piezas-arqueologicas-robadas-en-mexico-llegan-al-extranjero>

6 Samantha Nolasco; J. Francisco de Anda. (2019). El INAH es la gallina de los huevos de jade: Diego Prieto, 26 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web:

<https://www.economista.com.mx/arteseideas/El-INAH-es-la-gallina-de-los-huevos-de-jade-Diego-Prieto-20190610-0148.html>

7 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.**

LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA, LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, LEY QUE CREA LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, LEY DE PUERTOS, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos, que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Guardia Nacional, Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que crea la Agencia Espacial Mexicana, de Puertos, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos ordenamientos legales a efecto de incorporar el principio de equidad de género, en los términos siguientes

### Exposición de Motivos

La historia de nuestro país se ha venido escribiendo plasmando estereotipos de género, que destacan y enaltecen la participación, contribuciones y gestas de muchos próceres hombres, cuyos méritos y legados son reconocidos y compartidos. La historia también registra, pero no de la misma forma, la participación y aportaciones de grandes mujeres, en las etapas más relevantes de nuestro país.

Al respecto, la historia ha registrado la participación de valiosas mujeres, a la cual no se le ha dado la relevancia y reconocimiento que han merecido, de manera enunciativa, Josefa Ortiz de Domínguez, Sor Juana Inés de la Cruz, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario, Eulalia Guzmán, Elvia Carrillo Puerto; esta última, entregada revolucionaria y **primera diputada mexicana** quien impulsó el derecho a la

educación de las mujeres, el derecho al voto y una mejor atención en materia de salud de las mujeres.

Como tamaulipeca, destaco la trayectoria de la profesora Amalia González Caballero de Castillo, la primera mujer embajadora de nuestro país en Suecia, primera mujer en ser miembro de un gabinete presidencial, el de Adolfo Ruiz Cortines. Fundadora y presidenta de las organizaciones Ateneo Mexicano de Mujeres, y del Club Internacional de Mujeres. Desde ámbitos diferentes, compartiendo la lucha de Elvia Carrillo Puerto, promovió el derecho de la mujer a votar y ser votada, lo que se concretó con el decreto del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953.

Unos de los conceptos generalmente aceptados en la academia así como en instrumentos legales expresa que la paridad de género debe entenderse como un **principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos y cargos dentro de la administración pública federal o estatal, así como en cargos de representación política, se trata de un criterio para asegurar la participación igualitaria entre hombre y mujeres.**

La paridad de género busca “lograr que la toma de decisiones públicas y políticas recaiga con las mismas oportunidades y responsabilidades para ambos géneros, redistribuyendo el poder público de manera justa”,<sup>1</sup> al establecer la representación política en cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento de hombres.

Es necesario señalar que la paridad de género es un paso evolutivo sobre las cuotas de género, pues éstas únicamente fijan “un porcentaje mínimo de presencia femenina en los puestos de gobierno, los espacios de representación política o en los partidos”,<sup>2</sup> es decir, la cuota podría ser 4 mujeres por cada 10 hombres o un tercio del total de representantes y candidatos.

Al respecto el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres define como igualdad de género a la “situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”.

De acuerdo con algunas fuentes doctrinales, la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada

el 23 de mayo de 2014, que reglamentó en lo conducente la reforma constitucional en materia político electoral publicada el 10 de febrero de 2014, condicionó que México se ubicará entre los primeros 15 países a nivel mundial en incluir la paridad de género en cargos de elección popular a nivel federal.

Para consolidar una democracia de resultados es necesaria una apertura plena de los canales de participación a las mujeres. Por ello, la reforma establece que los partidos políticos estarán obligados a garantizar que 50 por ciento de sus candidaturas a legisladores federales y locales sean ocupadas por mujeres. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros se le asignen exclusivamente aquellos distritos en los que el partido ha obtenido resultados bajos. Adicionalmente, el porcentaje de financiamiento público que los partidos deben destinar para la promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer se incrementa, pasando del dos por ciento al tres por ciento.<sup>3</sup>

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que formó parte de las reformas estructurales concretadas durante la LXI y LXII Legislaturas, garantiza la paridad de géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular, en los términos siguientes:

#### **Artículo 232.**

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta ley.
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



4. El instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el secretario del Consejo General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas, qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin efecto los demás.

#### **Artículo 233.**

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta ley.

#### **Artículo 234.**

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.

Estas reformas, las cuales han sido observadas por los partidos políticos de nuestro país, se han materializado en la composición de la Cámara de Diputados que actualmente se integra por 241 mujeres, que representan 48.3 por ciento de la Cámara de Diputados, a partir de lo cual la LXIV Legislatura ha sido denominada como la Legislatura de la Paridad de Género.

La Legislatura de la Paridad de Género, constituye un logro que crea condiciones para seguir avanzando en la construcción de un país más igualitario, oportunidad que debemos aprovechar al máximo, en beneficio de las mujeres mexicanas, madres, jefas de familia, estudiantes y líderes lo cual, estoy segura, se reflejará en beneficio de toda la sociedad mexicana.

Avanzando hacia la consolidación de la actualización del marco jurídico nacional en materia de equidad de género e igualdad sustantiva, cabe destacar la aprobación el 23 de mayo del presente año, de la reforma a los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fortalece el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México y establece la obligatoriedad de observar el principio de la paridad en la integración de los Poderes de la Unión, así como de los relativos de las entidades federativas y de los ayuntamientos.

Una vez realizada la declaratoria por parte de la mayoría de los congresos de las legislaturas estatales, el 6 de junio de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia de paridad de género.

Entre otros aspectos, cabe destacar el lenguaje inclusivo de las reformas, a partir de lo cual se incorpora el concepto de ciudadanía, en sustitución de “ciudadanos”; diputadas y diputados, senadores y senadoras, ministros y ministras, como quedó expresado en parte de los debates, es importante referirse a lo femenino y dejar de pensar que el masculino comprende e incluye la perspectiva de género.

Dicha reforma da un nuevo sentido a la toma de decisiones, por lo que la paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Sus autoridades deberán ser electas, nombradas o designadas, respetando el principio de paridad de género.

El principio de paridad de género es asunto un tema de justicia y equidad que deberá seguir siendo fortalecido, por lo que resulta necesario seguir trabajando para concretar la plena participación de la mujer en cargos públicos, sin que esté sujeta a la voluntad política de una persona, grupo o circunstancias de sexo o de género.

Cabe destacar que en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la referida reforma constitucional el constituyente estableció el improrrogable plazo de un año para la realización de las adecuaciones legislativas en los ámbitos federal y estatal, que armonicen las legislaciones al mandato constitucional. En tal virtud la presente iniciativa es congruente con el mandato constitucional y tiene por objetivo la reforma de diversos ordenamientos legales a efecto de incorporar el principio de equidad de género e igualdad sustantiva.

La incorporación del principio de paridad de género en el marco jurídico nacional es necesario en el proceso de reconocimiento que actualmente se desarrolla en diferentes ámbitos de la vida nacional. Es necesaria la visibilización que implica el mandato expreso para revisar las estructuras vigentes de las dependencias y entes públicos para dar vigencia al principio de la paridad de género.

Lo anterior encuentra mayor sustento cuando persisten, en algunos ámbitos, declaraciones de funcionarios y representantes populares que denigran el papel de la mujer, los cuales no pretendo sean motivo de mención en la presente exposición de motivos.

La Legislatura de la Paridad de Género crea un nuevo paradigma que debemos aprovechar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sus familias en todos sus ámbitos. Tengo la plena convicción de que las reformas propuestas beneficiaran a la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres. Será un error pensar que dichas reformas en la materia sólo tienen como beneficiarias a las mujeres.

Por los razonamientos expresados las reformas planteadas en la presente iniciativa son congruentes con la reforma constitucional y están encaminadas a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional citada.

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

### **Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales, a efecto de incorporar el principio de paridad de género**

**Primero.** Se reforma el párrafo final del artículo 15 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 11 de la Ley de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:

**Artículo 11.** Petróleos Mexicanos contará con la organización y estructura corporativa que mejor convenga para la realización de su objeto, conforme lo determine su Consejo de Administración en términos de esta ley.

La organización y estructura referidas deberán atender a la optimización de los recursos humanos, financieros y

materiales; la simplificación de procesos; la eficiencia y la transparencia y la adopción de las mejores prácticas corporativas y empresariales a nivel nacional e internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión.

### **En la designación de los cargos correspondientes a la estructura, se dispondrán los procedimientos para garantizar el principio de equidad de género.**

**Artículo 15.** El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente:

**I. ...**

**II.** Tres consejeros del gobierno federal designados por el Ejecutivo federal, y

**III.** Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos.

...

...

...

En la designación de los consejeros señalados en las fracciones II y III se velará por que la composición del Consejo de Administración sea diversificada, de acuerdo a la preparación, experiencia y capacidad de sus integrantes, **asegurando en todo momento el principio de paridad de género, dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

**Segundo.** Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 7o. de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue:

**Artículo 7o. Al frente del Instituto estará un director o directora, que será apoyado en sus atribuciones por una Subdirección General,** nombrados por el secretario de Cultura, sus funciones serán las que señale el reglamento correspondiente y serán designados **eligiéndose** entre personas que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra de notoria importancia y de mérito superior. **Los o las titulares de las direcciones o**

**subdirecciones de área, de las jefaturas de departamento y áreas técnicas, deberán contar con experiencia reconocida en la rama artística, artes o literatura y serán designados por el secretario de Cultura a propuesta del director general del Instituto, debiendo tener en todo caso el carácter de empleados de confianza.**

**El titular del Instituto dispondrá los procedimientos para la designación de los funcionarios y servidores públicos de éste, observando el principio de equidad de género.**

**Tercero.** Se reforma el párrafo final del artículo 12 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley de la Guardia Nacional, para quedar como sigue:

**Artículo 10.** La estructura, integración y organización de la Guardia Nacional será la que disponen esta ley y su reglamento.

**En la designación de los cargos correspondientes a la estructura, se dispondrán los procedimientos para garantizar el principio de equidad de género.**

**Artículo 12.** La Guardia Nacional realizará sus operaciones mediante una estructura que comprenderá los siguientes niveles de mando:

- I. Secretario;
- II. Comandante;
- III. Coordinador Territorial;
- IV. Coordinador Estatal, y
- V. Coordinador de Unidad.

Para la designación de las personas titulares de las coordinaciones previstas en las fracciones III, IV y V del presente artículo se deberá tomar en cuenta que hayan cumplido con la escala jerárquica establecida, así como contar con los años de servicio que señale el reglamento. **En todo caso, se dispondrán los procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.**

**Cuarto.** Se reforma el artículo 8o. y se adicionan un tercer y un cuarto párrafo al artículo 6o. de la Ley Orgánica del

Instituto Nacional de Antropología e Historia, para quedar como sigue:

**Artículo 6o.** El Instituto estará a cargo de un director general, nombrado y removido libremente por el secretario de Cultura.

Para ser director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia se requiere ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayor de 30 años de edad, con grado académico y méritos reconocidos en alguna de las materias de competencia del Instituto.

**En observancia al principio de paridad, en cada nuevo nombramiento del director general se alternará el género de la persona que la ocupe.**

**El titular del Instituto dispondrá los procedimientos para la designación de los funcionarios y servidores públicos de éste, observando el principio de equidad de género.**

**Artículo 8o.** El Instituto contará con un Consejo General Consultivo que será presidido por el director general y que estará integrado a partir de la representación de los consejos de área, **con observancia del principio de equidad de género.** Su conformación y funcionamiento serán regulados por el reglamento de esta ley.

**Quinto.** Se adiciona un párrafo final al artículo 6 de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, para quedar como sigue:

**Artículo 6.** La Agencia contará con los siguientes órganos de administración y gobierno:

- I. Junta de Gobierno;
- II. Dirección General;
- III. Órgano de Vigilancia, y
- IV. Las estructuras técnicas y administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico.

**En la designación de los cargos correspondientes a la estructura, se dispondrán los procedimientos para garantizar el principio de equidad de género.**

**Sexto.** Se reforma el artículo 42 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

**Artículo 42.** Para los puertos y terminales que cuenten con una administración portuaria integral, el gobierno de la entidad federativa correspondiente podrá constituir una comisión consultiva, formada con representantes de los gobiernos estatal y municipales, **así como de las cámaras de comercio e industria de la región, de los usuarios, de los cesionarios y prestadores de servicios portuarios**, del administrador portuario y de los sindicatos, así como de quienes, a propuesta del presidente, la comisión determine, **promoviendo en todo caso la integración con equidad de género.** La comisión será presidida por el representante de la entidad federativa que corresponda.

**Séptimo.** Se reforma el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

**Artículo 17.** El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema y gozará de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. Contará con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de estos Centros.

El Secretario Ejecutivo y los titulares de los Centros Nacionales serán nombrados y removidos libremente por el presidente del Consejo, **asegurando en todo momento el principio de paridad de género dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, y deberán cumplir con los siguientes requisitos:

**I.** Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, que no tengan otra nacionalidad y estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

**II.** Tener más de treinta años de edad;

**III.** Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado;

**IV.** Tener reconocida capacidad y probidad, así como contar con cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y

**V.** No haber sido sentenciados por delito doloso o inhabilitados como servidores públicos.

**Octavo.** Se reforman el párrafo final del artículo 7, así como el párrafo final del párrafo segundo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, para quedar como sigue:

**Artículo 7o.** La Asamblea General es la autoridad suprema del Instituto, y se integrará en forma tripartita con cuarenta y cinco miembros, designados:

Quince por el Ejecutivo federal,

Quince por las organizaciones nacionales de trabajadores, y

Quince por las organizaciones nacionales patronales.

Por cada miembro propietario se designará un suplente.

Los miembros de la Asamblea General durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos libremente por quien los designe. **En todo caso, se promoverá en la integración con equidad de género.**

**Artículo 12.** El Consejo de Administración estará integrado por quince miembros, designados por la Asamblea General en la forma siguiente: cinco a proposición de los representantes del gobierno federal, cinco a proposición de los representantes de los trabajadores y cinco a proposición de los representantes patronales, ante la misma Asamblea General. Por cada consejero propietario se designará un suplente.

Los miembros del Consejo de Administración no lo podrán ser de la Asamblea General. **En todo caso, se promoverá en la integración con equidad de género.**

### Transitorio

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### Notas

1 Observatorio de Participación Política de las Mujeres. (s.f.). Conceptos básicos. (En línea). Instituto Nacional de las Mujeres. URL:

<https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?q=MTA4>

2 Medina Espino, Adriana. (2010, febrero). La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad. (En línea).

Cámara de Diputados. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. URL:

[http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite\\_CEAMEG/Libro\\_Part\\_Pol.pdf](http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf)

3 Gobierno de la República. Explicación Ampliada de la Reforma Político- Electoral.

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION\\_AMPLIADA\\_REFORMA\\_POLITICA\\_ELECTORAL.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFORMA_POLITICA_ELECTORAL.pdf)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica).»

### Se turna a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

---

## LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

---

«Iniciativa que reforma los artículos 75 y 170 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de la soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 170 fracción VIII de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

### Exposición de Motivos

La adecuada nutrición es un tema fundamental para el bien de nuestros infantes y sobretodo para prevenir múltiples enfermedades en edad joven o adulta que muestran los indicadores gubernamentales y no gubernamentales.

La mala nutrición afecta a nuestros infantes y adolescentes, en todos los extremos, es dañino para las niñas y niños, la talla baja hace que exista un inadecuado desarrollo y un sistema inmunológico débil, en el otro extremo la obesidad y el sobrepeso son el camino idóneo para desarrollar diabetes, enfermedades del corazón o riñones, afectando la calidad de vida en presente o futuro de los mexicanos.

Conforme al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, señala lo siguiente:

- 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas.
- 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. La desnutrición se presenta principalmente en los estados del sur de México y en las comunidades rurales más que en las urbanas; los más afectados son los hogares indígenas.
- En México solamente 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida. La leche materna es el mejor alimento para los bebés, ya que les proporciona todos los nutrientes que necesitan y ayuda a prevenir muchas enfermedades; además le brinda beneficios a las madres.<sup>1</sup>

En la presentación del estudio “La pesada carga de la obesidad: La economía de la prevención” que dictó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria, señala que cerca de 73 por ciento de la población mexicana padece de sobrepeso (en comparación con una quinta parte de la población en 1996). México tiene una de las tasas más altas de obesidad de la OCDE. Además, 34 por ciento de las personas obesas sufren obesidad mórbida –el mayor grado de obesidad–. De acuerdo con nuestras proyecciones, las enfermedades relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en México en más de 4 años durante los próximos 30 años. Se trata de la mayor reducción proyectada entre los países de la OCDE. Pero lo más trágico es el crecimiento de la obesidad infantil, la cual se ha duplicado de 7.5 por ciento en 1996, a 15 por ciento en 2016.<sup>2</sup>

En anteriores administraciones se estilaba imponer gravámenes a los alimentos denominados chatarra y seguir con la venta indiscriminada de ellos. Hoy, el presidente de

México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se aumentarán impuestos, pero que se tiene que atender el tema de la obesidad, porque es grave y tiene que ver con muchas causas.

La transformación en materia alimenticia inició con la nueva ley de etiquetado de productos y bebidas, recientemente en diciembre del 2019, presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y artículo 75 de la Ley General de Educación para establecer que un nutriólogo expida certificado a los alumnos de educación básica sobre su índice de masa corporal en el primero, tercero y sexto año de primaria.

### Argumentos

Conforme a la OCDE, los altos niveles de sobrepeso y obesidad también afectan el desempeño económico de México. El análisis estima que el sobrepeso y las enfermedades relacionadas:

- 1) Reducirán la fuerza laboral mexicana en el equivalente a 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo por año, ya que las personas con sobrepeso y enfermedades relacionadas tienen menos probabilidades de estar empleadas y, en caso de estarlo, tienden a ser menos productivas;
- 2) Supondrán cerca del 8.9 por ciento del gasto en salud por año durante el periodo 2020 a 2050; y
- 3) Le restará al PIB mexicano 5.3 puntos porcentuales, un porcentaje muy superior al promedio de la OCDE del 3.3 por ciento, una cifra que ya de por sí es demasiado alta. De hecho, México es el país de la OCDE en donde el sobrepeso, la obesidad y sus enfermedades derivadas tendrán el impacto más grande en el PIB entre 2020 y 2050.<sup>3</sup>
- 4) Es urgente que se realice una reducción calórica en los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares y calorías, evitando enfermedades en el corto, mediano y largo plazo.
- 5) Debe buscarse implementar políticas públicas efectivas, que sean preventivas y en temprana edad.
- 6) Que con la participación de padres de familia, autoridades escolares y de salud, podrá iniciar el cambio,

para conseguir una alimentación saludable en las escuelas de educación básica del sector público y privado.

7) Que es necesario diferenciar las autoridades educativas, de las escolares, ya que las primeras son de nivel dirección general de toda una entidad federativa; mientras que las segundas, son las que dirigen particularmente una escuela pública o privada.

### Derecho Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas **gozarán de los derechos humanos** reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)

En este sentido, se comprende que es derecho humano de niñas y niños, el ser atendidos para controlar su talla y peso, con el fin de inculcarle hábitos alimenticios adecuados y, con ello, contener y resolver la problemática.

Artículo 4o. **Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.** La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...)

Del precepto se desprende que las niñas y niños tienen derecho a la salud, por ende, a la aplicación de menús saludables por calendario semanal, para vigilar el índice de masa corporal de infantes que cursan educación básica de escuelas públicas y privadas.

Para mejor comprensión se plasma el cuadro comparativo de los artículos sujetos a la reforma con proyecto de decreto.

**Ley General de Educación**

Texto actual	Texto Propuesto
<p><b>Artículo 75.</b> La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.</p> <p>Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo.</p> <p>Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.</p> <p>La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.</p> <p>Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables.</p>	<p><b>Artículo 75.</b> La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.</p> <p>Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo <b>que coadyuven al adecuado índice de masa corporal.</b></p> <p>Las autoridades educativas y <b>escolares</b> promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico <b>dentro, así como,</b> en las inmediaciones de los planteles escolares.</p> <p>La Secretaría, <b>por medio las escuelas de educación básica públicas o privadas,</b> establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, <b>la comida sana y balanceada,</b> los buenos hábitos, <b>así como, las revisiones nutricionales,</b> entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.</p> <p>Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso <b>para calendarizar y planificar menús sanos de forma semanal, fomentando</b> estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables.</p>

Texto actual	Texto Propuesto
<p><b>Artículo 170.</b> Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:</p> <p>I. al VII. (...)</p> <p>VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;</p> <p>IX. al XXVI. (...)</p>	<p><b>Artículo 170.</b> Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:</p> <p>I. al VII. (...)</p> <p>VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos <b>sanos;</b></p> <p>IX. al XXVI. (...)</p>

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 170, fracción VIII de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

**Decreto por el que se reforman los artículos 75 y 170, fracción VIII, de la Ley General de Educación**

**Artículo Primero.** Se reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

**Artículo 75.** La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda

escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo **que coadyuven al adecuado índice de masa corporal.**

Las autoridades educativas y **escolares** promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico **dentro, así como,** en las inmediaciones de los planteles escolares.

La Secretaría, **por medio las escuelas de educación básica públicas o privadas,** establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, **la comida sana y balanceada,** los buenos hábitos, **así como, las revisiones nutricionales,** entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las normas oficiales mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un compromiso **para calendarizar y planificar menús sanos de forma semanal, fomentando** estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables.

**Artículo Segundo.** Se reforma el artículo 170, fracción VIII, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

**Artículo 170.** Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a VII. (...)

VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos **sanos;**

IX. al XXVI. (...)

### Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

#### Notas

1 Tomado de

<https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrición> el 13 de enero del 2020.

2 Tomado de

<https://www.oecd.org/about/secretary-general/heavy-burden-of-obesity-mexico-january-2020-es.htm> el 13 de enero de 2020.

3 Tomado de

<https://www.oecd.org/about/secretary-general/heavy-burden-of-obesity-mexico-january-2020-es.htm> el 13 de enero de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

### Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

---

## LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

---

«Iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del

artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a la siguiente

### Exposición de Motivos

Uno de las transformaciones sociales que está viviendo la mayoría de los países es el proceso de envejecimiento de su población, generando cambios en casi todos los sectores de la sociedad, tales como el mercado laboral, la demanda de bienes y servicios, así como la estructura familiar.

Según datos del informe “Perspectivas de la población mundial 2019”, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16 por ciento), más que la proporción actual de una de cada 11 en este 2019 (9 por ciento). Para 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa y América del Norte podrían tener 65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo. Se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.<sup>1</sup>

Además, la Organización Mundial de la Salud señala que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Se calcula, que entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22 por ciento, es decir, pasará de 900 millones a 2,000 millones de personas mayores de 60 años.<sup>2</sup>

Una de las principales características de este sector de la población es su vulnerabilidad, por lo cual, tanto a nivel internacional, nacional y estatal, se han firmado acuerdos, se han expedido leyes y se han creado programas sociales para su beneficio, principalmente con lo relacionado a que los adultos mayores puedan vivir de forma adecuada y con dignidad. Dada la importancia de este tema, se ha considerado como un derecho fundamental.

A nivel internacional, el derecho a una vida digna está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>3</sup> de la Organización de Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 1948, cuyo artículo 25 establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”

En este orden de ideas, es obligación del Estado propiciar las condiciones necesarias para que las personas alcancen a



satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, principalmente de los grupos menos favorecidos en alguna situación de vulnerabilidad, tal es el caso de los adultos mayores.

Por ello, el artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,<sup>4</sup> establece que toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, y que los Estados que forman parte del Protocolo, México entre ellos, se comprometen a proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas, entre otras.

Dado lo anterior, podemos observar que el derecho a una vida digna de los adultos mayores comprende la satisfacción de las necesidades esenciales de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación.

En nuestro país, hemos sido testigos también del cambio demográfico, el cual se ha dado, principalmente, por el aumento en la esperanza de vida. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo),<sup>5</sup> la población nacida en 2019 tiene una esperanza de vida en promedio de 75.1 años, comparado con los 66 años en la década de los años 80. Para 2030, se estima que la esperanza de vida al nacimiento alcanzará los 76.7 años en promedio, y para el 2050 será de 79.6 años.

La anterior cobra importancia ya que, a inicios de este siglo, las personas que tenían una edad mayor de 65 años no sobrepasaban los cinco millones de habitantes, mientras que la Encuesta Intercensal 2015 reportó que en el 2015 había 12.4 millones de personas mayores de 65 años. Además, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se prevé que para el año 2030, la población mayor de 60 años será de más de 20 millones de individuos y para el 2050 se estima que esta población de adultos mayores constituirá el 27.7 por ciento de la población mexicana.

Un dato importante a considerar para la población adulta mayor en nuestro país es que, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010,<sup>6</sup> el 61.8 por ciento de los adultos mayores dependa de un familiar y el 27.6 por ciento de su pensión. Por su parte, la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en su documento de trabajo “Ingresos y gastos del adulto mayor en México: La importancia de las pensiones”,<sup>7</sup> publicado en septiembre de 2018, señala que en México el 26 por ciento de los adultos mayores no recibe ninguna pensión, Además, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su Información Laboral al mes de octubre de 2019,<sup>8</sup> en México únicamente el 10 por ciento de las personas de 60 años o más son económicamente activas, es decir, son capaces de proveerse, por sí mismos, de los satisfactores necesarios para tener una calidad de vida digna.

Acorde con los tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo primero que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, el artículo 5o. establece que “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...”. Por su parte, el artículo 123 contempla que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley...”.

Para proteger los derechos de las personas adultas mayores se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el 25 junio de 2002, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual establece, en su artículo 3o., la cual establece, en su artículo tercero que se entiende por adulto mayor a toda persona que cuente con sesenta años o más.

Además, establece en su artículo 5o., que las personas adultas mayores tienen el derecho a la protección de la salud, la alimentación y la familia, es decir, a tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral, además de gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen; así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. Por último, este artículo establece que las personas adultas mayores tienen el

derecho a ser sujetos de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.

Por su parte, el artículo 10 establece como, objeto de la Política Nacional sobre personas adultas, el propiciar su incorporación a los procesos productivos emprendidos por los sectores público y privado, de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, así como propiciar y fomentar programas especiales de educación y becas de capacitación para el trabajo, mediante los cuales se logre su reincorporación a la planta productiva del país, y en su caso a su desarrollo profesional.

Es por todo ello, que la presente iniciativa busca hacer valer el derecho que tienen las personas adultas mayores a vivir de una manera digna, permitiendo que puedan acceder al mercado laboral y, con ello, poder valerse por sí mismos y de su manutención. De tal suerte, se propone homologar la edad establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual es la legislación especializada en la materia y, como se hizo mención anteriormente, considera como adulto mayor a las personas de 60 años o más.

Además, se propone, para lograr una mayor integración de los adultos mayores a la vida laboral, establecer un estímulo fiscal, a quien contrate a personas de 60 años y más, del 75 por ciento del salario efectivo pagado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

### **Decreto que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta**

**Único.** Se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

#### **Artículo 186. ...**

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al **75%** del salario efectivamente pagado a las personas de **60** años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

### **Transitorio**

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

#### **Notas**

1 <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html>

2 <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/>

3 [https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\\_Translations/spn.pdf](https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf)

4 <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf>

5 [http://www.conapo.gob.mx/work/models/Conapo/Mapa\\_Ind\\_Dem18/index\\_2.html](http://www.conapo.gob.mx/work/models/Conapo/Mapa_Ind_Dem18/index_2.html)

6 [http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos\\_Inicio/Enadis\\_2010\\_Inapam-Conapred.pdf](http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Enadis_2010_Inapam-Conapred.pdf)

7 [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387784/Ingresos\\_y\\_gastos\\_del\\_adulto\\_mayor\\_en\\_Mexico\\_vf-07092018\\_BUENA.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/387784/Ingresos_y_gastos_del_adulto_mayor_en_Mexico_vf-07092018_BUENA.pdf)

8 <http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20nacional.pdf>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.— Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica).»

### **Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.**

---

#### LEY FEDERAL DEL MAR

---

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, en materia de investigaciones oceanográficas, suscrita por la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del PES de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley Federal del Mar, en materia de investigaciones oceanográficas, al tenor de la siguiente

### Exposición de Motivos

Pocas veces nos ponemos a pensar lo que representan los océanos, el agua y su utilidad en la vida de los seres vivos.

Diversos estudios apuntan que más del 70 por ciento de la superficie del planeta está cubierta por agua, concentrando los océanos el 96.5 por ciento de agua salada de este total.

Las fuentes de agua dulce se concentran en ríos, lagos, arroyos, agua subterránea, glaciares, casquetes polares y en el aire en forma de vapor de agua.

De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), agencia científica del gobierno federal de ese país, la distribución del agua en el planeta es la siguiente:

FUENTE DE AGUA	VOLUMEN DE AGUA Km <sup>3</sup>	PORCENTAJE DE AGUA DULCE	PORCENTAJE DE AGUA TOTAL
Océanos, mares y bahías	1.338.000.000	–	96,54
Casquetes polares, glaciares y nieve permanente	24.064.000	68,6	1,74
Agua subterránea	23.400.000	–	1,69
Dulce	10.530.000	30,1	0,76
Salada	12.870.000	–	0,93
Humedad de tierra	16.500	0,05	0,001
Hielo de tierra y permafrost	300.000	0,86	0,022
Lagos	176.400	–	0,013
Dulce	91.000	0,26	0,007
Salada	85.400	–	0,007
Atmósfera	12.900	0,04	0,001
Agua de pantanos	11.470	0,03	0,0008
Ríos	2.120	0,006	0,0002
Agua biológica	1.120	0,003	0,0001

Como se observa, la mayor cantidad del agua se encuentra en los océanos y eso deriva que ahí se ubica la mayoría de los seres y especies vivos, los recursos naturales, minerales y energéticos, entre otros.

A pesar de ello, es un mundo del que nos falta mucho por conocer, aprender, aprovechar y cuidar.

El territorio que ocupa la República Mexicana se extiende a través de 1 millón 958 mil 201 kilómetros cuadrados de

superficie continental, 9 mil 753 kilómetros de litoral y más de 5 mil 300 kilómetros cuadrados de superficie insular.

Asimismo, se tiene la zona económica exclusiva o mar patrimonial, que se mide a partir de la línea de costa hasta las 200 millas náuticas mar adentro, lo que suma 2 millones 946 mil 825 kilómetros cuadrados más de territorio, 2 millones 175 mil 325 ubicados en el Océano Pacífico y 771 mil 550 en el Golfo de México.

También, en México tenemos más mar que tierra, pero debido a la poca atención que se ha puesto hacia ese territorio, no hemos podido consolidar una industria que acompañe al desarrollo de México, a pesar del gran potencial que posee. La base de alimentación de la sociedad mexicana bien podría estar sustentada en los recursos marinos, gracias a las innumerables especies comestibles que habitan en nuestros mares, pero ni siquiera contamos con una Secretaría de Estado que atienda este tema, lo que da una muestra de la indiferencia de las autoridades de gobierno para explotar de manera racional y con responsabilidad los recursos marinos en beneficio de la población.

Del mismo modo, abundan recursos como petróleo y energéticos, además de los poco conocidos nódulos polimetálicos, sedimentos formados en la profundidad de los océanos que concentran metales cotizados para las grandes industrias, como manganeso, hierro, calcio, cobalto, cobre, níquel y titanio.

A esto hay que sumar los diversos centros turísticos e industriales de reconocimiento internacional a lo largo de nuestros litorales. A pesar del potencial marino con que cuenta México, no tenemos una posición presumible en el manejo de los recursos que se encuentran en nuestros mares.

Por ello, la presente iniciativa busca impulsar el interés por nuestro territorio marino a través del conocimiento, capacidad, responsabilidad y sustentabilidad, así como apoyar el interés científico que se ha desarrollado en nuestro territorio pero que, desafortunadamente ha sido muy limitado y no se ha podido enganchar con el desarrollo nacional.

Nuestro país cuenta con una tradición de años de dedicación a los estudios del mar, sin embargo, la falta de recursos y de equipo necesarios para llevar a cabo la exploración y explotación no han permitido lograr los objetivos de hacer que nuestras riquezas marinas disponibles se transformen en desarrollo y riqueza nacional.

Hemos minimizado que la investigación científica oceanográfica y el aprovechamiento de los recursos del mar son tareas estratégicas para el país desde el punto de vista político, económico, educativo y social.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la Oceanografía es la “Ciencia que estudia los mares y sus fenómenos, así como su fauna y la flora marinas”.

La Oceanografía ha sido dividida en cuatro ramas:

**1. Oceanografía física.** Se encarga de estudiar las propiedades físicas y dinámicas de mares y océanos, a través de la circulación oceánica y la forma en que se distribuye el calor en éstos. Asimismo, investiga la interacción de la dinámica atmosférica con los mares y océanos, entre otras.

**2. Oceanografía química.** Examina la composición química del agua, los sedimentos marinos, los ciclos químicos fundamentales, la interacción con la atmósfera y la litosfera y sus efectos en los procesos físicos, geológicos y biológicos de los mares y océanos.

**3. Oceanografía biológica.** Estudia la clasificación de los seres vivos, de sus ambientes, morfología y fisiología. Esta rama se subdivide en cuatro apartados de acuerdo con la zona objetivo de mares y océanos: Oceanografía pelágica, Oceanografía nerítica, Oceanografía bentónica y Oceanografía demersal.

**4. Oceanografía geológica.** Se enfoca en el estudio del sustrato oceánico y su relación con la estructura del fondo marino y de las costas; en la composición mineralógica, en la estructura y dinámica de las capas oceánicas, en especial las relacionadas con fenómenos volcánicos submarinos y de subducción de placas litosféricas oceánicas; en la obtención de recursos minerales y energéticos.

La oceanografía física ha tomado mayor importancia por el tema del cambio climático, el cual ha aumentado la conciencia de gobiernos y sociedad.

Durante la Primera Sesión Ordinaria el 12 de julio de 2007, de la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica (Conacio), el entonces Secretario de Marina y Presidente de ese organismo, Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, atinadamente mencionó que “en los

ámbitos no relacionados con la investigación oceanográfica aún existe una noción de que este es un tema eminentemente académico o del interés de expertos, y no de un asunto que conduce al desarrollo y la calidad de vida. Esta incompreensión acerca del valor de la investigación científica y tecnológica es tal vez el mayor obstáculo que interfiere para que la investigación oceanográfica logre por completo sus objetivos o en el plazo propuesto. Por esto, dentro de las estrategias y metas institucionales a largo plazo, está el dirigir nuestros esfuerzos para que las actividades que conducen al desarrollo de la investigación del mar en México, el tema se coloque en todas las agendas y niveles”.

La Conacio es una comisión intersecretarial de carácter permanente cuyo objeto es analizar, proponer y coordinar las acciones y actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de Investigación Oceanográfica que se realicen en zonas marinas del país.

Esta Comisión que, además elabora estudios, programas y proyectos para fortalecer la investigación oceanográfica, preside la Conacio y está integrada de la siguiente manera:

#### Presidencia

- Secretaría de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán

#### Miembros Permanentes

- Secretaría de Gobernación.
- Secretaría de Relaciones Exteriores.
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Secretaría de Educación Pública.
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- Universidad Nacional Autónoma de México.
- Instituto Politécnico Nacional.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Nuestro país realizó sus primeras investigaciones en la década de los 40, pero éstas solamente se enfocaron a explorar los recursos bióticos y generalidades del ambiente marino.

A través de los años, poco a poco las investigaciones oceanográficas han ido avanzando y abarcando mayor territorio, pero no al ritmo que se requiere y que demandan las circunstancias.

La falta de un mayor número de investigadores capacitados, de equipos y embarcaciones adecuadas, de financiamiento para llevar a cabo estos trabajos, el poco interés de los gobiernos para desarrollar políticas públicas de altura y los limitados recursos que se destinan a los centros de estudio e investigación no han permitido perfilar nuestras riquezas marinas al proyecto y desarrollo nacionales.

El Artículo 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión “establecer, organizar y sostener en toda la República” la investigación científica, por lo que es nuestra responsabilidad apoyar, impulsar y fortalecer la actividad oceanográfica del país.

**Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:

**XXV.** Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; **de investigación científica**, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar

en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

Es por ello por lo que, mediante la presente iniciativa planteo impulsar los mecanismos de estudio, participación, vinculación, cooperación e intercambio con instituciones científicas nacionales y extranjeras que permitan elaborar y presentar proyectos que se orienten hacia la exploración y explotación de los recursos marinos, en beneficio de la economía nacional y de la sociedad, así como corregir un error en el artículo primero de la Ley Federal del Mar.

El Artículo 6° de la Ley Federal del Mar, contempla la facultad del Estado para ejercer sus derechos sobre la realización de actividades de investigación científica “marina”:

**Artículo 6.** La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, conforme a la presente Ley, se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto a:

I. Las obras, islas artificiales, instalaciones y estructuras marinas;

II. El régimen aplicable a los recursos marinos vivos, inclusive su conservación y utilización;

III. El régimen aplicable a los recursos marinos no vivos, inclusive su conservación y utilización;

IV. El aprovechamiento económico del mar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes y de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras;

V. La protección y preservación del medio marino, inclusive la prevención de su contaminación; y

**VI. La realización de actividades de investigación científica marina.**

El apoyo a las investigaciones científicas oceanográficas y el aprovechamiento de los recursos marinos nos reditarán grandes beneficios económicos, políticos, educativos y sociales.

El porvenir de la investigación sobre el océano es muy prometedor y debe estimular a las generaciones jóvenes a trabajar para conocer sus recursos, y así poderlos explotar, en forma racional, en beneficio de los mexicanos.

Por tal motivo, debemos buscar e impulsar mecanismos de estudio, cooperación, vinculación, intercambio, promoción, apoyo con instituciones nacionales y extranjeras, que permitan elaborar y presentar proyectos que se orienten hacia la exploración y explotación de los recursos marinos en beneficio del desarrollo nacional.

Sin los recursos e interés necesarios de las dependencias e instituciones de investigación científica que realizan estudios sobre las ciencias del mar no podrán lograr los objetivos y seguiremos desaprovechando el potencial que representan nuestros mares.

Sin embargo, a pesar de las adversidades hay que reconocer que gracias a los programas de las instituciones nacionales se conocen y elaboran mayores datos oceanográficos; se han perfeccionado los pronósticos meteorológicos; se puede adelantar la dirección del oleaje, las corrientes y mareas; existe comunicación a lo largo de nuestro litoral; la elaboración de cartas hidrográficas, náuticas y pesqueras son de alta calidad y se ha ido mejorando la vigilancia de la contaminación, de la pesca y del tráfico ilegales.

Pero, también es una realidad que instituciones de investigación extranjeras, en especial de Estados Unidos, conocen mejor nuestro territorio marino, no obstante que en ellas deben participar representantes mexicanos y en ocasiones, los informes no se entregan en tiempo y forma, además de incompletos.

Para ello, es preciso que se elabore y actualice constantemente una relación de incumplimiento, en la que se incluya a todos los extranjeros que no hayan entregado sus informes de resultados, datos, muestras o conclusiones en el plazo establecido, y sea considerada esta falta en el otorgamiento de futuras autorizaciones.

También, es necesario y de gran compromiso y responsabilidad que especialistas e investigadores mexicanos

de dependencias públicas e instituciones académicas participen, por ley, en los proyectos de investigaciones oceanográficas extranjeras en nuestro territorio y se logre un mayor vínculo con los intereses y prioridades en beneficio del país.

A la par, se debe poner mayor atención y énfasis por parte del Estado en nuestro territorio marino mediante el impulso a las investigaciones científicas oceanográficas que realizan dependencias e instituciones nacionales para que, de esta forma, se vincule el aprovechamiento adecuado de los recursos marinos con el desarrollo del país en todas sus vertientes, incluyendo el turismo y el transporte marítimo de mercancías y productos.

La Secretaría de Marina es de gran trascendencia en este entorno, merece que volteemos a ver el gran desempeño que realizan en nuestro territorio marino e insular, a pesar de los limitados recursos con que cuenta para cubrir esa enorme zona. Su presencia e intervención seguirá siendo orgullo de los mexicanos.

El futuro de México está en sus mares, aprovechémoslos, cuidémoslos y conservémoslos.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

**Ley Federal del Mar**

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y Octavo del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas.	ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y <b>Noveno</b> del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas.
ARTICULO 5o.- Los Estados extranjeros y sus nacionales, al realizar actividades en las zonas marinas enumeradas en el Artículo 3o., observarán las disposiciones que para cada una de ellas establece la presente Ley, con los derechos y obligaciones consecuentes.	ARTICULO 5o.- Los Estados extranjeros y sus nacionales, al realizar actividades en las zonas marinas enumeradas en el Artículo 3o., <b>cumplirán</b> las disposiciones que para cada una de ellas establece la presente Ley, con los derechos y obligaciones consecuentes.
ARTICULO 6o.- ...: I.- ...; II.- ...; III.- ...; IV.- ...; V.- ...; y VI.- La realización de actividades de investigación científica marina.	ARTICULO 6o.- ...: I.- ...; II.- ...; III.- ...; IV.- ...; V.- ...; y VI.- La realización de actividades de investigación científica <b>oceanográfica</b> .
CAPITULO IV De la Protección y Preservación del Medio Marino y de la Investigación Científica Marina	CAPITULO IV De la Protección y Preservación del Medio Marino y de la Investigación Científica <b>Oceanográfica</b> .
ARTICULO 22.- ...: I.- ... II.- ... III.- ... IV.- ... V.- ...	ARTICULO 22.- ...: I.- ... II.- ... III.- ... IV.- ... V.- ...

VI.- Cuando conforme a la presente Ley sean permitidos para su realización por extranjeros se asegurará el mayor grado posible de participación nacional, y	VI.- Cuando conforme a la presente Ley sean permitidos para su realización por extranjeros se asegurará <b>la participación de especialistas e investigadores mexicanos de dependencias públicas e instituciones académicas de excelencia en el proyecto por autorizar, y se garantice que los proyectos estén vinculados con los intereses y prioridades científicos del país, y</b>
VII.- En el caso de la fracción anterior, la nación se asegurará que se le proporcionen los resultados de la investigación y, si así lo solicita, la asistencia necesaria para su interpretación y evaluación.	VII.- En el caso de la fracción anterior, el Estado requerirá que se le proporcionen los informes, datos, muestras y resultados parciales y concluyentes de la investigación dentro de los límites previamente establecidos en el proyecto correspondiente y, si así lo solicita, la asistencia necesaria para su interpretación, evaluación y conclusión.  Se deberá mantener vigente una relación de incumplimiento, en la que se incluya a todos los extranjeros que no hayan entregado sus informes de resultados, datos, muestras o conclusiones en el plazo establecido y, en su caso, sea considerada esta falta en futuras autorizaciones.
Sin correlativo.	ARTICULO 22 BIS. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica, impulsará la investigación científica oceanográfica nacional, coadyuvará en el aprovechamiento adecuado de los recursos marinos, así como destinar los insumos necesarios para llevar a cabo estas actividades en beneficio del desarrollo e interés nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

**Decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley Federal del Mar, en materia de investigaciones oceanográficas**

Para quedar como sigue:

**Artículo Único.** Se **Reforman** el artículo 1º, Artículo 5º, fracción VI del Artículo 6, Título del Capítulo IV, fracciones VI y VII del Artículo 22, y se **adicionan** un último párrafo al artículo 22 y el artículo 22 BIS, de la Ley Federal del Mar.

**Artículo 1o.** La presente Ley es reglamentaria de los párrafos Cuarto, Quinto, Sexto y **Noveno** del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a las zonas marinas mexicanas.

**Artículo 5o.** Los Estados extranjeros y sus nacionales, al realizar actividades en las zonas marinas enumeradas en el Artículo 3o., **cumplirán** las disposiciones que para cada una de ellas establece la presente Ley, con los derechos y obligaciones consecuentes.

**Artículo 6o. ...:**

**I. ...;**

**II. ...;**

**III. ...;**

**IV. ...;**

**V. ...; y**

**VI.** La realización de actividades de investigación científica **oceanográfica**.

**Capítulo IV**

De la Protección y Preservación del Medio Marino y de la Investigación Científica **Oceanográfica**.

**Artículo 22. ...:**

**I. ...**

**II. ...**

III. ...

IV. ...

V. ...

**VI.** Cuando conforme a la presente Ley sean permitidos para su realización por extranjeros se asegurará **la participación de especialistas e investigadores mexicanos de dependencias públicas e instituciones académicas de excelencia en el proyecto por autorizar, y se garantice que los proyectos estén vinculados con los intereses y prioridades científicos del país, y**

**VII.** En el caso de la fracción anterior, **el Estado requerirá que se le proporcionen los informes, datos, muestras y resultados parciales y concluyentes de la investigación dentro de los límites previamente establecidos en el proyecto correspondiente** y, si así lo solicita, la asistencia necesaria para su interpretación, evaluación y **conclusión.**

**Se deberá mantener vigente una relación de incumplimiento, en la que se incluya a todos los extranjeros que no hayan entregado sus informes de resultados, datos, muestras o conclusiones en el plazo establecido y, en su caso, sea considerada esta falta en futuras autorizaciones.**

**Artículo 22 Bis.** El Estado, a través del Ejecutivo federal, en coordinación con la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica, impulsará la investigación científica oceanográfica nacional, coadyuvará en el aprovechamiento adecuado de los recursos marinos, así como destinar los insumos necesarios para llevar a cabo estas actividades en beneficio del desarrollo e interés nacionales.

#### Artículos Transitorios

**Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Con la entrada en vigor de este decreto, se deberán hacer las adecuaciones necesarias a todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al mismo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 15 de enero de 2020.— Diputada María Rosete (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados.**

---

#### LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

---

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que conferida por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de productos sanitarios para higiene femenina, bajo la siguiente:

#### Exposición de Motivos

La menstruación, en nuestra cultura, ha sido tradicionalmente símbolo de fecundidad. Ha significado el tránsito de la niña a la mujer fértil que podrá concebir y dar paso a nueva vida. Sin embargo, en la actualidad, ha sido estigmatizado, vinculándolo directamente con la actividad sexual y segregando a las mujeres que, durante su período, son calificadas como emocionalmente inestables, poco productivas e, incluso, como una carga para la sociedad.

En términos científicos, la menstruación constituye parte de un proceso en que, cuando el óvulo no es fecundado, el cuerpo desecha el endometrio, que es el recubrimiento del útero preparado para dar alojamiento al óvulo. Este ciclo se repite aproximadamente cada mes y requiere de un equilibrio hormonal diverso, en cada una de sus etapas.

Debemos señalar que, más allá de la definición científica, la menstruación se vincula a la debilidad sexual de las mujeres y, en este sentido, hemos podido observar que, sobre todo durante la segunda mitad del siglo pasado, en países europeos y asiáticos, se daba a las empleadas la posibilidad de solicitar permisos laborales debido al dolor menstrual, quedando a



discreción de la empresa el pago correspondiente. Sin embargo, debido a la competitividad laboral, la mayor parte de las mujeres, principalmente en mercados tan competitivos como el japonés, han optado por no usar ese beneficio debido a que podría ser asimilado a un bajo rendimiento laboral.

Según la definición de Erwing Goffman, el estigma social de la menstruación se ajusta a las tres categorías que él configura, de manera simultánea: “en lo corporal por ser el fluido que más repulsión social despierta, en lo individual en cuanto [que se encuentra] asociada al carácter durante las fases menstruales y en lo social por vincularse al sexo”.<sup>1</sup>

Como parte de la lucha feminista en muchos países, se han impulsado medidas que normalicen la presencia de la menstruación dentro de las actividades sociales que desarrollan las mujeres. Entre ellas, las más comunes se han centrado en la relación de las condiciones económicas de las mujeres, la desigualdad económica en relación con los salarios percibidos por los hombres y lo que se ha llamado “impuesto rosa”, recaudado por los productos de higiene femenina, que no son considerados como productos de primera necesidad sino de lujo, en casi todos los países del mundo.<sup>2</sup>

En este sentido, se ha puesto en la mesa de discusión, un problema que afecta a muchas mujeres de bajos ingresos y que precariza su higiene, debido al incremento en su costo. Esta situación se ha hecho visible en el Reino Unido y, particularmente en África, en donde la Asamblea Legislativa de África Oriental, desde 2013, “solicitó a los estados socios liberar de impuestos a las toallas sanitarias y otros productos de higiene menstrual con el fin de que estuvieran al alcance de las jóvenes de menores ingresos”.<sup>3</sup>

Es el caso de muchas niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema en nuestro país que, debido a la segregación de la que son objeto durante su período menstrual porque no pueden comprar toallas sanitarias ante la falta de recursos, optan por no asistir a la escuela, disminuyendo en consecuencia su rendimiento escolar. Esta situación se presenta principalmente en estados como Chiapas, Oaxaca y la Huasteca Potosina.<sup>4</sup>

Es por ello que, en consonancia con la defensa y protección de los derechos humanos, específicamente los de las mujeres en situación de pobreza, así como los principios de progresividad y equidad en la imposición de las contribuciones federales, proponemos que los productos de higiene femenina que sean biodegradables, no desechables o

reutilizables sean considerados como de tasa 0% en relación al Impuesto sobre la Renta, adicionalmente, en las disposiciones transitorias establecemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer las condiciones para favorecer el uso de productos amigables con el medio ambiente.

Asimismo, es importante mencionar que el pasado 1° de enero entró en vigor en la ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos, que prohíbe la comercialización distribución y entrega de bolsas de plástico desechables, logrando con ello evitar generar alrededor de 13 mil toneladas de basura diarias por el uso de plásticos.

Es por ello que debemos tener en cuenta la composición de un paquete de toallas femeninas, tampones o cualquier otro producto que ayude al cuidado de la higiene femenina, por lo que los componentes varían de una compañía a otra:

- Los ingredientes conocidos en los tampones son: algodón, rayón, poliéster, polipropileno, polietileno y fibra.
- Los ingredientes conocidos en las toallas sanitarias son: pasta de papel blanca, gel absorbente (poliacrilato), polipropileno no tejido, polietileno.<sup>5</sup>

Como se observa, los productos de higiene femenina están compuestos en su mayoría por derivados del poliéster, es decir, está hecho a partir del petróleo, carbón, agua, aire, alcohol y ácido. Es así que, al utilizar productos sanitarios de higiene femenina biodegradable, no desechable o reutilizables, se estaría evitando generar alrededor de 60 kilogramos de residuos de estos artículos durante el tiempo que una mujer llegue a utilizar estos productos, eso equivale a 100.000 toneladas de desechos al año.

Datos del Banco Mundial publicados en 2016, señalan que los desechos generados en ese año, alcanzaron los 2.010 millones de toneladas, disparándose esta cifra a los 3.400 millones de toneladas en el año 2050, es decir, que en poco más de tres décadas generaremos alrededor de 70 % más de basura. Así mismo, el informe señala que México es el país de América Latina que más basura genera, con 1,16 kilogramos al día.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ampliamente comprometidos con los derechos humanos, especialmente con los derechos ambientales y de las mujeres, proponemos a esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

### Decreto

**Único.** Se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I.- La enajenación de:

a) a i) ...

**j) Toallas sanitarias femeninas, compresas, tampones o cualquier otro bien con distinta denominación, pero destinado al mismo uso, en materia de higiene íntima de las mujeres.**

### Transitorios

**Primero.** Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** La Secretaría de Hacienda y Crédito Público generará las condiciones recaudatorias que privilegien, paulatinamente, el uso de productos sanitarios biodegradables, no desechables o reutilizables.

### Notas

1 <https://elordenmundial.com/estigma-menstruacion-mundial/>

2 Ídem.

3 <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ninas-y-adolescentes-temen-ir-la-escuela-durante-su-periodo-menstrual>

4 Ídem

5 <https://manchasinverguenza.wordpress.com/2012/09/28/las-toallas-higienicas-algo-mas-que-algodon-y-plastico/>

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de enero de 2019.— Diputadas y diputado: María Guadalupe Almaguer Pardo, Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Ortega Martínez (rúbricas).»

**Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.**

### LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES

«Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, **Ricardo Monreal Ávila**, senador del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 121, 122 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes**, al tenor de la siguiente:

### Exposición de Motivos

#### I. Argumentación

Un axioma fundamental del derecho internacional de los derechos humanos es que la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, es absoluta en el sentido de que no hay excepción y, por tanto, esta no puede ser aceptada, defendida, justificada o tolerada en cualquier circunstancia. Este tipo de actos se configura como una de las formas más graves de violación a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, dado que atentan contra su dignidad, provocando daños físicos y psicológicos irreparables.

Independientemente de su uso real, ningún país apoya públicamente la tortura ni se opone a su erradicación. De hecho, la prohibición de esta práctica está sólidamente establecida en el derecho internacional consuetudinario como *ius cogens*. Las conductas delictivas enmarcados en este tipo de derecho imperativo están sujetos a la jurisdicción universal, lo que significa que cualquier Estado puede ejercer su jurisdicción, independientemente de dónde tuvo lugar el delito, la nacionalidad del autor o la nacionalidad de la víctima.

En 1948, tras los terribles abusos perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas incorporó la prohibición de la tortura en la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 5 prescribe que “Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El espíritu de esta disposición ha aterrizado progresivamente en la extensa red de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 7); la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención contra la Tortura u Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes (la Convención contra la tortura, en adelante) y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

México ha ratificado todos estos instrumentos, lo que le obliga internacionalmente, entre otras cosas, a prevenir y sancionar la tortura y a tomar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole, eficaces para impedir la dentro de su jurisdicción.

El artículo 1 de la Convención contra la Tortura se refiere a ésta como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquico, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, reconoce el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura define a ésta en los siguientes términos.

“todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio,

como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo.”

A nivel doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 20 y 22, prohíbe toda “incomunicación, intimidación o tortura” y las “penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie ... y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales.”

En 2017, por recomendación de diversas instancias internacionales, fue expedida en nuestro país la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017 y cuyos puntos clave la colocan como una de las más avanzadas del mundo:

Es una ley general dado que sus disposiciones aplican a todo el país, por lo que se evita que cada entidad federativa interprete y juzgue de manera distinta este delito.

### **Cubre el espectro entero del fenómeno<sup>1</sup>**

**-Prevención**, dado que prevé mecanismos para hacer que esta práctica sea atendida desde sus causas, como las acciones que realizará el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la CNDH.

**-Investigación**, porque la tortura es un crimen de Estado que, a su vez, es quien monopoliza las acciones de investigación penal. La tortura, junto con otras violaciones a los derechos humanos, presume las más altas tasas de impunidad, ya que es un delito cometido por servidores públicos o afines a éstos y es investigado por otros funcionarios. Además, la ley contempla que todos los dictámenes médicos y psicológicos que realicen peritos independientes -pudiendo ser el Protocolo de Estambul o no- sean valorados con el mismo peso que las realizadas por los servicios periciales oficiales.

-**Sanción**, pues impone penas privativas de la libertad a quienes lo cometan, a quienes lo encubran y a quienes se nieguen a apoyar en las investigaciones. Si bien las penas a imponer a quienes la cometan no son la parte central de ley ni de la exigencia de justicia por este delito, es la manera de hacer efectivo el derecho a no sufrir tortura, que es un derecho absoluto. Jamás existe justificación para cometer tortura.

Aunque la expedición de la legislación secundaria ha sido ampliamente celebrada en diversos círculos, en nuestro país los actos de tortura -física y psicológica continúan siendo un desafío en materia de derechos humanos, pues su ejecución es aún una práctica recurrente de la que echan mano diversos servidores públicos encargados de seguridad y procuración de justicia.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (2016) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante su arresto, el 75 por ciento de las personas encuestadas sufrió algún tipo de violencia psicológica y el 64 por ciento algún tipo de violencia física.<sup>2</sup>

Por otro lado, es importante señalar que entre los años 2014 y 2018 el Poder Judicial de la Federación sólo emitió 33 sentencias por el delito de tortura, a pesar de que en ese periodo se iniciaron 9 mil 988 investigaciones por ese delito en el fuero federal, es decir, sólo el 0.33 por ciento de las víctimas de tortura accedieron a la justicia.<sup>3</sup>

El número de investigaciones relacionadas con el delito de tortura también contrasta con los mil 518 asuntos que coordinó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) durante el mismo periodo de tiempo -2014 a 2018-, que comprenden 2 mil 949 víctimas directas y 754 indirectas, de las cuales sólo se incorporaron 691 Registro Nacional de Víctimas.<sup>4</sup>

Precisamente las víctimas indirectas de este delito han sido invisibilizadas de la legislación, pues aunque la Ley retoma en gran medida los términos de la Convención contra la Tortura, en tiempos recientes se han enviado señales sobre la necesidad de explicitar que las personas que no son víctimas directas deben estar amparadas por la ley. Al respecto, el pasado 24 de julio de 2019 el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT, por sus siglas en inglés) presentó las *Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México*. Además de las recomendaciones en materia de

implementación de la Ley, en el terreno legislativo el CAT advierte que “la nueva tipificación del delito de tortura introducida por la Ley General contra la Tortura (arts. 24 y 25) se corresponde en buena medida con lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención, aun cuando le preocupa que no abarque de manera expresa los actos de tortura cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero, ni aquellos dirigidos a intimidar o coaccionar a otras personas distintas de la víctima (artículo 1)”.

A partir de dicha observación, el CAT insta al Estado mexicano “a modificar el tipo penal del delito de tortura de los artículos 24 y 25 de la Ley General contra la Tortura para que incluya expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de un tercero (párrafos 10 y 11 de las Observaciones).<sup>5</sup>

## II. Contenido de la iniciativa

Atendiendo a los planteamientos del CAT y en el marco de los compromisos de este gobierno para atender la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos generada por la perpetuación de prácticas de tortura en nuestro país, se propone reformar el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el propósito de incluir expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de otras personas distintas de la víctima.

Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.	
<p><b>Artículo 24.-</b> Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:</p> <p>I. a III. ...</p>	<p><b>Artículo 24.-</b> Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener de una persona o de un tercero información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:</p> <p>I. a III. ...</p>

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa soberanía el siguiente proyecto de

## Decreto por el que se reforman los artículos 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

**Único.** Se reforma el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para quedar como sigue:

**Artículo 24.** Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener **de una persona o de un tercero** información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o **por** razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin:

I. a III. ..

### Transitorio

**Único.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### Notas

1 Díaz, Andrés, Ya hoy ley antitortura, México, 2017, (En línea) [Fecha de consulta 17 de diciembre de 2019] . Disponible en:

<https://www.animalpolitico.com/res-putblica/ya-hay-ley-antitortura-pero-la-tortura-sigueexistiendo/>

2 Inegi, Encuesta Nacional de Población Privado de libertad (Enpol), México, 2016. II n línea) [Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2019] Disponible en:

<https://bit.ly/2EALucP>

3 Cordero, Natalia, Ley General de Tortura, ¿fin de la tortura en México?, Animal Político, México, 2019, (En línea) [Fecha de consulta 17 de diciembre de 2019] Disponible en:

<https://bit.ly/34xvcMo>

4 CEAV, En cuatro años CEAV ha atendido a 3703 víctimas de tortura, México, 2019, [En línea] [Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2019. Disponible en:

<https://bit.ly/34CJrj3>

5 Comité Contra la Tortura, Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, ONU, 24 de julio de 2019. [en línea] [Fecha de consulta: 17 de diciembre de 2019) Disponible en:

[http://hchr.org.mx/images/doc\\_pub/G192\\_2501.pdt](http://hchr.org.mx/images/doc_pub/G192_2501.pdt)

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 15 días de enero de 2020.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

## Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

---

## LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

---

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita senadora de la República, **Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz**, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 190, fracción II, incisos a) y c), así como se adiciona un artículo 190 Bis, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión**, al tenor de la siguiente:

### Exposición de Motivos

La incidencia delictiva en nuestro país ha sido un constante flagelo en este siglo XXI. La evidente debilidad institucional, así como la carencia de un sólido estado de derecho, aunado a la impunidad y a la corrupción que inunda las instituciones de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, han llevado al país a un punto en el que la delincuencia ha encontrado nichos en los que les es posible delinquir sin sufrir las consecuencias legales que establecen los códigos penales.

Es claro que la delincuencia organizada mantiene una serie diversa de actividades que le proporciona recursos financieros que permiten sostener operaciones a gran escala, que son altamente costosas. No todo en el fenómeno

delincuencial se concentra en la producción, trasiego y venta ilegal de narcóticos, sino que se ha diversificado para incluir delitos que implican menos riesgo, pero que también son generadores de importantes montos económicos ilícitos.

En este tipo de delitos se encuentran aquellos que pueden realizarse de manera remota o, incluso, desde centros de readaptación social y que requieren inversiones mínimas en equipo, tecnología, infraestructura o personal. Estos delitos no ponen en riesgo la vida o integridad de quien delinque, pero sí le proporcionan considerables montos que pueden ser usados para financiar otro tipo de actividades ilegales. En este rubro se encuentra la extorsión telefónica.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), la extorsión, a nivel nacional, no es un problema de seguridad significativo, pues su incidencia es claramente inferior a la de otros delitos patrimoniales. Al 31 de noviembre de 2019, la extorsión en todo el país ascendió a 7 mil 698 casos, lo que significa menos de un 10 por ciento de los casos que se registraron en robo a transeúnte (73 mil 290) o menos del 5 por ciento de los casos de robo de vehículo automotor (170 mil 892).<sup>1</sup>

Si revisamos las cifras de los años anteriores encontraremos que la extorsión tuvo 6 mil 432 casos en 2018; 5 mil 812 en 2017; 5 mil 273 en 2016 y 5 mil 72 en el año 2015.<sup>2</sup> Si bien se aprecia un incremento sostenido en las cifras oficiales reportadas por el Sesnsp, sus alcances, en papel y en los reportes oficiales, lo muestran como un problema menor de seguridad.

Pero hay un punto ciego en el reporte oficial: el Sesnsp solamente reporta extorsiones que hubieren sido denunciadas y por las cuales se hubiere iniciado una carpeta de investigación, dejando fuera todas las extorsiones que, por el *modus operandi* o por el monto obtenido ilegalmente, no son denunciadas ante el Ministerio Público. En estas extorsiones se encuentran las telefónicas, las cuales no son desglosadas en el informe mensual del Sesnsp.

Es ampliamente conocido que la dificultad que enfrenta la ciudadanía para presentar una denuncia ante el Ministerio Público es un obstáculo procedimental que genera una cifra negra delictiva que no es posible medir con la metodología que utiliza el Sesnsp. Por ello, a través de otros mecanismos, es posible dimensionar parte del fenómeno delictivo nacional, incluyendo aproximaciones a la cifra negra.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reflejó, en su edición 2019 –que reporta cifras del año 2018–, un panorama enteramente distinto al presentado por el Sesnsp: Durante el año 2018, en México se cometieron 33 millones de delitos, en agravio de 24.7 millones de víctimas, de los cuales, el 17 por ciento consistió en extorsión, es decir, una tasa de 6 mil 542 delitos de extorsión por cada 100 mil habitantes.<sup>3</sup>

Esta tasa de delito arroja un total de 5.7 millones de delitos de extorsión a nivel nacional en el año 2018,<sup>4</sup> lo que contrasta claramente con los datos reportados por el Sesnsp. De esta cifra, el 91.6 por ciento de los casos fue por vía telefónica y, de ellos, las víctimas pagaron al extorsionador en el 7.1 por ciento de las ocasiones.<sup>5</sup>

Esto nos deja cifras aterradoras en los últimos años:

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tasa de extorsión por cada 100 mil habs.	758.5	979.0	985.0	860.0	894.5	771.9	654.7
Porcentaje de extorsiones telefónicas	92.0	94.0	94.7	94.0	95.6	93.2	91.6
Porcentaje de extorsiones telefónicas en las que se hizo un pago	7.5	6.4	5.4	4.7	4.4	6.8	7.1

Al referenciar geográficamente los resultados, encontramos que, en 14 entidades de la república, el delito que más afectó a la población en el año 2018, fue la extorsión: Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.<sup>6</sup>

Finalmente, de acuerdo con la misma Envipe 2019, el delito en comento dejó a las víctimas pérdidas económicas por el orden de 2 mil 676 millones de pesos,<sup>7</sup> lo que lo convierte en una actividad ilegal muy redituable, tomando en cuenta que el riesgo que tiene el sujeto activo es mínimo.

La extorsión telefónica es un delito que representa un oasis delictivo para grupos perfectamente organizados por varias razones:

1. La tipificación penal es deficiente y, no en todos los códigos penales del país se contempla como tipo penal o agravante. Solo 11 entidades federativas la contemplan como una agravante.
2. La población difícilmente denuncia los intentos de extorsión, por lo que la cifra negra es altísima. Si bien la Envipe 2019 arroja que la cifra negra nacional es de 93.2 por ciento, la cifra negra específica para el delito de

extorsión aumenta a 97.9, siendo el delito que menos se denuncia.<sup>8</sup>

3. Es muy fácil conseguir líneas telefónicas de manera anónima, pues no se solicita prácticamente ningún requisito para que un concesionario venda tarjetas SIM y tampoco existe requisito para activar dichas tarjetas.

4. Es imposible saber quién está del otro lado de la línea telefónica, por lo que la autoridad, en los pocos casos en que se denuncia, desiste de investigar.

5. En este contexto, el riesgo para el extorsionador es mínimo, pero las ganancias que puede obtener son muy considerables.

Si se rompe el flujo de opacidad que se ha descrito, entonces se generará un disuasivo mucho más poderoso que el populismo penal. Los extorsionadores aprovechan el hecho de que nadie puede saber quién está llamando, lo que puede corregirse fortaleciendo el registro de comunicaciones que ya está vigente en nuestro país. Aunado a otras acciones, esto puede coadyuvar a disminuir decididamente el índice de comisión de extorsiones telefónicas.

La extorsión telefónica ha llegado a proporciones que han afectado a prácticamente todos. Todos somos víctimas; pobres, ricos, de clase media, médicos, abogados, cajeros, transportistas, comunicadores, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos mayores; nadie está a salvo de este flagelo y para muestra un botón: el 6 de enero de 2020, la periodista Denise Dresser publicó en su columna en el periódico *Reforma*, que el día anterior, su madre había sido víctima de extorsión telefónica, relatando una noche de horror, en la que los delincuentes utilizaron mucha información pública de la columnista para despojar de varios bienes a su mamá.<sup>9</sup> En la misma columna, Dresser expresa que éste no es un caso aislado, pues han detectado diversos cometidos en contra de personas con perfiles públicos, en los que atacan a adultos mayores, por considerar que son más vulnerables ante los engaños tecnológicos.

El mismo 6 de enero, el periodista Héctor de Mauleón publicó en su columna en el periódico *El Universal*,<sup>10</sup> un relato más detallado de la extorsión sufrida por Denise Dresser, destacando que al momento de hacer la denuncia y solicitar apoyo a las instituciones de seguridad de la Ciudad de México, le informaron a la politóloga que se trataba de una extorsión telefónica y no había mucho que hacer pues quienes las cometen están recluidos en prisiones capitalinas.

A partir de estos hechos, en diversos medios de comunicación se ha publicado la forma, tiempos, métodos e información sensible sobre las bandas de extorsionadores telefónicos que operan en el país. Destaca, por los datos y la profundidad del análisis, el caso del periodista Ciro Gómez Leyva, quien ha conducido diversas entrevistas y ha presentado varios reportajes sobre la extorsión telefónica.

Si bien, el diagnóstico de la problemática apunta a que un porcentaje importante de la extorsión telefónica proviene de las prisiones, hay que admitir que los esfuerzos gubernamentales para detener estas actividades ilícitas han sido infructuosos. Por un lado, los internos obtienen equipos celulares, introducidos ilegalmente por sus familiares o amigos, en cavidades rectales o vaginales, es decir, equipos celulares de origen chino, de un tamaño máximo de 6 centímetros, los que se han denominado comúnmente “teléfonos de reclusorio”.<sup>11</sup>

Por otra parte, aunque desde el año 2014, el gobierno ha instalado inhibidores de señales telefónicas en reclusorios de la Ciudad de México, del estado de México, de Jalisco y de Tamaulipas, varios expertos han acusado que estos no funcionan para bloquear las señales, pues los inhibidores no tienen la tecnología para afectar celulares modernos, toda vez que en ese entonces no existía la tecnología 4G.

Si a esto se le suma que las personas afectadas por estos delitos, difícilmente denuncian y que, por esa causa, el Sistema Nacional de Seguridad Pública ni siquiera cuenta con datos desglosados sobre este tipo de extorsión, entonces estamos ante un caldo de cultivo propicio para que los delincuentes cometan cada vez más delitos de manera impune.

Pero hay datos que podrían indicar que la versión oficial de que estas extorsiones provienen mayoritariamente de prisiones es errada, pues, de acuerdo con Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, menos del uno por ciento de las extorsiones telefónicas en la capital del país se realizan desde el interior de la cárcel y que este delito ha llevado a que sus perpetradores entrenen constantemente, por lo que incluso se atrevería “a decir que tienen instalados *call centers*”.<sup>12</sup>

Ahora bien, si se toma en cuenta que todas las acciones penales y en el ámbito de la seguridad, para castigar y erradicar este delito han sido infructuosas, entonces, lo más

inteligente es atacar el fenómeno a través de mecanismos de prevención.

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, un elemento que permite que los extorsionadores sigan impunes y obteniendo millonarias cantidades de las víctimas, es que utilizan números celulares de prepago, que pueden ser adquiridos fácilmente en distribuidores por todo el país, sin mayor requisito que el dinero necesario para comprar la tarjeta SIM e instalarla en un equipo móvil. Mientras esto siga sucediendo, es decir, mientras los delincuentes puedan acceder a números celulares con tal facilidad, los esfuerzos por disminuir y erradicar la extorsión telefónica serán inútiles, como hasta ahora han sido.

Cabe señalar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece, en su artículo 190, fracción II, lo siguiente:

“**Artículo 190.** Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I. ...

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;

b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;

g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y

h) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud.

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, los cuales deberán informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I del presente artículo.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;



III a XII. ...

...”

Esto significa que si bien los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tienen la obligación de llevar un registro de las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, esto solamente es posible realizarlo, identificando plenamente al usuario, en los casos en que la comunicación provenga de una línea de teléfono de prepago, es decir, proveída mediante un contrato con el usuario y domiciliación del pago, pues, como se ha señalado, en los casos de usuarios de prepago, los concesionarios no cuentan con la certeza de la identidad del poseedor de la línea.

Esto es un aliciente para los extorsionadores que podría corregirse con una reforma legal, propiciando que los concesionarios cuenten con herramientas que coadyuven en la prevención de la extorsión telefónica. Hay que destacar en este punto que, en los últimos años, los poderes legislativos de las entidades federativas se han abocado a incluir agravantes al delito de extorsión cuando se utiliza el medio comisivo de la vía telefónica, empero, dichas agravantes son poco efectivas debido a que los extorsionadores utilizan celulares de prepago, en los que ni la autoridad ministerial, ni la autoridad en telecomunicaciones y tampoco el concesionario celular, pueden conocer a ciencia cierta quién es el usuario de la línea o, al menos, quién es el responsable o quién la adquirió.

Por tal motivo, la iniciativa que se presenta sería de gran utilidad para las autoridades ministeriales de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, estado de México, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí que ya cuentan con la agravante citada. Estas once entidades federativas ya hicieron su parte al tipificar agravantes para el delito de extorsión cuando el medio comisivo es la llamada telefónica u otros medios de comunicación, pero mientras no existan los elementos materiales para saber quién está del otro lado de la línea, no habrá posibilidad alguna de que las autoridades lleguen a ejercer acción penal en contra de los responsables y, mucho menos, se aplicarían las agravantes.

En efecto, si se toma en cuenta que ya existe la previsión legal para que los concesionarios lleven un registro de todas las comunicaciones que se dan por vía celular y que, de concretarse dicha labor se daría un paso importantísimo para

prevenir la extorsión telefónica, debido a que los extorsionadores no podrían actuar desde el anonimato, pero que la misma no puede realizarse adecuadamente, en especial cuando las comunicaciones provienen de teléfonos de prepago, porque los concesionarios no poseen en su registro los datos de identificación de dichos usuarios y, por ende, tampoco cuentan con la certeza de quién es el responsable de la línea telefónica que se utiliza para extorsionar, entonces es lógico pensar que reforzando este mecanismo registral se coadyuvará decididamente a combatir este flagelo.

Por tal motivo, la presente iniciativa pretende mejorar la legislación vigente, para que los concesionarios en realidad realicen el registro que les es obligatorio, el cual ya está establecido en la fracción II, del artículo 190, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además, hay que resaltar que la extorsión solamente es uno de los delitos que puede cometerse utilizando líneas telefónicas celulares, pero hay otros que, en menor proporción, también pueden afectar a terceros, incluso, con mayores vulneraciones a los derechos, integridad o la vida de las víctimas, como es el caso del secuestro o la privación ilegal de la libertad.

En este contexto, la aprobación de esta iniciativa también coadyuvará a que quienes cometan delitos como secuestro, privación ilegal de la libertad u otros que requieran el uso de líneas telefónicas para perpetrarlos, encuentren mayores dificultades al llevarlos a cabo y, con ello, también, que las instituciones de seguridad pública, de procuración y de administración de justicia, cuenten con mayores herramientas para combatir el flagelo de la violencia, inseguridad y delincuencia que azota nuestra sociedad.

El objetivo de la iniciativa entonces es muy claro: disuadir la comisión de ilícitos como la extorsión, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y otros que requieren de líneas telefónicas celulares para ser cometidos, toda vez que en la actualidad, la falta de certeza sobre quién es el usuario de una línea telefónica, aunado a la facilidad y nulos requisitos que se solicitan para contratar una, en especial en planes de prepago, generan una zona gris que fomenta la impunidad y la comisión de delitos con mayor frecuencia.

Por ello, aprovechando que la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contempla la obligación de los concesionarios para llevar un registro de las comunicaciones que se realicen, la iniciativa que se presenta pretende mejorar el mecanismo ya existente, para asegurar

que dichos concesionarios cuenten con los documentos e información necesarios para mantener ese registro actualizado.

Otra de las bondades de la iniciativa es que no implicará impacto presupuestal ni gasto público, pues a diferencia del extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut), la propuesta no incluye la creación de una unidad administrativa gubernamental que administre el registro, ya que éste ya existe en cada uno de los concesionarios que operan en el país.

Además, a diferencia de lo que sucedió a inicios de la década pasada, cuando las bases de datos del Renaut se vieron comprometidas por filtraciones y que, debido a ello, el gobierno federal optó por desaparecer dicho Registro y destruir toda la información que había recopilado, en este caso, lo que se propone implicaría que la información de los particulares estará bajo resguardo de los concesionarios, de manera fraccionada, es decir, no existirá un solo registro, sino tantos como concesionarios existan y ello disminuye las posibilidades de que se repita la historia del Renaut.

En este punto hay que destacar que dichos concesionarios ya han mantenido bases de datos personales de sus usuarios sin que hasta el momento se hubiere dado un caso de venta de datos o filtración del registro, lo que indica que estos entes privados han sido extremadamente cuidadosos con la información y cuentan con los mecanismos de seguridad y preventivos necesarios para seguir haciéndolo.

Finalmente, una diferencia sustancial adicional con lo ya vivido en México en el pasado, es que la información que se integre al registro solamente podrá ser compartida con las autoridades ministeriales o jurisdiccionales, previa solicitud formal que se presente de conformidad con lo establecido en la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, se asegura que estos datos no sean utilizados para fines distintos a la procuración y administración de justicia penal.

En ese contexto, la reforma se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo:

Texto vigente	Texto propuesto
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:	Artículo 190. ...
I. ...	I. ...
II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:	II. Conservar un registro y control de todas las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:
a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;	a) Nombre y número o clave de la identificación oficial vigente con fotografía con la que se identificó al contratar la línea el usuario; denominación o razón social; clave del Registro Federal de Contribuyentes; Clave Única de Registro de Población, así como domicilio del suscriptor;
b) ...	b) ...
c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;	c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número o clave de identificación de la tarjeta SIM, número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;
d) a h) ...	d) a h) ...
...	...
...	...
...	...
...	...
III a XII. ...	III a XII. ...
...	...
No existe correlativo	Artículo 190 Bis. Para cumplir con el registro establecido en la fracción II, del artículo 190, de esta Ley, los concesionarios, al momento de contratación de una línea telefónica celular, deberán solicitar al contratante e inscribir en el registro, lo siguiente:
	j) Líneas contratadas por personas físicas:
No existe correlativo	a) Copia de identificación oficial con fotografía; y,

No existe correlativo	b) Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses;
No existe correlativo	l) Líneas contratadas por personas morales:
No existe correlativo	a) Acta Constitutiva y poder notarial para contratar;
No existe correlativo	b) Identificación oficial con fotografía del representante legal;
No existe correlativo	c) Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; y,
No existe correlativo	d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes.
No existe correlativo	Los concesionarios conservarán una copia electrónica o física, de los documentos antes referidos, cumpliendo lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
No existe correlativo	La información y documentos señalados en el presente artículo serán inscritos en el registro, ligándolo a los números o claves de identificación de las tarjetas SIM que cada usuario haya adquirido.
No existe correlativo	El concesionario solo podrá activar la tarjeta SIM después de que hubiere inscrito la información y documentos antes señalados, en el registro.
No existe correlativo	Transitorios
No existe correlativo	PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
No existe correlativo	SEGUNDO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá, en un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitir las disposiciones administrativas que regulen el registro de usuarios, de tarjetas SIM y de comunicaciones.
No existe correlativo	TERCERO. El registro de usuarios y tarjetas SIM nuevos, iniciará su operación al día siguiente de la entrada en vigor de las disposiciones administrativas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que lo regulen.
No existe correlativo	CUARTO. Los concesionarios contarán con un plazo de noventa días, a partir de que entren en vigor las disposiciones administrativas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que regulen el registro de usuarios y de tarjetas SIM, para llevar a cabo el

	registro correspondiente a las líneas telefónicas contratadas antes de tal fecha.
No existe correlativo	Para tal efecto, los concesionarios llevarán a cabo campañas de difusión para que sus usuarios registren las líneas celulares dentro de ese plazo, así como para informarles las consecuencias de no hacerlo.
No existe correlativo	QUINTO. Una vez que haya fenecido el plazo para registro de las líneas telefónicas celulares contratadas antes de la entrada en vigor del registro de usuarios y tarjetas SIM, los concesionarios cancelarán todas las líneas telefónicas que no hubieren sido registradas.
No existe correlativo	SEXTO. En los casos de líneas telefónicas contratadas en modalidad de prepago antes de la entrada en vigor del presente Decreto, en los que los concesionarios ya cuenten en sus archivos con la documentación e información necesaria para llevar a cabo el registro, estos lo llevarán a cabo automáticamente y de forma inmediata, debiendo comunicar al usuario que su línea ha quedado inscrita y los efectos de dicha acción, así como informarle que, en caso de que la línea hubiera cambiado de titular o usuario, deberá realizar la modificación en los plazos establecidos en el Transitorio Cuarto de este Decreto.

Por lo antes expuesto, la suscrita somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

**Decreto por el que se reforma el artículo 190, fracción II, incisos a) y c), así como se adiciona un artículo 190 Bis, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión**

**Artículo Único.** Se reforma el artículo 190, fracción II, incisos a) y c), así como se adiciona un artículo 190 Bis, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

**Artículo 190. ...**

I. ...

II. Conservar un registro y control de **todas las** comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Nombre y número o clave de la identificación oficial vigente con fotografía con la que se identificó al contratar la línea el usuario; denominación o razón social; clave del Registro Federal de Contribuyentes; **Clave Única de Registro de Población, así como** domicilio del suscriptor;

b) ...

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: **número o clave de identificación de la tarjeta SIM,** número de destino, modalidad de líneas con contrato o

plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

d) a h). ...

...

...

...

...

III a XII. ...

...

**Artículo 190 Bis.** Para cumplir con el registro establecido en la fracción II del artículo 190 de esta Ley, los concesionarios, al momento de contratación de una línea telefónica celular, deberán solicitar al contratante e inscribir en el registro, lo siguiente:

I) Líneas contratadas por personas físicas:

a) Copia de identificación oficial con fotografía; y,

b) Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses;

II) Líneas contratadas por personas morales:

a) Acta Constitutiva y poder notarial para contratar;

b) Identificación oficial con fotografía del representante legal;

c) Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses; y,

d) Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

Los concesionarios conservarán una copia electrónica o física, de los documentos antes referidos, cumpliendo lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

La información y documentos señalados en el presente artículo serán inscritos en el registro, ligándolo a los

**números o claves de identificación de las tarjetas SIM que cada usuario haya adquirido.**

**El concesionario solo podrá activar la tarjeta SIM después de que hubiere inscrito la información y documentos antes señalados, en el registro.**

### Transitorios

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá, en un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, emitir las disposiciones administrativas que regulen el registro de usuarios, de tarjetas SIM y de comunicaciones.

**Tercero.** El registro de usuarios y tarjetas SIM nuevos, iniciará su operación al día siguiente de la entrada en vigor de las disposiciones administrativas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que lo regulen.

**Cuarto.** Los concesionarios contarán con un plazo de noventa días, a partir de que entren en vigor las disposiciones administrativas emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que regulen el registro de usuarios y de tarjetas SIM, para llevar a cabo el registro correspondiente a las líneas telefónicas contratadas antes de tal fecha.

Para tal efecto, los concesionarios llevarán a cabo campañas de difusión para que sus usuarios registren las líneas celulares dentro de ese plazo, así como para informarles las consecuencias de no hacerlo.

**Quinto.** Una vez que haya fenecido el plazo para registro de las líneas telefónicas celulares contratadas antes de la entrada en vigor del registro de usuarios y tarjetas SIM, los concesionarios cancelarán todas las líneas telefónicas que no hubieren sido registradas.

**Sexto.** En los casos de líneas telefónicas contratadas en modalidad de pospago antes de la entrada en vigor del presente Decreto, en los que los concesionarios ya cuenten en sus archivos con la documentación e información necesaria para llevar a cabo el registro, estos lo llevarán a cabo automáticamente y de forma inmediata, debiendo comunicar al usuario que su línea ha quedado inscrita y los efectos de dicha acción, así como informarle que, en caso de que la línea

hubiera cambiado de titular o usuario, deberá realizar la modificación en los plazos establecidos en el Transitorio Cuarto de este Decreto.”

### Notas

1 Incidencia delictiva del fuero común. Nueva metodología. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp). Disponible en:

<https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published>

2 Ídem.

3 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2019 (Envipe). Principales resultados. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Disponible en:

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf)

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Dresser, Denise. Un crimen más. Disponible en el sitio web de Denise Dresser, en la dirección electrónica

<https://denisedresser.com/columnas/un-crimen-mas>

10 De Mauleón, Héctor. El “secuestro” de Denise Dresser. Disponible en:

<https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/el-secuestro-de-denise-dresser>

11 Conoce los llamados “teléfonos de reclusorio” usados para extorsionar. Disponible en

<https://www.periodicopalacio.com/cdmx/conoce-los-llamados-telefonos-de-reclusorio-usados-para-extorsionar/>

12 Criminales tendrían su propio *call center* para ensayar extorsiones y secuestros. e-Consulta.com. Disponible en:

<https://www.e-consulta.com/nota/2020-01-06/recomendaciones/criminales-tendrian-su-propio-call-center-para-ensayar-extorsiones-y>

Dado en la salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los quince días de enero de 2020.—  
Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica).»

### **Se turna a la Comisión de Radio, Televisión, y Cinematografía de la Cámara de Senadores.**

---

**EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES FEDERALES Y LOCALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE CAPITALIDAD, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

---

«Iniciativa que expide la Ley de Coordinación entre los Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México en materia de Capitalidad, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI

Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para efectos de lo dispuesto en la fracción III del párrafo segundo del artículo 78 de la propia ley fundamental de la república, así como en lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto y con la atenta solicitud de que se sirva turnarla directamente al Senado de la República, se permite presentar la Ley de Coordinación entre los Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México, en materia de Capitalidad, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

#### **Exposición de Motivos**

I. La reforma constitucional de 2016 en materia de instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México.

Luego de un amplio y relevante proceso para modificar las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México, a fin de ampliar los rangos de autonomía de las instituciones locales frente a los poderes de la Federación y elevar el grado de armonía entre la convivencia de dos esferas de atribuciones de facultades públicas en un mismo espacio territorial, mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2016 se introdujeron múltiples modificaciones a la Constitución General de la República en materia de reforma política de la Ciudad de México.

En particular se destaca ahora la modificación radical del contenido del artículo 122 constitucional para establecer en el Apartado A las normas que rigen a los poderes locales en la capital de la República, a través de la disposición de que se expidiera la Constitución Política de esa entidad federativa, dándose por concluida la participación de los poderes federales en el gobierno de la sede territorial en la que se encuentran ubicados. A su vez, en los Apartados B y C se establecieron las disposiciones inherentes a las relaciones entre los poderes federales y los poderes locales en la Ciudad de México y a la zona metropolitana de la propia Ciudad de México.

Así como el desarrollo de las disposiciones del Apartado A del artículo 122 constitucional llevaron a la expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, el desarrollo de las previsiones de los Apartados B y C de dicho precepto deben llevar a la expedición de sendas leyes reglamentarias.

Es pertinente transcribir aquí las disposiciones del Apartado B del artículo 122 constitucional:

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno...

B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución.

El gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para

el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión.

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Corresponde al jefe del gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerce el mando directo de la fuerza pública.

En la Ciudad de México será aplicable respecto del presidente los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo federal podrá remover al servidor público que ejerce el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta base.

Los bienes inmuebles de la federación situados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales.

C. La federación...

D. Las prohibiciones...

Como se aprecia, tanto en los párrafos tercero y séptimo del Apartado B del artículo 122 constitucional se establecen mandatos específicos al Poder Legislativo federal para legislar en materia de coordinación entre los poderes federales y los locales de la Ciudad de México, en atención del carácter de ésta como sede de los Poderes de la Unión y capital de la república, así como para establecer las cárceles

graves que pudieran llevar a la persona titular del Ejecutivo de la Unión, a la remoción de la persona titular del mando directo de la fuerza pública en la Ciudad de México y cuyo nombramiento corresponde a la persona titular de la Jefatura del Gobierno en esta entidad federativa.

II. Incumplimiento del periodo para expedir el ordenamiento

Es preciso recapitular que en el decreto de reformas constitucionales sobre las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México a que ya se ha hecho referencia, se incluyó en el artículo décimo transitorio la previsión de que la ley a que se hace referencia en el párrafo tercero del Apartado B del artículo 122 constitucional entrara en vigor en la fecha en que iniciara la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Es sabido que la Constitución local entró en vigor el 17 de septiembre de 2018. Sin embargo, antes de esa fecha no se expidió la ley relativa a las bases para la coordinación entre los poderes federales y los locales de la Ciudad de México. El incumplimiento en cuestión permanece hasta la fecha.

En la anterior legislatura federal se realizaron trabajos en el Senado de la República para concretar la expedición de la ley en cuestión, particularmente por el entonces senador Mario Delgado Carrillo, en su función de presidente de la Comisión de la Ciudad de México, quien presentó la iniciativa correspondiente y la cual, no obstante los trabajos desarrollados para su dictamen y presentación al pleno senatorial, no alcanzó la etapa de la deliberación y votación en el proceso legislativo correspondiente. La iniciativa que ahora presento ha tomado en consideración este antecedente para la integración de las normas que se proponen.

III. Importancia de expedir la ley reglamentaria del Apartado B del artículo 122 constitucional

Sin dejar de considerar la importancia misma de cumplir el mandato constitucional en materia de expedición de legislación secundaria derivada de las modificaciones constitucionales al régimen de las instituciones políticas y de gobierno de la Ciudad de México, por razones de armonía en las relaciones entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México, así como de seguridad jurídica para su conducción, es menester dar cumplimiento al mandato constitucional de desarrollar las previsiones del Apartado B del artículo 122 constitucional que así lo requieren.

En particular, la iniciativa que ahora presento parte del supuesto de distinguir los elementos fundamentales que integran dicho apartado del artículo constitucional en cuestión.

En primer lugar se encuentran presentes disposiciones nítidas sobre los ámbitos de competencia de los poderes federales en la capital de la república, con base en el principio de distribución basada en el otorgamiento de facultades expresas (primer párrafo del apartado B) y de jurisdicción exclusiva de la federación sobre los bienes inmuebles que integran su patrimonio y que se ubiquen en la capital de la república (séptimo párrafo del Apartado B), que a nuestro juicio requieren menciones reiterativas en la ley reglamentaria que se propone.

De naturaleza similar son las previsiones inherentes a la facultad de la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México para dirigir las instituciones de seguridad pública de la entidad y nombrar y remover libremente a la persona titular del mando directo de la fuerza pública en la misma (quinto párrafo del apartado B) y de la aplicación en la Ciudad de México de lo previsto por el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 constitucional en materia del mando de la fuerza pública que corresponde al Ejecutivo federal en los lugares donde resida habitual o transitoriamente (sexto párrafo del Apartado B).

En segundo término, la obligación general impuesta al gobierno de la Ciudad de México de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales a cargo de los poderes federales (segundo párrafo del Apartado B), que constituye una regla genérica de salvaguarda constitucional para los Poderes de la Unión.

En tercer lugar, las previsiones específica y particular de legislar en torno al cauce de la coordinación de los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México para que aquéllos puedan desempeñar a cabalidad sus funciones constitucionales. La primera se refiere al deber genérico de coordinación entre ambos ámbitos de gobierno (tercer párrafo del Apartado B) y la segunda atañe al señalamiento de las causas graves por las cuales la persona titular del Ejecutivo federal podría determinar la remoción de la persona a cargo del mando directo de la fuerza pública en la capital de nuestro país y cuyo nombramiento corresponde a la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México (párrafo sexto del Apartado B).

Y en cuarto sitio cabe distinguir la previsión constitucional para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, la Cámara de Diputados determine los recursos que fueren necesarios para apoyar a la Ciudad de México en tanto capital de los Estados Unidos Mexicanos.

De la exposición de los contenidos del Apartado B del artículo 122 constitucional se desprende la relevancia de dar cumplimiento al mandato de expedir la legislación reglamentaria correspondiente a las bases de coordinación entre los poderes federales y los poderes locales en la capital de la república, así como para prever las causas graves por las cuales el Ejecutivo federal podría remover del cargo a la persona titular del mando directo de la fuerza pública en la Ciudad de México.

#### IV. Principales contenidos de la propuesta

Esta iniciativa se integra por 18 artículos de aspiración permanente y uno de carácter transitorio. Los primeros se agrupan en tres capítulos, que se refieren respectivamente a las disposiciones generales, las previsiones sobre el mando de la fuerza pública en la Ciudad de México y el régimen de capitalidad.

Entre las disposiciones generales se establecen las normas inherentes al objeto de la ley, que es establecer las bases de coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México, dada la naturaleza de esta última como capital de la república; a la regla del ejercicio de facultades de la federación en la Ciudad de México con base en la atribución expresa; a la naturaleza de los recursos que como capital de la república se otorguen a la Ciudad de México en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y al régimen de los bienes inmuebles de la federación ubicados en la capital de la república.

Como se adelantó, en el capítulo segundo se aborda lo relativo al desarrollo de las previsiones constitucionales sobre el mando de la fuerza pública en la Ciudad de México y las disposiciones para asegurar las condiciones que requieren los poderes de la Unión para el ejercicio de sus facultades en la capital de la república.

Sin demérito de la responsabilidad de la seguridad pública que en el territorio de la entidad federativa corresponde la Ciudad de México, en términos de la concurrencia entre los órdenes de gobierno en esa materia, se propone señalar el deber de auxilio de las autoridades locales en la materia a los

requerimientos de las autoridades federales y el principio general de coordinación, que si bien es propio de la materia de que se trata, se estima conveniente expresar en términos de las condiciones que requieren los poderes de la Unión para el ejercicio sus facultades constitucionales.

Por otro lado, se reiteran las previsiones constitucionales sobre la dirección de las instituciones de seguridad pública locales en la Ciudad de México y el nombramiento y remoción de la persona titular a cargo del ejercicio del mando directo de dichas instituciones. También se refrenda la previsión del párrafo segundo de la fracción VII del artículo 115 constitucional en materia del mando que corresponde al Ejecutivo de la Unión de la fuerza pública en los lugares donde resida.

También se plantea que en consonancia con el deber del gobierno de la Ciudad de México de brindar las condiciones de seguridad necesarias a los Poderes de la Unión para el ejercicio de sus funciones constitucionales, cualquiera de los poderes federales pueda solicitar a dicho gobierno local la actuación que requiera. En todo caso, se propone establecer que, la actuación del gobierno de la Ciudad de México habrá de ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

En particular se plantea establecer una norma preventiva para el caso en el cual si la solicitud de intervención a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México por cualquiera de los poderes federales no fuera objeto de atención –por abstención, incumplimiento, contravención u omisión–, surja la atribución del Ejecutivo federal para impartir las instrucciones directas que estime necesaria a la persona titular del mando directo de la fuerza pública en la Ciudad de México para asegurar el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes de la Unión.

Por otro lado, se plantea establecer una norma general de coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación y de la Ciudad de México para el resguardo y vigilancia de los inmuebles federales en la capital de la república, así como para la realización de operativos que así lo requieran para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

El desarrollo específico de la previsión contenida en el párrafo sexto del Apartado B del artículo 122 constitucional se propone considerar como causas graves limitativas a la posibilidad de que el Ejecutivo federal remueva a la persona titular de la función pública a cargo de ejercer el mando

directo de la fuerza pública en la Ciudad de México, los siguientes presupuestos: i) rehusarse a brindar auxilio a los poderes federales para asegurar el ejercicio sus facultades constitucionales; ii) abstenerse, incumplir, controvertir u omitir la adopción de medidas necesarias para asegurar las condiciones que requiere el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes de la Unión; y iii) establecerse la notoria deficiencia en el servicio de seguridad pública necesario para asegurar el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

En el caso de la remoción que nos ocupa se establece que la designación de la persona que deberá asumir el mando directo de la fuerza pública en la Ciudad de México se realice dentro de los diez días naturales siguientes. Se entiende que la designación en cuestión corresponde a la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

En el capítulo tercero, relativo al régimen de la Ciudad de México como capital de la república, se integran tres secciones inherentes a la Comisión de Capitalidad, al Fondo de Capitalidad y el ejercicio de dicho fondo y la rendición de cuentas inherentes. Se trata de previsiones vinculadas específicamente a lo dispuesto por el cuarto párrafo del Apartado B del artículo 122 constitucional.

Se propone el establecimiento de la Comisión de Capitalidad, como una instancia de carácter permanente con funciones deliberativas y de coordinación entre los ámbitos federal y local para la atención de los asuntos que así lo requieran en consideración al carácter de la Ciudad de México como capital de la república. La comisión se integraría por la persona titular de la Jefatura del Gobierno, quien tendría a su cargo presidirla, así como por tres representantes del Gobierno Federal y tres representantes del gobierno de la Ciudad de México. En el entendido de que estos siete integrantes contarían con voz y voto al interior de la comisión, la misma tendría la atribución de invitar a otras personas titulares de cargos públicos federales y locales para que participen en sucesiones, tiene sólo tendrían voz.

En particular se propone que la Comisión de Capitalidad asuma las siguientes atribuciones: i) formular recomendaciones para la realización de acciones tendientes a asegurar las condiciones que requieren los poderes federales para el ejercicio sus funciones constitucionales en la Ciudad de México; ii) disponer la realización de estudios sobre los costos y beneficios que para las finanzas públicas de la Ciudad de México representa su condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de la república; iii) analizar y



presentar propuestas sobre proyectos de infraestructura y servicios públicos susceptibles de ser financiados por el Fondo de Capitalidad; y iv) las que resulten propias al objetivo de establecer y desarrollar las relaciones de coordinación entre los Poderes de la Unión y los de la Ciudad de México.

También se considera establecer en un artículo las atribuciones de la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, en la función de presidir la Comisión de Capitalidad.

En la sección II se aborda lo relativo al Fondo de Capitalidad previsto en el párrafo cuarto del Apartado B del artículo 122 constitucional para que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se analice y determinen los fondos susceptibles de destinarse a la Ciudad de México para apoyar requerimientos derivados de su connotación de sede de los Poderes de la Unión y capital de la república. Dicho fondo se determinaría con base en la estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente, la naturaleza de los apoyos que requiera la Ciudad de México y el principio del equilibrio de las finanzas públicas.

También se plantea que el ejercicio de los recursos del Fondo de Capitalidad para atender necesidades de infraestructura y servicios públicos de la capital de la república, se dé en términos de las bases que para su ejercicio se establezcan en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.

Adicionalmente, se establecen normas inherentes al ejercicio del Fondo conforme a la normatividad presupuestal federal y para la rendición de cuentas en términos de las normatividades aplicables en los ámbitos federal y local, sin demérito de las obligaciones de transparencia de carácter general, federal y local.

También se propone señalar la asignación de los recursos necesarios para la fiscalización del Fondo de Capitalidad por parte de las entidades superiores de fiscalización de la federación y de la Ciudad de México, así como la previsión relativa a las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse del ejercicio del fondo.

Como única disposición transitoria de la iniciativa de ley que nos ocupa y sobre la base de lo señalado en términos del incumplimiento en el plazo para la expedición del ordenamiento cuestión, se propone que la ley entre en vigor

al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

#### V. Explicación de técnica legislativa

Si bien en los últimos lustros se ha desarrollado en el Poder Legislativo federal la técnica de numerar los párrafos de las disposiciones de los ordenamientos para facilitar la ubicación temático-conceptual de sus contenidos, así como la introducción de futuras modificaciones sin recurrir a la práctica de los artículos bis, ter, etcétera, no ha habido una regularidad en el uso de esta práctica. Por tratarse de una nueva ley y sobre la base de esos precedentes, la iniciativa que presento atiende a la práctica de numerar los párrafos de cada artículo cuando en el mismo exista más de uno.

Por otro lado y también con el ánimo de incidir en el ejercicio cotidiano del lenguaje incluyente, su redacción busca evitar cualquier señalamiento ajeno a esta modalidad.

En virtud de lo expuesto y fundado, por el digno conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión me permito presentar a consideración del Senado la República la siguiente

### **Iniciativa con proyecto de Ley de Coordinación entre los Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México en materia de Capitalidad, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

#### **Capítulo Primero Disposiciones generales**

##### **Artículo 1.**

Esta ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo dispuesto en el Apartado B del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

##### **Artículo 2.**

Los poderes federales ejercerán, con relación a la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que de manera expresa les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 3.**

La federación, en términos de lo dispuesto en el párrafo cuarto del Apartado B del artículo 122 de la Constitución federal y de esta ley, transferirá al gobierno local los recursos necesarios para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de la república. Dichos recursos son irrenunciables y deberán ser ejercidos en términos de las bases correspondientes. Sólo podrán ser objeto de retención por mandamiento judicial.

**Artículo 4.**

1. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México están sujetos al régimen de dominio público federal y bajo la jurisdicción exclusiva de los poderes federales.

2. En términos de la legislación general aplicable en virtud de la concurrencia de facultades entre los órdenes federal y local, las autoridades competentes ejercerán las atribuciones que tengan conferidas para efectos de esos bienes.

3. Estarán exentos de contribuciones a la propiedad inmobiliaria los inmuebles del dominio público de la federación, de las entidades federativas y los municipios en la Ciudad de México, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público.

**Capítulo Segundo****Del mando de la fuerza pública y las disposiciones para asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades de los Poderes de la Unión****Artículo 5.**

El servicio de seguridad pública en la Ciudad de México está a cargo del gobierno local en términos de la legislación en la materia. Las instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México prestarán auxilio a los poderes federales y se coordinarán con las respectivas autoridades de la Federación a efecto de asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución federal confiere a los Poderes de la Unión.

**Artículo 6.**

En términos del párrafo quinto del Apartado B del artículo 122 de la Constitución federal, la dirección de las

instituciones de seguridad pública de la entidad le corresponde a la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, conforme lo establezca su régimen interior. Asimismo, es atribución de ésta nombrar y remover libremente a la persona titular de la función pública a cargo del ejercicio del mando directo de la fuerza pública de la Ciudad de México.

**Artículo 7.**

1. El gobierno de la Ciudad de México asegurará, en todo tiempo y en términos de sus facultades, las condiciones necesarias para que los Poderes de la Unión ejerzan sus facultades constitucionales en la capital de la república.

2. En todo caso, corresponde a la persona titular de la Presidencia de la República la facultad dispuesta por el párrafo segundo de la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos.

**Artículo 8.**

1. La persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México brindará las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes de la Unión.

2. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, cualquiera de los poderes federales podrá solicitar al gobierno de la Ciudad de México el apoyo respectivo. La actuación del gobierno de la Ciudad de México se apegará a los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

3. En caso de que, a solicitud de cualquiera de los poderes federales, la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México se abstuviera, incumpliera, contraviniera u omitiera lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona titular de la presidencia de la República podrá instruir directamente a la persona titular de la función pública a cargo de ejercer el mando directo de la fuerza pública a tomar acciones para asegurar el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales, bajo los mismos los criterios de actuación señalados en dicho párrafo.

**Artículo 9.**

Las instituciones de seguridad pública de la Federación y de la Ciudad de México podrán coordinarse para el resguardo y vigilancia de los inmuebles federales en la Ciudad de

México, así como para la realización de los operativos relativos a eventos, diligencias o actos relacionados con el ejercicio de facultades constitucionales de los poderes de la Unión.

#### **Artículo 10.**

La persona titular de la Presidencia de la República podrá remover a la persona titular de la función pública a cargo de ejercer el mando directo de la fuerza pública de la Ciudad de México por las causas graves siguientes:

- I. Rehusarse a brindar auxilio a los poderes federales a efecto de asegurar las condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les confiere;
- II. Cuando se abstenga, incumpla, contravenga u omita tomar las medidas que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los poderes federales, incluida la protección de sus recintos sede o de los inmuebles en los que desarrollen sus funciones; y
- III. Cuando la seguridad pública se preste de manera notoriamente deficiente para asegurar el ejercicio de las facultades que la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos otorga a los poderes federales.

#### **Artículo 11.**

En el caso de remoción de la persona titular de la función pública a cargo del ejercicio del mando directo de la fuerza pública en la Ciudad de México, prevista en el artículo anterior, el nombramiento de la persona que la sustituya se hará conforme lo disponga el régimen interior en la Ciudad de México, dentro de los diez días naturales siguientes.

### **Capítulo Tercero Del régimen de capitalidad**

#### **Sección I De la Comisión de Capitalidad**

#### **Artículo 12.**

1. Con el fin de garantizar la eficaz coordinación entre las autoridades de la Federación y las de la Ciudad de México, se crea la Comisión de Capitalidad, como una instancia

permanente deliberativa y de coordinación para la gestión de los asuntos derivados del carácter de la Ciudad de México como capital de la república.

2. La comisión estará integrada por la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, quien la presidirá, tres representantes del gobierno federal y tres representantes del gobierno de la Ciudad de México con sus respectivas suplencias. Dichas personas serán nombradas por las personas titulares de los Ejecutivos respectivos, quienes contarán con voz y voto.

3. La comisión sesionará ordinariamente cuatro ocasiones al año y extraordinariamente cuando así lo considere su presidente. Los representantes deberán tener por lo menos el nivel jerárquico de subsecretarios.

4. La persona titular de la Presidencia de la República y la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México harán las designaciones de sus representantes con base en las atribuciones materiales conferidas a las dependencias o entidades de su ámbito de competencia en asuntos que comprendan las relaciones entre la administración pública federal y la administración pública local.

5. La comisión podrá formular invitación a las personas titulares de cargos públicos federales y locales para que participen en sus sesiones, a fin de contribuir al mejor desarrollo de sus trabajos, quienes sólo tendrán voz.

6. En sus ausencias, la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México será suplida por la persona titular de la Secretaría de Gobierno.

7. La comisión adoptará los acuerdos necesarios para su adecuado funcionamiento, los cuales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta local.

8. La comisión contará con una secretaría técnica, cuya titularidad recaerá en la persona que nombre la comisión a propuesta de quien tiene a su cargo presidirla.

**Artículo 13.** La comisión se encargará de atender los siguientes asuntos:

- I. Formular recomendaciones para la realización de acciones tendientes a asegurar las condiciones que requieren los poderes federales para el ejercicio de sus facultades constitucionales. En todo caso, las autoridades

federales y las autoridades locales actuarán con base en las atribuciones que tengan conferidas.

II. Disponer la realización de estudios sobre los costos y los beneficios que para las finanzas públicas de la Ciudad de México representa la condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Analizar y presentar propuestas sobre proyectos de infraestructura y servicios públicos susceptibles de ser financiados por el Fondo de Capitalidad, a fin de remitirlas a la Cámara de Diputados para su análisis y determinación en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del Apartado B del artículo 122 constitucional; y

IV. Las demás que correspondan al objetivo de establecer y desarrollar relaciones de coordinación entre los poderes de la Unión y los poderes de la Ciudad de México.

#### **Artículo 14.**

La persona titular de la presidencia de la comisión tiene las siguientes atribuciones:

I. Presidir las sesiones de la comisión y, en caso de empate en las votaciones, hacer uso exclusivo del voto de calidad;

II. Convocar a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario;

III. Solicitar a las personas integrantes de la comisión la información necesaria para su mejor

IV. Invitar a las personas titulares de las dependencias, órganos desconcentrados o entidades de la administración pública federal o de la Ciudad de México a participar en las sesiones que celebre la comisión cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar en alguna sesión o bien cuando por sus conocimientos, experiencia y reconocida capacidad se considere pertinente su participación, en virtud de las aportaciones que pudieren llevar a cabo para los trabajos de la propia comisión.

Las personas integrantes de la comisión podrán formular propuestas para que se realicen invitaciones a quienes ejerzan funciones públicas, sean especialistas en alguna materia o se les considere con el rango de expertos o expertos;

V. Remitir a la Cámara de Diputados las propuestas a que se refiere la fracción III del artículo anterior; y

VI. Las demás que sean necesarias para la ejecución de los acuerdos de la comisión.

### **Sección II Del Fondo de Capitalidad**

#### **Artículo 15.**

1. El Fondo de Capitalidad se integra por los recursos que determine la Cámara de Diputados al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en términos del párrafo cuarto del Apartado B del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para apoyar a la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de la república.

2. El monto del fondo a que se refiere el párrafo anterior se determinará con base en la estimación de los ingresos para el ejercicio fiscal del año siguiente, la naturaleza de los apoyos que requiera la Ciudad de México y el principio del equilibrio de las finanzas públicas.

#### **Artículo 16.**

El gobierno de la Ciudad de México deberá aplicar los recursos del Fondo de Capitalidad para atender las necesidades de infraestructura y servicios públicos de la capital de la república, en términos de las bases para su ejercicio que establezca la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

### **Sección III Del ejercicio del Fondo de Capitalidad y la rendición de cuentas**

#### **Artículo 17.**

1. El ejercicio de los recursos del Fondo de Capitalidad de la Ciudad de México es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad presupuestal federal.

2. La Ciudad de México deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Congreso local, la información relativa a la aplicación de los recursos del Fondo de Capitalidad.

3. Lo anterior, sin menoscabo de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas derivadas de la legislación general, federal y local en la materia.

### Artículo 18.

1. La Ciudad de México deberá destinar la cantidad equivalente al uno al millar del monto total de los recursos del Fondo a la Auditoría Superior de la Federación para su fiscalización y una cantidad equivalente al órgano fiscalizador local para la vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos que se ejecuten por administración directa con esos recursos, de conformidad con la normatividad aplicable.

2. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la Hacienda pública federal en que llegasen a incurrir las o los servidores públicos, federales o locales, así como personas que tengan el carácter de particulares, serán determinados y sancionados en los términos de la legislación aplicable.

### Transitorio

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.— Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.**

---

## LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

---

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 449 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 179 del

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

### Exposición de Motivos

La alternancia en el poder político y la pluralidad que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas, han generado contiendas electorales cada día más competidas, por ello, cada proceso electoral ha significado una experiencia única que ha evidenciado la necesidad de impulsar diversas reformas a la ley con el objeto de adaptarla a las nuevas realidades y poder contar así con procesos electorales más justos y equitativos.

En este sentido, el surgimiento y desarrollo de los procedimientos sancionadores en materia electoral han jugado un papel fundamental en el fortalecimiento de la equidad y la certeza en la contienda electoral.

En palabras del doctor Lorenzo Córdova Vianello, el procedimiento administrativo especial sancionador tiene una naturaleza restauradora del orden legal dentro de un proceso electoral.<sup>1</sup>

Es importante destacar que la reforma constitucional de 1996, por primera vez le confirió a la autoridad administrativa en materia electoral la atribución de tramitar y resolver procedimientos administrativos, así como la aplicación de sanciones derivadas de infracciones cometidas por partidos políticos, agrupaciones políticas y observadores electorales.

En la actualidad, el Libro Octavo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales desarrolla el régimen sancionador electoral y en su Título Primero establece las faltas electorales y su sanción.

Ahora bien, en el artículo 442 de la Ley referida se prevé un amplio catálogo de sujetos que pueden ser responsables por infracciones electorales, mismo que, para bien de la equidad en la contienda, se ha venido ampliando. Entre dichos sujetos destacan las autoridades y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno del Distrito Federal (no ha sido reformado para sustituir Distrito Federal por Ciudad de México), órganos autónomos y

cualquier otro ente público. Con la incorporación de dichos servidores públicos como sujetos responsables, se busca evitar los abusos del pasado, en los cuales los funcionarios, aprovechando su posición de poder, generaban inequidad en la contienda.

No obstante el gran avance que significó incluir a los servidores públicos como sujetos responsables, los últimos acontecimientos han demostrado que es necesario perfeccionar dicho dispositivo legal. En particular, llama la atención el reciente caso del gobernador del estado de Nuevo León, en el cual la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que dicho servidor público aprovechó su posición pública para que funcionarios que laboraban para el gobierno del estado, recabaran las firmas necesarias para su candidatura presidencial, aprovechándose así de los recursos públicos; sin embargo, por deficiencias en la normatividad que ahora se propone reformar, no ha sido posible aplicar la sanción correspondiente.

En el artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen las infracciones de los sujetos obligados, es decir, de los partidos políticos, de las agrupaciones políticas, de los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de los ciudadanos, de los observadores electorales y de los servidores públicos. No obstante, las infracciones de los servidores públicos que se prevén resultan insuficientes; por ello, se propone adicionar como conductas sancionables de los servidores públicos las manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, candidatos o precandidatos durante la campaña, asistir durante horas hábiles a reuniones públicas o privadas con candidatos o precandidatos, o a eventos partidistas, destinar los recursos humanos, materiales o económicos de que disponga el servidor público para favorecer o perjudicar a algún candidato, precandidato o aspirante o candidato independiente o partidos políticos o cualquier acto que implique la violación al principio de equidad en la contienda.

Asimismo, del contenido del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende que resulta necesario establecer el catálogo de sanciones específicas para los servidores públicos que incurran en dichas infracciones, por tanto, se propone adicionar un párrafo con el objeto de establecer dicho catálogo y evitar así que no queden sin sanción las infracciones cometidas en esta materia por los servidores públicos.

Por lo expuesto proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de

### **Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**

**Artículo Único.** Se reforman el párrafo 1 y el inciso e) del artículo 449; se adicionan los incisos f), g), h), i) y j) al artículo 449, así como un inciso j), conformado por las fracciones I a IV al artículo 456, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

#### **Artículo 449.**

1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno **de la Ciudad de México**; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

a) a d) ...

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o **de la Ciudad de México**, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato;

**f) Destinar los recursos humanos, materiales o económicos de que disponga, para favorecer o perjudicar a algún precandidato, candidato o partido político;**

**g) Asistir en horas hábiles a reuniones de carácter público o privado con precandidatos, candidatos o eventos partidistas;**

**h) Realizar manifestaciones a favor o en contra de candidatos, precandidatos o partidos políticos durante la campaña electoral;**

**i) Cualquier actuación que implique violación al principio de equidad en la contienda; y**

**j) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.**

**Artículo 456.**

1. ...

a) a i) ...

**j) Respecto a los servidores públicos:****I. Amonestación pública;****II. Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta;****III. Destitución;****IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.****Transitorio****Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.**Nota**

1 Córdova Vianello, Lorenzo, "Naturaleza y prospectiva del procedimiento especial sancionador", Revista Folios, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, número 27, 2012, páginas 52-57.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 15 de enero de 2020.— Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»

**Se turna a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.**


---

**LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y  
RESPONSABILIDAD HACENDARIA**


---

«Iniciativa que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Ruth Salinas Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV

Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a la siguiente

**Exposición de Motivos**

Uno de los problemas a los que se han enfrentado todos los gobiernos en América Latina ha sido el combate a la pobreza y a la desigualdad, los cuales siguen siendo problemas estructurales de nuestra región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), aun cuando se lograron importantes avances en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema entre comienzos de la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en lo que se refiere a la pobreza extrema. En 2017, el 10.2 por ciento de la población de América Latina se encontraba en situación de pobreza extrema y el 30.2 por ciento en situación de pobreza. Además, el promedio simple de los índices de Gini de 18 países de América Latina era de 0.47.<sup>1</sup>

Derivado de esta situación de pobreza y desigualdad, los países de América Latina y el Caribe han emprendido diversas políticas públicas orientados a erradicar la pobreza y a disminuir las desigualdades existentes, entre las que encontramos la implementación de los llamados programas sociales, principalmente los conocidos como de asistencia social, destacando, de acuerdo con la CEPAL, los programas de transferencias condicionadas de ingreso, los programas de inclusión laboral y productiva, y las pensiones sociales. Todos estos programas se tratan de acciones financiadas mediante recursos públicos, o en su caso, de la cooperación internacional, bajo el principio de solidaridad.

Estos programas sociales representan un elemento fundamental de las estrategias y políticas de superación de la pobreza en los países de la región ya que están dirigidos, principalmente, a quienes viven en situación de extrema pobreza, pobreza y mayor vulnerabilidad.

México no es ajeno a las condiciones de pobreza y desigualdad en América Latina, ya que, de acuerdo con datos

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),<sup>2</sup> si bien de 2008 a 2018 ha disminuido la pobreza en nuestro país, aún existe un porcentaje elevado de personas que viven en pobreza al representar el 41.9 por ciento. Respecto a la pobreza extrema, también se logró disminuir en la última década, al pasar del 11 por ciento al 7.4 por ciento, sin embargo, esto representa que aún existen 9.3 millones de mexicanos en esta condición.

En cuanto a la desigualdad, el mismo Coneval nos indica que el mayor reto sigue siendo el sureste del país, en donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década de 2008 a 2018: Chiapas (76.4 por ciento), Guerrero (66.5 por ciento), Oaxaca (66.4 por ciento) y Veracruz (61.8 por ciento). Respecto a las diferencias entre zonas rurales y urbanas, la pobreza en 2018 en zonas rurales aún sigue siendo mayor con el 55.3 por ciento comparado con el 37.6 por ciento en las zonas urbanas.

Debemos recordar que el derecho a una vida digna está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos,<sup>3</sup> cuyo artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º reconoce el derecho a la educación. Por su parte, el artículo 4º reconoce los derechos a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable y a una vivienda digna.

Congruente con nuestra Constitución y con los tratados internacionales en la materia, fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, señala, en su artículo 20, la Ley General De Desarrollo Social (LGDS), la cual tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, tal como lo señala su artículo 1.

La LGDS establece, en su artículo 20, que el presupuesto federal destinado al gasto social, no podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior y garantiza que su incremento será cuando menos en la proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto.

De tal suerte, el gasto destinado al desarrollo social tiene una importancia significativa en cada ejercicio fiscal, como un rubro significativo del Gasto Programable, en virtud de que es un gasto destinado a atender las necesidades más apremiantes de la población.

A pesar de su importancia, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP),<sup>4</sup> el gasto programable como proporción del PIB muestra una tendencia a la baja al pasar de 20.8 por ciento en 2015 a 16.7 por ciento estimado para 2019. El gasto en desarrollo social pasó de representar 14.7 por ciento del PIB en 2015, su mayor nivel, a 13.0 por ciento en 2018. Sin embargo, el gasto social alcanzó su mayor nivel en 2018 al representar 75.0 por ciento del gasto total programable, estimando que, para finalizar el ejercicio fiscal 2019, alcance 80.2 por ciento.

Por último, el CEFP nos señala que, en proporción del total del gasto programable en desarrollo social, las erogaciones destinadas a programas de protección social se han incrementado, al pasar del 1.6 en 1990 al 50.9 para el monto aprobado en el Presupuesto 2019.

Por su parte, el Coneval, en su “Inventario Nacional Coneval de Programas y Acciones de Desarrollo Social”<sup>5</sup> señala que, entre 2008 y 2018, el gasto en programas y acciones de desarrollo social representó 21 por ciento del gasto programable total. En el periodo el presupuesto para programas sociales incrementó en términos reales en 26 por ciento. Como proporción del PIB para el periodo 2008-2016, en términos reales, representó en promedio 4.9 por ciento.

Referente a los programas sociales, el Coneval identificó, para el 2018, 150 programas y acciones federales de desarrollo social, cuyo presupuesto original para el total de programas fue de \$910.28 mil millones de pesos. De dichos programas, 64 programas fueron modalidad S “Reglas de Operación” (43 por ciento), 57 modalidad E “Prestación de Servicios Públicos” (38 por ciento), 26 son modalidad U “Otros programas de subsidios” (17 por ciento) y 3 programas son modalidad B “Provisión de bienes públicos” (2 por ciento). Respecto del presupuesto total, los programas modalidad E concentraron el 49.2 por ciento, los S el 31.8 por ciento, los U el 18.5 por ciento y los B el 0.5 por ciento.

Lo anterior cobra importancia toda vez que, en esta nueva administración, y de acuerdo al Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2019 elaborado por Gestión Social y Cooperación A. C. (Gesoc),<sup>6</sup> se



identificaron 122 programas y acciones federales de desarrollo social, los cuales contaron, para este 2019, con un presupuesto de 849 mil 704 millones de pesos, representando el 20.49 por ciento del gasto público programable aprobado.

El Gesoc identificó cinco programas integran la “caja negra del gasto social”, pues no identifican la población potencialmente beneficiaria a que van dirigidos, lo cual impide estimar su desempeño. Dichos programas obtuvieron un presupuesto total de mil 362 millones de pesos para 2019, es decir, 0.16 por ciento del total asignado al conjunto de programas sociales del gobierno federal y que para el 2020, su presupuesto en 2020 se elevará en 3.95 por ciento, respecto de lo que se aprobó en 2019.

Lo anterior cobra mayor relevancia toda vez que, los principales programas de la actual administración, como son Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pensión para personas con discapacidad, Producción para el Bienestar y becas para estudiantes de Educación Media Superior no tendrán reglas de operación para 2020, tal y como sucedió en este 2019 ya que se encuentran en la estructura programática con la letra U, que identifica a los de la modalidad Otros subsidios, y que no están obligados a tener esas reglas.

Estos programas, al no estar obligados a emitir sus Reglas de Operación, no contarán con elementos suficientes para poder evaluar a su población objetivo, el mecanismo de selección de los beneficiarios, los parámetros para su operación, sus metas, resultados y, sobre todo, la forma de gastar los recursos.

Como se puede observar, aún existe un frado de opacidad en el manejo de los recursos públicos destinados a los programas sociales, los cuales, como se mencionó anteriormente, representan un gran porcentaje en el gasto de los gobiernos y que, de acuerdo a la Ley, deben irse incrementando con el paso del tiempo, lo que nos obliga, como representantes populares, a blindar de cualquier mal uso o desvío de recursos públicos destinados a abatir la pobreza y reducir la desigualdad en nuestra Nación.

Recordemos que uno de los mayores retos de toda administración pública es el generar un ambiente de confianza entre gobernados y gobernantes. Para ello, se vuelve indispensable que los gobiernos implementen mecanismos que transparenten y permitan una mejor rendición de cuentas en el quehacer gubernamental y el correcto manejo de los recursos públicos.

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas cobra mayor importancia toda vez que, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2018,<sup>7</sup> publicado por Transparencia Internacional el pasado 29 de enero, señala que México es de los países más corruptos del mundo al obtener 28 puntos, colocándolo en el lugar 138 de 180 países, ubicándonos por encima de países como Guatemala (144°), Nicaragua (152°) o Venezuela (168°) y por debajo de países como Bolivia y Honduras (132°), El Salvador y Brasil (105°), Panamá (93°), Jamaica (70°), Estados Unidos (71°), Cuba (61°), Costa Rica (48°) o Canadá (9°).

En este sentido, se vuelve imperativo que la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan parte fundamental de nuestra cultura cívico-política.

Es por ello, que la presente iniciativa busca transparentar los recursos públicos destinados a los programas sociales del gobierno federal, al establecer, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la obligación de que todos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios deban sujetarse a Reglas de Operación.

Recordemos que, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 aprobado por esta H. Cámara de Diputados, se establece, como el primer principio rector de la política pública de este gobierno, la honradez y honestidad, además, se establece como eje transversal el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, por lo que, al establecer el mecanismo de transparencia propuesto, contribuiremos a alcanzar los objetivos planteados desde el PND.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

### **Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**

**Único.** Se reforma el primer párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

**Artículo 77.** Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios. **Todos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios** deberán sujetarse a reglas de operación. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de

Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

...

I. y II. ...

...

...

...

### Transitorios

**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Los programas a través de los cuales se otorguen subsidios que estén en operación y que no cuenten con reglas de operación, deberán emitirlas y publicarlas, en el Diario Oficial de la Federación, en un lapso no mayor a ciento veinte días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

### Notas

1 [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44602/1/S1900005\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44602/1/S1900005_es.pdf)

2 [https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO\\_10\\_MEDICION\\_POBREZA\\_2008\\_2018.pdf](https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf)

3 <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

4 <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/2019/precefp0032019.pdf>

5 <https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Informacion-debate/Inventarios-gasto-desarrollo-social.pdf>

6 <https://www.indep.gesoc.org.mx/downloads/2019/Resumen%20Ejecutivo%20INDEP%202019.pdf>

7 <https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2018-via-transparencia-internacional/Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de enero de 2020.>

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 2019.— Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica).»

### Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

---

## CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

---

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado **Marco Antonio Carbajal Miranda**, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo doce del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, de acuerdo a la siguiente:

### Exposición de Motivos

Un factor esencial para alcanzar el desarrollo humano, social y económico es la educación; desafortunadamente para muchos países no representa una prioridad nacional, por lo que los esfuerzos y recursos que destinan a este rubro son escasos.

Si esta situación se presenta con la educación en general, que el gobierno está obligado a proporcionar a sus habitantes para que desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes mínimas indispensables para responder a las exigencias del medio y satisfacer las necesidades de los distintos sectores, sucede mucho más con un ámbito específico de la misma como lo es la educación financiera, a la que tampoco se le ha reconocido la importancia debida. La calidad de vida de las personas con bajos niveles de educación por lo general es reducida, tendiendo a vivir en la pobreza; un país cuyos habitantes no están educados difícilmente puede progresar y desarrollarse.<sup>1</sup>

Hablando en términos financieros, una población que no sabe cómo planear sus ingresos y gastos, que no tiene una cultura del ahorro y desconoce cómo endeudarse sin afectar sus finanzas, no puede mejorar su bienestar social y, por consiguiente, no contribuye al desarrollo económico de su país.

El mundo actual enfrenta muchos retos, uno de ellos es el financiero. Es imprescindible que las personas adquieran conciencia sobre su futuro económico sin esperar que éste dependa de sus gobiernos, sus empleadores o sus familias.

En cuántas ocasiones hemos escuchado decir que en México existe un rezago en materia de cultura financiera, pero ¿a qué se refiere dicha aseveración? En primera instancia debemos comprender su significado, para lo cual podemos definir a la cultura financiera como “el conjunto de conocimientos, prácticas, hábitos y costumbres que cada individuo posee para administrar, incrementar y proteger su patrimonio en las diferentes etapas de su vida”.<sup>2</sup>

Cuando los errores se convierten en hábitos, corregirlos puede ser aún más complicado y eso en la planeación de las finanzas personales puede afectar seriamente la economía, acciones como no planear, ni invertir o perder el control de nuestras finanzas pueden ser algunos de los errores más comunes en el manejo de las finanzas personales.<sup>3</sup>

México se consolida como el segundo proveedor más importante de Estados Unidos en bienes no petroleros, al citar como ejemplo el papel que ha tenido la industria automotriz, que durante los primeros ocho meses de 2011 suministró al mercado norteamericano el 26.6 por ciento de sus requerimientos en productos automotrices, con ello, la industria automotriz mexicana ocupa el primer lugar como abastecedora de esa industria en Estados Unidos como país es importante el crecimiento de los ciudadanos, las empresas pero en donde surge todo el crecimiento, en los niños.<sup>4</sup>

Llega un momento en la historia de cualquier niño o niña en el que un adulto, probablemente uno de sus abuelos o algún otro familiar, le da una moneda. ¿Gastarla en el momento o mejor guardarla para más tarde? He aquí una de las primeras decisiones financieras a las que ese tierno infante deberá enfrentarse a lo largo de su vida.<sup>5</sup>

¿Cómo evitar que ese pequeño crezca y se convierta en un analfabeto financiero? Aunque la economía parezca una ciencia reservada para “mayores”, lo cierto es que los adultos deben hablar de finanzas personales con los más pequeños y

hacerlo de manera que les resulte interesante y entretenido. Es fundamental aprender el valor del dinero, y así comprender el valor del trabajo, del estudio, de la responsabilidad y un largo etcétera.

Mostrar a los niños conceptos básicos, como presupuestar, gastar y ahorrar, establecerá buenos hábitos para la vida y es clave para su desarrollo personal, trabajar en la enseñanza de finanzas personales con los niños permite abordar otros temas sensibles indisolublemente unidos, en referencia al consumo responsable y la salud financiera.

Es más factible tener finanzas personales saludables si ejerces un consumo responsable, es decir, si apagas la luz al salir, te sirves solo lo que vas a comer, no derrochas papel, reciclas y estos son mensajes que se pueden transmitir a los niños desde muy pronto.

Esas primeras monedas, se puede ir avanzando por el largo camino de la educación financiera. Para empezar, hay que enseñar a los niños qué es el **ahorro**, es el primer paso para poder cumplir los sueños que cuestan dinero, darnos nuestros pequeños y grandes gustos, o conseguir aquello que necesitamos o no llevarnos grandes disgustos si alguna vez necesitamos dinero para algún imprevisto. Y lo bueno que tiene es que es algo que se practica.

Partiendo de la idea de “guardar el dinero para utilizarlo más adelante”, es importante que niños y jóvenes entiendan que, frente al consumo inmediato y en cosas prescindibles y superfluas, ahorrar es la vía que les permitirá gastar ese dinero de forma más inteligente, alcanzando mayores cotas de satisfacción y felicidad.

Este escenario es idóneo para empezar a hacer cuentas con los niños y que estos vean cuánto dinero y cuánto tiempo necesitan para conseguir un objetivo concreto. Aunque no hay consenso sobre la cantidad y la periodicidad, el consejo es que la paga no sea tan alta como para que el niño pueda permitirse su “capricho” sin necesidad de ahorrar unas semanas. Además, es clave que, si se agotan las reservas porque el niño gasta la paga demasiado pronto, no se inyecte dinero extra, en la vida real no es así.

Se opte por la asignación o por cubrir las necesidades económicas de los hijos según vayan surgiendo, es muy importante ser capaz de transmitir a los niños que el dinero de sus padres es fruto del trabajo y del esfuerzo. Y que, por supuesto, no es infinito, se acaba, se puede mostrar a los niños la fuente de ingresos y explicarles en qué consiste el

trabajo de papá y mamá y, si es posible, invitarles a que lo vean en primera persona.

Esta es justo la idea sobre el ahorro que los pequeños deben ser capaces de extrapolar a la vida real, el verdadero ahorro es el que consigue que el dinero “trabaje” para nuestro beneficio futuro, y una vez transmitida la idea del ahorro como algo positivo y estimulante, hay que inculcar el hábito. Una forma divertida y que a todos los niños les gusta es la de la típica hucha, habitualmente con forma de cerdito.

**La importancia de la educación financiera**

Pueden parecer pasos simples, pero son la base sobre la que asentar la **cultura financiera** de los más pequeños, una **asignatura**, los padres deben ayudar a sus hijos a entender cómo y por qué ahorrar, a consumir responsablemente, a gastar de manera inteligente, a sacarle provecho al dinero pero en esta educación también juegan (o deberían jugar) un papel importante las escuelas. Al contrario que otras materias que sí se aprenden en las aulas, los planes educativos apenas incluyen contenidos económicos.

Los bajos niveles de cultura financiera que tiene la población mexicana se deben en gran parte a la falta de educación financiera, esto se refleja principalmente en el escaso o nulo uso de productos y servicios financieros, en malos hábitos al momento de adquirirlos, en el desconocimiento de sus derechos y obligaciones, así como en la falta de planeación financiera, lo que impacta negativamente en su bienestar y calidad de vida, al mismo tiempo que no coadyuva a que las instituciones financieras alcancen los niveles de competitividad requeridos y que se impulse el desarrollo económico del país.

En México a este tema no se le da la importancia que merece, apenas en los últimos años se han realizado diversos estudios para conocer los conocimientos, hábitos y usos que hace la población de los productos y servicios financieros que se ofrecen en el sistema financiero; con base en ellos se ha emprendido un conjunto de acciones por parte del gobierno, la iniciativa privada y el sector educativo, con la finalidad de promover la educación financiera, sin embargo, si bien es cierto dichos esfuerzos han representado grandes avances, no han sido suficientes.<sup>6</sup>

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
ART. 3 Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.	ART.3 Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de	Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de
nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.	nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, educación financiera y el cuidado al medio ambiente, entre otras.
I a la X...	I a la X...

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

**Decreto por el que se reforma el párrafo doce del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

**Artículo Único.** Se reforma el párrafo doce del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

**Artículo 3o.** Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

...

...

...

5. <https://www.lne.es/especiales/miralfuturo/ahorro-ninos.html>

...

6. Contexto de la educación financiera en México. Eva Leticia Amezcua García; María Georgina Arroyo Grant y Francisco Espinosa Mejía

...

<https://www.uv.mx/iiesca/files/2014/09/03CA201401.pdf>

...

Dado en la Ciudad de México, dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días de enero de 2020.— Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica).»

...

**Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.**

...

...

...

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, **educación financiera** y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

I. a la X...

**Transitorios**

**Primero.** Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**Segundo.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**Notas**

1. Trump-Donald J. y Robert T. Kiyosaki (2008). Queremos que seas rico. México: Ed. Aguilar.

2. Amezcua et al, 2014, p. 110.

3. <https://www.forbes.com.mx/8-errores-que-cometemos-en-el-manejo-de-las-finanzas-personales/>

4. <http://www.2006-2012.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/6986-boletin278>

**CÓDIGO PENAL FEDERAL**

«Iniciativa que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, **José Salvador Rosas Quintanilla**, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente **iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal.**

**Considerando**

La presencia de inseguridad en el país es un problema de dimensiones mayúsculas que se ha exacerbado con el paso de los años, especialmente en el plano de la confianza ciudadana y su concepción acerca de sus comunidades. Con la intromisión de grupos delictivos, como el crimen organizado, las dinámicas cotidianas han sufrido cambios notorios, al volverse el espacio público un lugar con mayores riesgos para la vida de los ciudadanos, lo que ha derivado en un cambio de las conductas de las personas, las cuales se han vuelto más reservadas y escépticas respecto a las relaciones que entablan, las posesiones que lucen y los gastos que realizan.

Así, la percepción ha mostrado una tendencia estable respecto a la incidencia delictiva, donde el 71.3 por ciento de la población sentía que habitaba en un lugar inseguro hasta septiembre de 2019, en contraste con el 74.9 por ciento que se registró el año pasado<sup>1</sup> para el mismo periodo, lo que habla de una leve mejoría en el plano de la confianza ciudadana respecto a sus autoridades. Sea por la presencia de la Guardia Nacional, una mejor labor de las autoridades locales o por cuestiones de la muestra seleccionada, esta pequeña ganancia discrepa un tanto de los resultados obtenidos sobre la incidencia real de los delitos, donde el ascenso de homicidios y hurtos sigue siendo de preocupación para las autoridades, escenario de partida para este año ya que se registraron 33 millones de delitos cometidos en 2018.<sup>2</sup> Contando con 95 homicidios en promedio por día, se registraron 28 mil 782 asesinatos para finales de septiembre de 2019,<sup>3</sup> donde 6 estados concentraron el 49 por ciento de los casos registrados, que son Guanajuato (285), Jalisco (239), Baja California (234), Michoacán (229), estado de México (209) y Chihuahua (205).

Con la presencia constante de actividades delictivas, aquellos que las cometen no son meramente actos azarosos y desarticulados, posible gracias a la aparición de nuevos grupos delictivos, al igual que nuevas formas de cometer crímenes, los cuales han alcanzado nuevas dimensiones, como la ciberdelincuencia, ampliando su campo de acción y las posibilidades de negocio que con cada expansión generan. Mediante un gran aparato financiero, la existencia de diferentes cuerpos a lo largo del país y una diversificación mercantil, los crímenes que hoy en día se realizan no son erráticos o predominante individuales, sino que corresponden a grandes redes que han sistematizado su manera de funcionar, incluyendo sus crímenes, que usualmente requieren de participantes “expertos” en la comisión de fechorías.

Es así que, con la consolidación de cuerpos organizados de delincuentes, la administración anterior y la presente no lograron sus objetivos hasta el día de hoy, donde las pretensiones de disminuir esta clase de actos son altas las expectativas que se tuvieron en el mediano plazo. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtenida por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019,<sup>4</sup> se cometieron 33 millones de delitos durante 2018,<sup>5</sup> en contraste con los 33.6 millones de delitos estimados en 2017,<sup>6</sup> lo que habla de una contención y un ínfimo (pero significativo) rendimiento positivo, abriendo la oportunidad de trabajar sobre lo hecho.

Sus aplicaciones son tan amplias como la diversidad de crímenes, donde existen una serie de actos que se cometen con más frecuencia que otros, como es el caso del robo. De éste, el interés por el robo al autotransporte federal público o privado se ha vuelto una actividad común, siendo señalado en el Congreso en exhortos y recientes iniciativas, al pasar de 5 mil 192 casos en 2015 a 9 mil 35 casos de delincuencia en 2017,<sup>7</sup> de acuerdo con información provista por el Observatorio Nacional Ciudadano<sup>8</sup> y compartida por el Senado. Estas cifras se ven corroboradas por su tendencia en 2019, donde se estima que se comete un delito relacionado con unidades en carreteras federales cada 45 minutos<sup>9</sup> y la que representó una pérdida de 17 millones de pesos diarios<sup>10</sup> entre los meses de enero a agosto de 2019, de acorde a lo expresado por Flavio Enrique Rivera Mejía, director de Daimler Vehículos Comerciales México,<sup>11</sup> empresa que cuenta con aproximadamente 40 por ciento de participación del mercado mexicano.<sup>12</sup>

A partir de ello y llevando las cifras a un mayor alcance, se cometerían 32 delitos diarios relacionados a unidades en carreteras del país, lo que representa un total de 11 mil 648 casos anualmente. Por su parte, en el plano económico, si extrapolamos la cifra a un monto anual, la pérdida representaría 6 mil 188 millones de pesos para finales del año, cantidad significativamente alta ante la dependencia que tenemos del autotransporte de carga y pasajero para la realización de labores comerciales en diferentes plazas del país, donde los robos se suman a los actos de violencia entre delincuentes, ya que los enfrentamientos ocurridos en carreteras federales han registrado un total de 88 balaceras,<sup>13</sup> aumentando los peligros a los que se pueden enfrentar los choferes de autotransporte.

Con lo expuesto, la relevancia de la actividad y la salvaguarda de aquellos que ocupan y dan el servicio resultan indispensable, especialmente en el plano del robo. Así, proponer una reforma al Código Penal Federal en su artículo 376 Ter, referido a los tiempos de prisión considerados por el robo a prestadores de servicios y pasajeros que pudieran ir en la unidad, para aumentar los años de sanción como ejercicio ejemplar que promueva la reducción del delito, al pasar de un periodo de 6 a 12 años a uno de 8 a 14 años en la primera, y de 2 a 7 años a uno de 3 a 8 años en la segunda.

Esta postura, medida en el incremento, corresponde a realzar la valía de la seguridad carretera desde las posibilidades de la ley en el plano de sus sanciones, donde la principal responsabilidad recae en la eficiencia de la labor de las autoridades en los procesos de prevención, investigación

y sanción de los delitos carreteros. La falta en el cumplimiento de estos objetivos solamente afecta la eficiencia de la ley, siendo la pretensión del presente documento reducir la incidencia del delito de robo a autotransporte a través del mensaje claro de que no dudaremos en aseverar de manera constante las consecuencias de sus actos.

Sobre este escenario, a continuación clarifico los cambios que se proponen en el siguiente cuadro:

Código Penal Federal VIGENTE	Código Penal Federal MODIFICACIÓN
<b>Artículo 376 Ter.</b> A quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión, cuando el objeto del robo sea las mercancías y de 2 a 7 años de prisión, cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.	<b>Artículo 376 Ter.</b> A quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de 8 a 14 años de prisión, cuando el objeto del robo sea las mercancías y de 3 a 8 años de prisión, cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.
...	...
...	...

Con esto, se ejemplifica de manera explícita el argumento para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

### Decreto por el que se reforma artículo 376 Ter del Código Penal Federal

**Único.** Se reforma artículo 376 Ter del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 376 Ter.** A quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de 8 a 14 años de prisión, cuando el objeto del robo sea las mercancías y de 3 a 8 años de prisión, cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.

Quando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los artículos 376 Bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que correspondan por otras conductas ilícitas que concurren en la realización del delito, incluidas las previstas en el párrafo primero del presente artículo.

Quando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda.

### Transitorio

**Único.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### Notas

1 Redacción Animal Político. (2019). ¿Más tranquilos? El Inegi reporta que la percepción de inseguridad en México bajó 2.6 por ciento, 2 de Diciembre de 2019, de Animal Político. Sitio web:

<https://www.animalpolitico.com/2019/10/baja-percepcion-inseguridad-mexico-inegi/>

2 Lidia Arista. (2019). Éstos son los 10 estados más inseguros y los delitos más cometidos en México, 2 de Diciembre de 2019, de Expansión. Sitio web:

<https://politica.expansion.mx/mexico/2019/09/24/estos-son-los-10-estados-mas-inseguros-y-los-delitos-mas-cometidos-en-mexico>

3 Redacción AN / GS. (2019). Radiografía de la violencia antes y después de la llegada de AMLO, 2 de Diciembre de 2019, de Aristegui Noticias. Sitio web:

<https://aristeguinoticias.com/2510/mexico/radiografia-de-la-violencia-antes-y-despues-de-la-llegada-de-amlo/>

4 Inegi. (2019). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: Principales Resultados, 2 de Diciembre de 2019, de Inegi. Sitio web:

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf)

5 Lidia Arista. (2019). Éstos son los 10 estados más inseguros y los delitos más cometidos en México, 2 de Diciembre de 2019, de Expansión. Sitio web:

<https://politica.expansion.mx/mexico/2019/09/24/estos-son-los-10-estados-mas-inseguros-y-los-delitos-mas-cometidos-en-mexico>

6 Inegi. (2019). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: Principales Resultados, 2 de Diciembre de 2019, de Inegi. Sitio web:

[https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019\\_presentacion\\_nacional.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf)

7 Senado de la República. (2019). Robo a autotransporte y ferroviario, delitos de delincuencia organizada, 2 de Diciembre de 2019, de Senado de la República. Sitio web:

<http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/46490-robo-a-autotransporte-y-ferroviario-delitos-de-delincuencia-organizada.html>

8 Ídem

9 Lilia González. (2019). Índice de robo de camiones en México es 20 veces más alto que en EU: Daimler, 2 de Diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web:

<https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Indice-de-robo-de-camiones-en-Mexico-es-20-veces-mas-alto-que-en-EU-Daimler-20191016-0052.html>

10 Ídem

11 Ídem

12 Ídem

13 Diego Badillo; Diego Jiménez. (2019). Disputas entre delincuentes vuelven altamente peligrosas las carreteras de México, 2 de Diciembre de 2019, de El Economista. Sitio web:

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Disputas-entre-delincuentes-vuelven-altamente-peligrosas-las-carreteras-de-Mexico-20191109-0001.html>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.**

## LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de lengua incluyente, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

El suscrito, Martí Batres Guadarrama, senador de la República a la LXIV legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1 fracción II, 164 y 165 del Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de Lenguaje Incluyente, con base en la siguiente:

### Exposición de Motivos

El 6 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros.

Con el fin de trasladar el espíritu de esta trascendente reforma constitucional a toda la legislación que conforma el sistema jurídico mexicano; debe hacerse un importante esfuerzo de armonización a las normas que nos rigen.

La paridad; la equidad de género o entre los géneros; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; son principios que para que permeen más ampliamente entre nosotras y nosotros, debemos también verbalizarlos, decirlos todo el tiempo, en todos los espacios de interacción social; debemos leerlos en todo tipo de documentos; en los contratos colectivos de trabajo, por ejemplo; o en las audiencias que diriman controversias de carácter laboral; o en reglamentos internos de trabajo; en los manuales de procedimiento de cualquier instancia pública o en privado; entre otros.

Deben estar tan cotidianamente presentes en nuestros actos públicos y privados; hasta conseguir modificar nuestros actuales patrones.



Así, en el contenido de la iniciativa que someto a la consideración de este Pleno, han sido sustituidas las expresiones “el peticionario”, “el presidente”; por ejemplo, por “la persona peticionaria”, “la Presidenta o Presidente”, etcétera. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los artículos que integran la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y se modificaron los artículos respectivos, como se muestra en el cuadro comparativo que más adelante se presenta.

Conservando los bienes jurídicos tutelados y los derechos y obligaciones contenidos en la **Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas** vigente; en el documento que presento, se ha modificado sin embargo el lenguaje; se han eliminado las expresiones que discriminan, excluyen y hacen invisibles a las mujeres; sistemática, históricamente.

La indiferencia o invisibilización de una persona, de una mujer; constituye otra modalidad de violencia. De modo que modificar nuestras expresiones, las jurídicas incluidas, edifican en dos sentidos.

El lenguaje es una de las vías principales de reproducción de prejuicios y estereotipos discriminatorios. Por eso, para contribuir a una plena igualdad, debe cambiar el lenguaje y es el lenguaje jurídico, uno de los que requiere mayor transformación, pues es uno de los que se conserva generalmente en su estado más antiguo.

El artículo 1o. de la Constitución General prohíbe toda discriminación por motivos de género. En este sentido, consideramos que existen diversas frases en la Ley Federal del Trabajo, que resultan excluyentes y discriminatorias para la mujer, toda vez que su connotación lleva implícita una categoría de superioridad o sobrevaloración del sexo masculino.

Si se tiene en cuenta que la reforma constitucional en materia de paridad de género impulsará notablemente la participación de las mujeres en espacios que les estaban vedados; resulta fundamental contar con una legislación acorde con lo que en los hechos comenzará a ocurrir: la progresiva visibilidad de las mujeres mexicanas en sindicatos, cuerpos colegiados, órganos de gobierno, cargos municipales; etcétera. La importancia de la mujer en la vida implica grandes cambios en el lenguaje, lo cual nos obliga a replantear nuestros hábitos lingüísticos para que respondan a esta nueva realidad; razón por la cual, resulta necesario emplear un lenguaje incluyente

desde el texto constitucional y las leyes secundarias, que evite prácticas discriminatorias por cuestión de género.

La adecuación de los textos jurídicos que rigen nuestra convivencia social también suma a los esfuerzos de inclusión y no discriminación.

Es fundamental señalar que se han llevado a cabo diversas reformas en el Senado de la República cuyo tema central no ha sido el lenguaje incluyente; sin embargo, de forma secundaria se realizan las modificaciones en esta materia solo de ciertos artículos; pero se requiere una revisión integral de la legislación para establecer un lenguaje de género, que es precisamente, lo que pretendemos iniciar con esta iniciativa; es decir, hacer la revisión de leyes completas.

El 6 de noviembre de 2018 presenté ante el Pleno de este Senado una iniciativa de reforma al artículo 4o. constitucional, a fin de sustituir la línea que decía lo siguiente: “artículo 4o. el varón y la mujer son iguales ante la ley”, por otra que diga:

**“La mujer y el hombre son iguales ante la ley”.** Esta iniciativa fue dictaminada en conjunto. con la reforma constitucional en materia de paridad de género que aprobamos por unanimidad el 14 de mayo del año en curso y el día de hoy se encuentra vigente; sin embargo, reiteramos, se requiere una revisión integral de nuestra legislación.

Encontramos en la revisión de la **Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas**, paradójicamente; una forma muy sutil de discriminación en contra de las mujeres.

### **Derecho Comparado.**

El Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres; así como con la erradicación de la violencia de género, de conformidad con lo previsto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos instrumentos son Ley Suprema de toda la Unión.

Así, en el ámbito internacional, podemos observar países como España y Argentina, que regulan específicamente el uso y tratamiento en materia de lenguaje de género. Adicionalmente, otros países disponen de guías para las instituciones públicas, como Suiza, Canadá y Austria.

En este contexto, el lenguaje de las normas, enmarcado dentro del lenguaje jurídico, es uno de los que requiere mayor rigurosidad en su conformación, ya que tiene la función directiva de conductas que van construyendo realidades.

Tomando en cuenta lo anterior, creemos necesario avanzar en el reconocimiento de la perspectiva de género en nuestra legislación, con el objeto de aportar y poner en discusión éste y otros asuntos vinculados al lenguaje de género y el reconocimiento de su importancia.

**El presente proyecto de reforma propone un marco legal no discriminatorio por motivos de género, lo cual incluye el lenguaje y las expresiones jurídicas.**

A fin de ilustrar mejor el contenido de la presente iniciativa, presentamos el siguiente cuadro comparativo:

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS	LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
<p>Capítulo I Objeto y Fin del Mecanismo</p> <p>Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.</p> <p>Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.</p> <p>Artículo 2.- Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:</p> <p><b>Agresiones:</b> daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>Beneficiario:</b> persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley.</p> <p><b>Estudio de Evaluación de Acción Inmediata:</b> Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo y Medidas Urgentes de Protección en los casos en</p>	<p>Capítulo I Objeto y Fin del Mecanismo</p> <p>Artículo 1.- ...</p> <p>Artículo 2.- Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:</p> <p>...</p> <p><b>Persona beneficiaria:</b> persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley.</p> <p><b>Estudio de Evaluación de Acción Inmediata:</b> Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo y Medidas Urgentes de Protección en los casos en los</p>

<p>los que la vida o integridad física del <u>peticionario</u> o <u>potencial beneficiario</u> estén en peligro inminente.</p> <p><b>Estudio de Evaluación de Riesgo:</b> Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra el <u>peticionario</u> o <u>potencial beneficiario</u>.</p> <p><b>Fondo:</b> Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>La Coordinación:</b> Coordinación Ejecutiva Nacional.</p> <p><b>Mecanismo:</b> Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>Medidas de Prevención:</b> conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición.</p> <p><b>Medidas Preventivas:</b> conjunto de acciones y medios a favor del <u>beneficiario</u> para evitar la consumación de las agresiones.</p> <p><b>Medidas de Protección:</b> conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad del <u>beneficiario</u>.</p> <p><b>Medidas Urgentes de Protección:</b> conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad del <u>beneficiario</u>.</p>	<p>que la vida o integridad física de la persona <u>peticionaria</u> o la <u>persona potencialmente beneficiada</u> estén en peligro inminente.</p> <p><b>Estudio de Evaluación de Riesgo:</b> Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra la <u>persona peticionaria</u> o la <u>persona potencialmente beneficiada</u>.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p><b>Medidas Preventivas:</b> conjunto de acciones y medios a favor de la <u>persona beneficiaria</u> para evitar la consumación de las agresiones.</p> <p><b>Medidas de Protección:</b> conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la <u>persona beneficiaria</u>.</p> <p><b>Medidas Urgentes de Protección:</b> conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad de la <u>persona beneficiaria</u>.</p>
--	---

<p><b>Peticionario:</b> Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo.</p> <p><b>Periodistas:</b> Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.</p> <p><b>Persona Defensora de Derechos Humanos:</b> Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos.</p> <p><b>Procedimiento Extraordinario:</b> procedimiento que deriva en Medidas Urgentes de Protección con el fin de preservar la vida e integridad del <u>beneficiario</u>.</p> <p>Artículo 3.- El Mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de Gobernación.</p> <p>Capítulo II Junta de Gobierno</p> <p>Artículo 4.- La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p>Las resoluciones que emita la Junta de Gobierno serán obligatorias para las</p>	<p><b>Persona peticionaria:</b> Persona que solicita Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección ante el Mecanismo.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>Artículo 3.- ...</p> <p>Capítulo II Junta de Gobierno</p> <p>Artículo 4.- ...</p>
---	---

<p>autoridades federales, cuya intervención sea necesaria para satisfacer Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección previstas en esta Ley.</p> <p><b>Artículo 5.-</b> La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:</p> <p>I. <u>Un representante</u> de la Secretaría de Gobernación;</p> <p>II. <u>Un representante</u> de la Procuraduría General de la República;</p> <p>III. <u>Un representante</u> de la Secretaría de Seguridad Pública;</p> <p>IV. <u>Un representante</u> de la Secretaría de Relaciones Exteriores;</p> <p>V. <u>Un representante</u> de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y</p> <p>VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.</p> <p>Los cuatro representantes del Poder Ejecutivo Federal deberán tener un nivel mínimo de <u>Subsecretario</u> y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de <u>Visitador</u> o sus equivalentes.</p> <p>El <u>representante</u> de la Secretaría de Gobernación presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá <u>un presidente</u> sustituto para esa única ocasión de entre los miembros permanentes.</p> <p><b>Artículo 6.-</b> La Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a:</p>	<p><b>Artículo 5.-</b> La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:</p> <p>I. <u>Una persona</u> representante de la Secretaría de Gobernación;</p> <p>II. <u>Una persona</u> representante de la Procuraduría General de la República;</p> <p>III. <u>Una persona</u> representante de la Secretaría de Seguridad Pública;</p> <p>IV. <u>Una persona</u> representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;</p> <p>V. <u>Una persona</u> representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y</p> <p>VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.</p> <p>Las cuatro personas representantes del Poder Ejecutivo Federal deberán tener un nivel mínimo de <u>Subsecretaria</u> o <u>Subsecretario</u> y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de <u>Visitadora</u> o sus equivalentes.</p> <p>La <u>persona</u> representante de la Secretaría de Gobernación presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá una <u>presidenta</u> o <u>presidente</u> sustituto para esa única ocasión de entre los miembros permanentes.</p> <p><b>Artículo 6.-</b> La Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a:</p>
---	--

<p>Protección y Medidas Urgentes de Protección elaborados por la Coordinación;</p> <p>IV. Convocar <u>al peticionario o beneficiario</u> de las Medidas de Protección, a las sesiones donde se decidirá sobre su caso;</p> <p>V. Invitar a las personas o autoridades que juzgue conveniente, con el consentimiento <u>del peticionario o beneficiario</u> a las sesiones donde se discuta su caso;</p> <p>VI. Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo;</p> <p>VII. Revisar y aprobar el plan anual de trabajo elaborado por la Coordinación;</p> <p>VIII. Resolver las inconformidades a que se refiere el Capítulo XI de esta Ley;</p> <p>IX. Presentar públicamente informes anuales sobre la situación nacional en materia de seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con datos desagregados y con perspectiva de género;</p>	<p>IV. Convocar a la <u>persona peticionaria</u> o la <u>persona beneficiaria</u> de las Medidas de Protección, a las sesiones donde se decidirá sobre su caso;</p> <p>V. Invitar a las personas o autoridades que juzgue conveniente, con el consentimiento de la <u>persona peticionaria</u> o la <u>persona beneficiaria</u> a las sesiones donde se discuta su caso;</p> <p>VI. ...</p> <p>VII. ...</p> <p>VIII. ...</p> <p>IX. ...</p>
---	---

<p>I. <u>Un representante</u> de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;</p> <p>II. <u>Un representante</u> de la Conferencia Nacional de Gobernadores;</p> <p>III. <u>Un representante</u> del Poder Judicial de la Federación;</p> <p>IV. <u>Al Presidente</u> de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y</p> <p>V. <u>Al Presidente</u> de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.</p> <p><b>Artículo 7.-</b> La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente una vez al mes hasta agotar todos los temas programados para esa sesión y deberá contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones serán tomadas mediante un proceso deliberativo, transparente y por mayoría de votos.</p> <p><b>Artículo 8.-</b> La Junta de Gobierno contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Determinar, decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación;</p> <p>II. Evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Urgentes de Protección, a partir de la información elaborada por las unidades de la Coordinación;</p> <p>III. Aprobar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de</p>	<p>I. <u>Una persona</u> representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;</p> <p>II. <u>Una persona</u> representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores;</p> <p>III. <u>Una persona</u> representante del Poder Judicial de la Federación;</p> <p>IV. A la <u>Presidenta</u> o <u>Presidente</u> de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y</p> <p>V. A la <u>Presidenta</u> o <u>Presidente</u> de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.</p> <p><b>Artículo 7.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 8.-</b> La Junta de Gobierno contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>III. ...</p>
---	--

<p>X. Proponer e impulsar, a través de la Coordinación, políticas públicas y reformas legislativas relacionadas con el objeto de esta Ley;</p> <p>XI. Emitir las convocatorias públicas correspondientes a solicitud del Consejo Consultivo para la elección de sus miembros;</p> <p>XII. Solicitar al Consejo Consultivo su opinión o asesoría en todo lo relativo al objeto de esta Ley;</p> <p>XIII. Conocer las recomendaciones del Consejo Consultivo sobre los programas y actividades que realicen la Coordinación y, fundamentar y motivar su decisión;</p> <p>XIV. Recibir y difundir el informe anual de actividades del Consejo Consultivo;</p> <p>XV. Aprobar el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal de la Coordinación;</p> <p>XVI. Aprobar los perfiles para la designación de los integrantes de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación, y</p> <p>XVII. Aprobar las reglas de operación y el presupuesto operativo del Fondo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo III</b> <b>Consejo Consultivo</b></p> <p><b>Artículo 9.-</b> El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeras o consejeros, uno de ellos será el</p>	<p>X. ...</p> <p>XI. ...</p> <p>XII. ...</p> <p>XIII. ...</p> <p>XIV. ...</p> <p>XV. ...</p> <p>XVI. Aprobar los perfiles para la designación de las y los integrantes de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación, y</p> <p>XVII. ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo III</b> <b>Consejo Consultivo</b></p> <p><b>Artículo 9.-</b> El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeras o consejeros, de entre los cuales se elegirá</p>
--	--

<p><u>presidente</u> por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo. En ausencia del <u>presidente</u>, el Consejo elegirá a un <u>presidente</u> interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.</p> <p><b>Artículo 10.-</b> Por cada <u>consejero</u> habrá un suplente. La suplencia sólo procederá en caso de ausencia definitiva del titular y en los casos previstos en la guía de procedimientos del Consejo Consultivo.</p> <p><b>Artículo 11.-</b> Los <u>consejeros</u> deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodistas, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.</p> <p><b>Artículo 12.-</b> El Consejo Consultivo elegirá a sus miembros a través de una convocatoria pública emitida por la Junta de Gobierno.</p> <p><b>Artículo 13.-</b> Los <u>consejeros</u> nombrarán de entre sus miembros a cuatro de ellos para formar parte de la Junta de Gobierno, de los cuales dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos y dos del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.</p> <p><b>Artículo 14.-</b> Los <u>consejeros</u> no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su participación tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo, ya que su carácter es honorífico.</p>	<p>un <u>presidente</u> o <u>presidenta</u> por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo. En ausencia este, el Consejo elegirá a un <u>presidente</u> o <u>presidenta</u> interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.</p> <p><b>Artículo 10.-</b> Por cada <u>consejero</u> o <u>consejera</u> habrá un suplente. La suplencia sólo procederá en caso de ausencia definitiva del titular y en los casos previstos en la guía de procedimientos del Consejo Consultivo.</p> <p><b>Artículo 11.-</b> Las y los <u>consejeros</u> deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodistas, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.</p> <p><b>Artículo 12.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 13.-</b> Las y los <u>consejeros</u> nombrarán de entre sus miembros a cuatro personas para formar parte de la Junta de Gobierno, de las cuales dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos y dos del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.</p> <p><b>Artículo 14.-</b> Las y los <u>consejeros</u> no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su participación tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo, ya que su carácter es honorífico.</p>
--	---

<p>VIII. Realizar labores de difusión acerca de la operación del Mecanismo y de cómo solicitar las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección;</p> <p>IX. Presentar ante la Junta de Gobierno su informe anual de las actividades, y</p> <p>X. Elaborar y aprobar la guía de procedimientos del Consejo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo IV</b> <b>La Coordinación Ejecutiva Nacional</b></p> <p><b>Artículo 17.-</b> La Coordinación es el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo y estará integrada por <u>los representantes</u> de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida;</li> <li>II. La Unidad de Evaluación de Riesgos, y</li> <li>III. La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.</li> </ol> <p>Un <u>funcionario</u> de la Secretaría de Gobernación, con rango inmediato inferior a <u>Subsecretario</u> o equivalente, fungirá como <u>Coordinador</u> Ejecutivo Nacional.</p> <p><b>Artículo 18.-</b> La Coordinación contará con las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Recibir y compilar la información generada por las Unidades a su cargo y remitirla a la Junta de</li> </ol>	<p>VIII. ...</p> <p>IX. ...</p> <p>X. ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo IV</b> <b>La Coordinación Ejecutiva Nacional</b></p> <p><b>Artículo 17.-</b> La Coordinación es el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo y estará integrada por las <u>personas representativas</u> de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. ...</li> <li>II. ...</li> <li>III. ...</li> </ol> <p>Una <u>persona funcionaria</u> de la Secretaría de Gobernación, con rango inmediato inferior a <u>Subsecretario</u> o <u>Subsecretario</u> o equivalente, fungirá como <u>Coordinador</u> Ejecutivo Nacional.</p> <p><b>Artículo 18.-</b> ...</p>
--	---

<p><b>Artículo 15.-</b> Los <u>consejeros</u> se mantendrán en su encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo consecutivo.</p> <p><b>Artículo 16.-</b> El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno;</li> <li>II. Formular a la Junta de Gobierno recomendaciones sobre los programas y actividades que realice la Coordinación;</li> <li>III. Colaborar con la Coordinación en el diseño de su plan anual de trabajo;</li> <li>IV. Remitir a la Junta de Gobierno inconformidades presentadas por <u>peticionarios</u> o <u>beneficiarios</u> sobre implementación de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;</li> <li>V. Comisionar Estudios de Evaluación de Riesgo independiente solicitados por la Junta de Gobierno para resolver las inconformidades presentadas;</li> <li>VI. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de esta Ley;</li> <li>VII. Participar en eventos nacionales o internacionales para intercambiar experiencias e información sobre temas relacionados con la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;</li> </ol>	<p><b>Artículo 15.-</b> Las y los <u>consejeros</u> se mantendrán en su encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección por un periodo consecutivo.</p> <p><b>Artículo 16.-</b> El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. ...</li> <li>II. ...</li> <li>III. ...</li> <li>IV. Remitir a la Junta de Gobierno inconformidades presentadas por <u>personas peticionarias</u> o <u>personas beneficiarias</u> sobre implementación de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;</li> <li>V. ...</li> <li>VI. ...</li> <li>VII. ...</li> </ol>
--	--

<p>Gobierno con al menos cinco días naturales previo a su reunión;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>II. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades encargadas de su ejecución;</li> <li>III. Administrar los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de esta Ley;</li> <li>IV. Proveer a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo los recursos para el desempeño de sus funciones;</li> <li>V. Elaborar y proponer, para su aprobación a la Junta de Gobierno, los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;</li> <li>VI. Facilitar y promover protocolos, manuales y en general instrumentos que contengan las mejores prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de esta Ley a entidades federativas, dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos;</li> <li>VII. Instrumentar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección;</li> <li>VIII. Diseñar, con la colaboración del Consejo Consultivo, su plan anual de trabajo;</li> <li>IX. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del Mecanismo;</li> </ol>	
---	--

<p>X. Dar seguimiento e implementar las decisiones de la Junta de Gobierno, y</p> <p>XI. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno su informe anual de actividades incluyendo su ejercicio presupuestal.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo V</b> <b>Las Unidades Auxiliares</b></p> <p><b>Artículo 19.-</b> La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida es un órgano técnico y auxiliar de la Coordinación para la recepción de las solicitudes de incorporación al Mecanismo, la definición de aquellos casos que serán atendidos por medio del procedimiento extraordinario definido en esta Ley y contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Recibir las solicitudes de incorporación al Mecanismo;</p> <p>II. Definir si los casos que se reciben son de procedimiento extraordinario u ordinario;</p> <p>III. Solicitar a la Unidad de Evaluación de Riesgos la elaboración del Estudio de Evaluación de Riesgo;</p> <p>IV. Realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata;</p> <p>V. Emitir e implementar de manera inmediata las Medidas Urgentes de Protección;</p> <p>VI. Informar a la Coordinación sobre las Medidas Urgentes de Protección implementadas;</p> <p>VII. Elaborar, evaluar y actualizar periódicamente el protocolo para la implementación de Medidas Urgentes de Protección;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo V</b> <b>Las Unidades Auxiliares</b></p> <p><b>Artículo 19.-</b> ...</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>III. ...</p> <p>IV. ...</p> <p>V. ...</p> <p>VI. ...</p> <p>VII. ...</p>
---	--

<p>personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección, al menos una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión.</p> <p><b>Artículo 23.-</b> La Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis es un órgano auxiliar de carácter técnico y científico de La Coordinación y contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Proponer Medidas de Prevención;</p> <p>II. Realizar el monitoreo nacional de las Agresiones con el objeto de recopilar, sistematizar la información desagregada en una base de datos y elaborar reportes mensuales;</p> <p>III. Identificar los patrones de Agresiones y elaborar mapas de riesgos;</p> <p>IV. Evaluar la eficacia de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección implementadas, y</p> <p>V. Las demás que prevea esta Ley.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo VI</b> <b>Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo</b></p> <p><b>Artículo 24.-</b> Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de:</p> <p>I. Persona Defensora de Derechos Humanos o Periodista,</p> <p>II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodista;</p>	<p><b>Artículo 23.-</b> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo VI</b> <b>Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo</b></p> <p><b>Artículo 24.-</b> ...</p>
---	---

<p>VIII. Auxiliar al <u>peticionario</u> o <u>beneficiario</u> en la presentación de quejas o denuncias ante las autoridades correspondientes, y</p> <p>IX. Las demás que prevea esta Ley.</p> <p><b>Artículo 20.-</b> La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por un <u>representante</u> de la Secretaría de Gobernación, un <u>representante</u> de la Procuraduría General de la República y un <u>representante</u> de la Secretaría de Seguridad Pública, <u>todos</u> con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.</p> <p><b>Artículo 21.-</b> La Unidad de Evaluación de Riesgos es el órgano auxiliar, de carácter técnico y científico de la Coordinación que evalúa los riesgos, define las Medidas Preventivas o de Protección, así como su temporalidad y contará con las siguientes atribuciones:</p> <p>I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;</p> <p>II. Definir las Medidas Preventivas o las Medidas de Protección;</p> <p>III. Dar seguimiento periódico a la implementación de las Medidas Preventivas o de Protección para, posteriormente, recomendar su continuidad, adecuación o conclusión, y</p> <p>IV. Las demás que prevea esta Ley.</p> <p><b>Artículo 22.-</b> La Unidad de Evaluación de Riesgos se integra por al menos cinco</p>	<p>VIII. Auxiliar a la persona <u>peticionaria</u> o <u>persona beneficiaria</u> en la presentación de quejas o denuncias ante las autoridades correspondientes, y</p> <p>IX. Las demás que prevea esta Ley.</p> <p><b>Artículo 20.-</b> La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá serlo en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por una <u>persona representante</u> de la Secretaría de Gobernación, una <u>persona representante</u> de la Procuraduría General de la República y una <u>persona representante</u> de la Secretaría de Seguridad Pública, <u>todas</u> con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.</p> <p><b>Artículo 21.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 22.-</b> ...</p>
---	---

<p>III. Personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización, o movimiento social;</p> <p>IV. Los bienes de la persona, el grupo, organización, o movimiento social, y</p> <p>V. Las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo.</p> <p><b>Artículo 25.-</b> La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida recibirá las solicitudes de incorporación al Mecanismo, verificará que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, y en su caso, determinará el tipo de procedimiento. Solamente dará trámite a las solicitudes que cuenten con el consentimiento del <u>potencial beneficiario</u>, salvo que éste se encuentre <u>impedido</u> por causa grave. Una vez que desaparezca el impedimento, <u>el beneficiario</u> deberá otorgar su consentimiento.</p> <p><b>Artículo 26.-</b> En el supuesto que el <u>peticionario</u> declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el artículo 24 está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.</p> <p>La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida procederá a:</p> <p>I. Emitir, en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de la solicitud, las Medidas Urgentes de Protección;</p> <p>II. Implementar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a 9 horas, las Medidas Urgentes de Protección;</p> <p>III. Realizar simultáneamente a la emisión de las Medidas Urgentes</p>	<p>III. ...</p> <p><b>Artículo 25.-</b> La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida recibirá las solicitudes de incorporación al Mecanismo, verificará que cumplan con los requisitos previstos en esta Ley, y en su caso, determinará el tipo de procedimiento. Solamente dará trámite a las solicitudes que cuenten con el consentimiento de la <u>persona potencialmente beneficiaria</u>, salvo que ésta se encuentre <u>impedida</u> por causa grave. Una vez que desaparezca el impedimento, la <u>persona beneficiaria</u> deberá otorgar su consentimiento.</p> <p><b>Artículo 26.-</b> En el supuesto que la <u>persona peticionaria</u> declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el artículo 24 está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.</p> <p>...</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>III. ...</p>
--	--

<p>de Protección, un Estudio de Evaluación de Acción Inmediata;</p> <p>IV. Informar al Coordinador Ejecutivo, una vez emitidas, sobre las Medidas Urgentes de Protección implementadas, y</p> <p>V. Remitir a la Unidad de Evaluación de Riesgo el expediente del caso para el inicio del procedimiento ordinario.</p> <p><b>Artículo 27.-</b> En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento ordinario y la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida la remitirá inmediatamente a su recepción a la Unidad de Evaluación de Riesgos.</p> <p>La Unidad de Evaluación de Riesgos, en un término de diez días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud, procederá a:</p> <p>I. Elaborar el Estudio de Evaluación de Riesgo;</p> <p>II. Determinar el nivel de riesgo y Beneficiarios, y</p> <p>III. Definir las Medidas de Protección.</p> <p><b>Artículo 28.-</b> El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata se realizarán de conformidad con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas.</p> <p><b>Capítulo VII</b> <b>Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección</b></p> <p><b>Artículo 29.-</b> Una vez definidas las medidas por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la Junta de Gobierno decretará las Medidas Preventivas o Medidas de Protección y la Coordinación procederá a:</p>	<p>IV. ...</p> <p>V. ...</p> <p><b>Artículo 27.-</b> ...</p> <p>...</p> <p>I. ...</p> <p>II. Determinar el nivel de riesgo y Personas Beneficiarias, y</p> <p>III. ...</p> <p><b>Artículo 28.-</b> ...</p> <p><b>Capítulo VII</b> <b>Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección</b></p> <p><b>Artículo 29.-</b> ...</p>
---	--

<p>cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles y V) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.</p> <p><b>Artículo 33.-</b> Las Medidas de Protección incluyen: I) Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; II) Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; III) Chalecos antibalas; IV) Detector de metales; V) Autos blindados; y VI) Las demás que se requieran.</p> <p><b>Artículo 34.-</b> Las Medidas Preventivas incluyen: I) Instructivos, II) Manuales, III) Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos, IV) Acompañamiento de observadores de derechos humanos y periodistas; y VI) Las demás que se requieran.</p> <p><b>Artículo 35.-</b> Las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección estarán sujetas a evaluación periódica por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgo.</p> <p><b>Artículo 36.-</b> Se considera que existe un uso indebido de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección por parte del beneficiario cuando:</p> <p>I. Abandone, evada o impida las medidas;</p> <p>II. Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por las unidades del Mecanismo;</p> <p>III. Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;</p> <p>IV. Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén relacionadas con las medidas;</p>	<p>cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles y V) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de las personas beneficiarias.</p> <p><b>Artículo 33.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 34.-</b> Las Medidas Preventivas incluyen: I) Instructivos, II) Manuales, III) Cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos, IV) Acompañamiento de personas observadoras de derechos humanos y periodistas; y VI) Las demás que se requieran.</p> <p><b>Artículo 35.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 36.-</b> Se considera que existe un uso indebido de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección por parte de la persona beneficiaria cuando:</p> <p>I. ...</p> <p>II. ...</p> <p>III. ...</p> <p>IV. ...</p>
--	--

<p>I. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 72 hrs;</p> <p>II. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección decretadas por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a 30 días naturales;</p> <p>III. Dar seguimiento al estado de implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección e informar a la Junta de Gobierno sobre sus avances.</p> <p><b>Artículo 30.-</b> Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas. En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.</p> <p><b>Artículo 31.-</b> Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección se deberán extender a aquellas personas que determine el Estudio de Evaluación de Riesgo o el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.</p> <p>Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo con los beneficiarios.</p> <p><b>Artículo 32.-</b> Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: I) Evacuación; II) Reubicación Temporal; III) Escortas de</p>	<p><b>Artículo 30.-</b> Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas. En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de las personas beneficiarias, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.</p> <p><b>Artículo 31.-</b> ...</p> <p>Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo con las personas beneficiarias.</p> <p><b>Artículo 32.-</b> Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: I) Evacuación; II) Reubicación Temporal; III) Escortas de</p>
---	---

<p>V. Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su esquema de protección;</p> <p>VI. Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de las unidades correspondientes del Mecanismo;</p> <p>VII. Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección;</p> <p>VIII. Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados para su protección.</p> <p><b>Artículo 37.-</b> Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección podrán ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando el beneficiario realice un uso indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada.</p> <p><b>Artículo 38.-</b> El beneficiario podrá en todo momento acudir ante la Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.</p> <p><b>Artículo 39.-</b> Las Medidas Preventivas y Medidas de Protección otorgadas podrán ser ampliadas o disminuidas como resultado de las revisiones periódicas.</p> <p><b>Artículo 40.-</b> El beneficiario se podrá separar del Mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno.</p>	<p>V. ...</p> <p>VI. ...</p> <p>VII. ...</p> <p>VIII. ...</p> <p><b>Artículo 37.-</b> Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección podrán ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando la persona beneficiaria realice un uso indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada.</p> <p><b>Artículo 38.-</b> La persona beneficiaria podrá en todo momento acudir ante la Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.</p> <p><b>Artículo 39.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 40.-</b> La persona beneficiaria se podrá separar del Mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno.</p>
--	---

<p style="text-align: center;"><b>Capítulo VIII</b> <b>Medidas de Prevención</b></p> <p><b>Artículo 41.-</b> La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención.</p> <p><b>Artículo 42.-</b> La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias recopilarán y analizarán toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>Artículo 43.-</b> Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>Artículo 44.-</b> La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.</p> <p><b>Artículo 45.-</b> La Federación promoverá las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo IX</b> <b>Convenios de Cooperación</b></p> <p><b>Artículo 46.-</b> La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capítulo VIII</b> <b>Medidas de Prevención</b></p> <p><b>Artículo 41.-...</b></p> <p><b>Artículo 42.-...</b></p> <p><b>Artículo 43.-...</b></p> <p><b>Artículo 44.-...</b></p> <p><b>Artículo 45.- ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo IX</b> <b>Convenios de Cooperación</b></p> <p><b>Artículo 46.- ...</b></p>
---	--

<p>de la Federación, se crea el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>Artículo 49.-</b> Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección y la realización de los demás actos que establezca la Ley para la implementación del Mecanismo, tales como evaluaciones independientes.</p> <p><b>Artículo 50.-</b> El Fondo operará a través de un fideicomiso público, el cual se registrará por las disposiciones jurídicas aplicables.</p> <p><b>Artículo 51.-</b> Los recursos del Fondo se integrarán por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. La cantidad que el Gobierno Federal aporte inicialmente, así como las aportaciones que en su caso realice en términos de las disposiciones aplicables;</li> <li>II. Los recursos anuales que señale el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros fondos públicos;</li> <li>III. Los donativos que hicieren a su favor personas físicas o morales sin que por ello adquieran algún derecho en el fideicomiso;</li> <li>IV. Los bienes que le transfiera a título gratuito el gobierno federal o las entidades federativas, y</li> <li>V. Los demás bienes que por cualquier título legal adquiera el fideicomiso para o como consecuencia del cumplimiento de sus fines.</li> </ol> <p><b>Artículo 52.-</b> El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por el Secretario de Gobernación e integrado</p>	<p><b>Artículo 49.- ...</b></p> <p><b>Artículo 50.- ...</b></p> <p><b>Artículo 51.- ...</b></p> <p><b>Artículo 52.-</b> El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por la Secretaría o Secretario de Gobernación e integrado por</p>
--	--

<p>Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.</p> <p><b>Artículo 47.-</b> Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. La designación de representantes que funjan como enlaces para garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley;</li> <li>II. El intercambio de información de manera oportuna y de experiencias técnicas del Mecanismo, así como para proporcionar capacitación;</li> <li>III. El seguimiento puntual a las medidas previstas en esta Ley en sus respectivas entidades;</li> <li>IV. La promoción del estudio, análisis, investigación y desarrollo de estrategias, acciones, sistemas y metodologías que incorporen las mejores prácticas de prevención y protección;</li> <li>V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, y</li> <li>VI. Las demás que las partes convengan.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo X</b> <b>Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas</b></p> <p><b>Artículo 48.-</b> Para cumplir el objeto de esta Ley y con el propósito de obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos</p>	<p><b>Artículo 47.- ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo X</b> <b>Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas</b></p> <p><b>Artículo 48.- ...</b></p>
--	---

<p>por un representante de: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p> <p><b>Artículo 53.-</b> El Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario público y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del comité técnico y tendrán las atribuciones que les confiere la Ley.</p> <p><b>Artículo 54.-</b> El Comité Técnico del Fondo someterá a la aprobación de la Junta de Gobierno sus reglas de operación y su presupuesto operativo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo XI</b> <b>Inconformidades</b></p> <p><b>Artículo 55.-</b> La inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la Junta de Gobierno y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan al peticionario o beneficiario y las pruebas con que se cuenta.</p> <p><b>Artículo 56.-</b> La inconformidad procede en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Contra resoluciones de la Junta de Gobierno, la Coordinación y las unidades respectivas relacionadas con la imposición o negación de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección;</li> <li>II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección por parte la autoridad, y</li> </ol>	<p>una persona representante de: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.</p> <p><b>Artículo 53.-</b> El Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario o comisaria público y una persona suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del comité técnico y tendrán las atribuciones que les confiere la Ley.</p> <p><b>Artículo 54.- ...</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capítulo XI</b> <b>Inconformidades</b></p> <p><b>Artículo 55.-</b> La inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la Junta de Gobierno y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan a la persona peticionaria o persona beneficiaria y las pruebas con que se cuenta.</p> <p><b>Artículo 56.-</b> La inconformidad procede en:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. ...</li> <li>II. ...</li> </ol>
--	---

<p>III. Caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones de la Junta de Gobierno relacionadas con las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección otorgadas al <u>beneficiario</u>.</p> <p><b>Artículo 57.-</b> Para que la Junta de Gobierno admita la inconformidad se requiere:</p> <p>I. Que lo suscriba la persona o personas que hayan tenido el carácter <u>peticionario</u> o <u>beneficiario</u>, y</p> <p>II. Que se presente en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno o de la respectiva autoridad, o de que <u>el peticionario o beneficiario</u> hubiese tenido noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección.</p> <p><b>Artículo 58.-</b> Para resolver la inconformidad:</p> <p>I. La Junta de Gobierno, a través del Coordinador Ejecutivo Nacional, solicitará a la Unidad de Evaluación de Riesgos y Reacción Rápida un nuevo estudio de evaluación de riesgo en el cual de respuesta a la inconformidad planteada;</p> <p>II. Si la inconformidad persiste, la Junta de Gobierno, a través del Coordinador Ejecutivo Nacional, solicitará al Consejo Consultivo que comisione un Estudio de Evaluación de Riesgo independiente para el análisis del caso.</p>	<p>III. Caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones de la Junta de Gobierno relacionadas con las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección otorgadas a la <u>persona beneficiaria</u>.</p> <p><b>Artículo 57.-</b> Para que la Junta de Gobierno admita la inconformidad se requiere:</p> <p>I. ....</p> <p>II. Que se presente en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno o de la respectiva autoridad, o de que la <u>persona peticionaria o persona beneficiaria</u> hubiese tenido noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección.</p> <p><b>Artículo 58.-</b> ...</p>
--	--

<p>I. Que lo presente la persona o personas que hayan tenido el carácter <u>peticionario</u> o <u>beneficiario</u>, en un plazo de hasta diez días naturales, contados a partir de la notificación del acuerdo de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida.</p> <p><b>Artículo 62.-</b> La Coordinación resolverá, en un plazo máximo de hasta doce horas, para confirmar, revocar o modificar la decisión de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida.</p> <p><b>Artículo 63.-</b> El acceso y la difusión de la información relacionada con esta Ley, será de conformidad a lo que disponga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.</p> <p>Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección otorgadas a través del Mecanismo se considerarán información reservada.</p> <p>Los recursos federales que se transfieran, con motivo del cumplimiento de esta Ley, a las Entidades Federativas, así como los provenientes del Fondo se sujetarán a las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los recursos públicos.</p> <p><b>Capítulo XII</b> Transparencia y Acceso a la Información</p> <p><b>Artículo 64.-</b> Los informes a los que se refieren los artículos 8, 16 y 18 serán de carácter público.</p> <p><b>Capítulo XIII</b> Sanciones</p>	<p><b>Artículo 62.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 63.-</b> ...</p> <p><b>Capítulo XII</b> Transparencia y Acceso a la Información</p> <p><b>Artículo 64.-</b> ...</p> <p><b>Capítulo XIII</b> Sanciones</p>
--	--

<p>III. El Consejo emitirá su resolución en un plazo máximo de quince días naturales después de recibidos los resultados del Estudio de Evaluación de Riesgo independiente;</p> <p>IV. El Consejo inmediatamente remitirá su resolución, junto con el Estudio de Evaluación de Riesgo independiente, a la Junta de Gobierno, quien en su próxima sesión resolverá la inconformidad.</p> <p><b>Artículo 59.-</b> En el caso del procedimiento extraordinario, la inconformidad se presentará ante la Coordinación y deberá contener una descripción concreta de los riesgos o posibles agravios que se generan al <u>peticionario o beneficiario</u>.</p> <p><b>Artículo 60.-</b> La inconformidad procede en:</p> <p>I. Contra resoluciones de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida relacionadas con el acceso al procedimiento extraordinario o la imposición o negación de las Medidas Urgentes de Protección;</p> <p>II. Contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de las Medidas Urgentes de Protección, y</p> <p>III. Caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, relacionadas con las Medidas Urgentes de Protección.</p> <p><b>Artículo 61.-</b> Para que la Coordinación admita la inconformidad se requiere:</p>	<p><b>Artículo 59.-</b> En el caso del procedimiento extraordinario, la inconformidad se presentará ante la Coordinación y deberá contener una descripción concreta de los riesgos o posibles agravios que se generan a la <u>persona peticionaria o persona beneficiaria</u>.</p> <p><b>Artículo 60.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 61.-</b> ...</p>
--	--

<p><b>Artículo 65.-</b> Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley se sancionaran conforme a lo que establezca la legislación aplicable, con independencia de las del orden civil o penal que procedan.</p> <p><b>Artículo 66.-</b> Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el <u>servidor público</u> o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, <u>peticionario y beneficiario</u> referidos en esta Ley.</p> <p>Por la comisión de este delito se impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.</p> <p>Si sólo se realizara en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, se aplicará la mitad de la sanción.</p> <p><b>Artículo 67.-</b> Al <u>Servidor Público</u> que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, <u>peticionario y beneficiario</u>, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para</p>	<p><b>Artículo 65.-</b> ...</p> <p><b>Artículo 66.-</b> Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la <u>servidora o servidor público</u> o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, <u>persona peticionaria y persona beneficiaria</u> referidos en esta Ley.</p> <p><b>Artículo 67.-</b> A la <u>Servidora o Servidor Público</u> que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, <u>persona peticionaria y persona beneficiaria</u>, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para</p>
--	--



desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.	desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.
--	--

Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

**Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de Lenguaje Incluyente.**

**Único.** Se reforman los artículos 2 párrafo segundo, tercero, cuarto, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo; 5 primer párrafo fracciones I, II, III, IV y V, segundo y tercer párrafos; 6 fracción I, II, III, IV y V; 8 fracción IV, V y XVI; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16 fracción IV; 17 párrafos primero y segundo; 19 fracción VIII; 20; 25; 26 párrafo primero; 27 párrafo segundo fracción II; 30; 31 párrafo segundo; 32; 33; 34; 36 párrafo primero; 37; 38; 40; 52; 53; 55; 56 fracción III; 57 fracción II; 59; 66 párrafo primero y 67, todos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

**Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas**

**Capítulo I  
Objeto y Fin del Mecanismo**

**Artículo 1.** . . .

**Artículo 2.** Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

. . .

**Persona beneficiaria:** Persona a la que se le otorgan las medidas preventivas, medidas de protección o medidas urgentes de protección a que se refiere esta Ley.

**Estudio de evaluación de acción inmediata:** Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo y medidas urgentes de protección en los casos en los que la vida o integridad física **de la persona peticionaria o la persona potencialmente beneficiada** estén en peligro inminente.

**Estudio de evaluación de riesgo:** Análisis de factores para determinar el nivel de riesgo en que se encuentra la persona peticionaria o **la persona potencialmente beneficiada.**

...

...

...

...

**Medidas preventivas:** Conjunto de acciones y medios a favor de la persona beneficiaria para evitar la consumación de las agresiones.

**Medidas de protección:** Conjunto de acciones y medios de seguridad para enfrentar el riesgo y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad **de la persona beneficiaria.**

**Medidas urgentes de protección:** Conjunto de acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad y la libertad **de la persona beneficiaria.**

**Persona peticionaria:** Persona que solicita medidas preventivas, medidas de protección o medidas urgentes de protección ante el mecanismo.

...

...

...

**Artículo 3.** . . .

**Capítulo II  
Junta de Gobierno**

**Artículo 4.** . . .

**Artículo 5.** La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán:

I. **Una persona** representante de la Secretaría de Gobernación;

II. **Una persona** representante de la Procuraduría General de la República;

III. **Una persona** representante de la Secretaría de Seguridad Pública;

IV. **Una persona** representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

V. **Una persona** representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

VI. Cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros.

Las cuatro personas representantes del Poder Ejecutivo Federal deberán tener un nivel mínimo de **subsecretaria** o subsecretario y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de visitadora o visitador o sus equivalentes.

**La persona representante** de la Secretaría de Gobernación presidirá la Junta de Gobierno y en aquellos casos en que no sea posible su presencia se elegirá **una presidenta o presidente** sustituto para esa única ocasión de entre los miembros permanentes.

**Artículo 6.** La Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a:

I. **Una persona** representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

II. **Una persona** representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores;

III. **Una persona** representante del Poder Judicial de la Federación;

IV. **A la Presidenta o Presidente** de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, y

V. **A la Presidenta o Presidente** de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

**Artículo 7.** . . .

**Artículo 8.** La Junta de Gobierno contará con las siguientes atribuciones:

I. . . .

II. . . .

III. . . .

IV. Convocar a **la persona peticionaria o la persona beneficiaria** de las medidas de protección, a las sesiones donde se decidirá sobre su caso;

V. Invitar a las personas o autoridades que juzgue conveniente, con el consentimiento **de la persona peticionaria o la persona beneficiaria** a las sesiones donde se discuta su caso;

VI. . . .

VII. . . .

VIII. . . .

IX. . . .

X. . . .

XI. . . .

XII. . . .

XIII. . . .

XIV. . . .

XV. . . .

XVI. Aprobar los perfiles para la designación de **las y los** integrantes de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, de la Unidad de Evaluación de Riesgo y de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Evaluación, y

XVII. . . .

### Capítulo III Consejo Consultivo

**Artículo 9.** El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeras o consejeros, de entre los cuales se elegirá un presidente o presidenta por un periodo de dos años y se elegirá por mayoría simple por el mismo Consejo. En ausencia este, el Consejo elegirá a un presidente o presidenta interino por el tiempo que dure la ausencia o hasta que culmine el periodo. En la integración del Consejo se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

**Artículo 10.** Por cada consejero o consejera habrá un suplente. La suplencia sólo procederá en caso de ausencia definitiva del titular y en los casos previstos en la guía de procedimientos del Consejo Consultivo.

**Artículo 11.** Las y los consejeros deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos o Periodistas, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.

**Artículo 12.** . . .

**Artículo 13.** Las y los consejeros nombrarán de entre sus miembros a cuatro personas para formar parte de la Junta de Gobierno, de las cuales dos serán personas expertas en la defensa de los derechos humanos y dos del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

**Artículo 14.** Las y los consejeros no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su participación tanto en la Junta de Gobierno como en el Consejo, ya que su carácter es honorífico.

**Artículo 15.** Las y los consejeros se mantendrán en su encargo por un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección por un período consecutivo.

**Artículo 16.** El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. . . .

II. . . .

III. . . .

IV. Remitir a la Junta de Gobierno inconformidades presentadas por **personas peticionarias o personas beneficiarias** sobre implementación de medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección;

V. . . .

VI. . . .

VII. . . .

VIII. . . .

IX. . . .

X. . . .

#### Capítulo IV

#### La Coordinación Ejecutiva Nacional

**Artículo 17.** La Coordinación es el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del mecanismo y estará integrada por las personas representantes de:

I. . . .

II. . . .

III. . . .

Una persona funcionaria de la Secretaría de Gobernación, con rango inmediato inferior a subsecretaria o subsecretario o equivalente, fungirá como coordinadora o coordinador ejecutivo nacional.

**Artículo 18.** . . .

#### Capítulo V

#### Las Unidades Auxiliares

**Artículo 19.** . . .

I. . . .

II. . . .

III. . . .

IV. . . .

V. . . .

VI. . . .

VII. . . .

VIII. Auxiliar a la **persona peticionaria o persona beneficiaria** en la presentación de quejas o denuncias ante las autoridades correspondientes, y

IX. Las demás que prevea esta ley.

**Artículo 20.** La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida se integra por al menos cinco personas expertas en materia de evaluación de riesgo y protección. Una de ellas deberá ser en la defensa de derechos humanos y otra del ejercicio del periodismo y libertad de expresión. Así mismo, se conforma por **una persona representante** de la Secretaría de Gobernación, **una persona representante** de la Procuraduría General de la República y **una persona representante** de la Secretaría de Seguridad Pública, todas con atribuciones para la implementación de las Medidas Urgentes de Protección.

**Artículo 21.** ...

**Artículo 22.** ...

**Artículo 23.** ...

#### Capítulo VI

#### Solicitud de Protección, Evaluación y Determinación del Riesgo

**Artículo 24.** ...

**Artículo 25.** La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida recibirá las solicitudes de incorporación al mecanismo, verificará que cumplan con los requisitos previstos en esta ley, y en su caso, determinará el tipo de procedimiento. Solamente dará trámite a las solicitudes que cuenten con el consentimiento de la **persona potencialmente beneficiaria**, salvo que ésta se encuentre **impedida** por causa grave. Una vez que desaparezca el impedimento, **la persona beneficiaria** deberá otorgar su consentimiento.

**Artículo 26.** En el supuesto que **la persona peticionaria** declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el artículo 24 está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario.

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

**Artículo 27.** ...

....

I. ...

II. Determinar el nivel de riesgo y **Personas Beneficiarias**, y

III. ...

**Artículo 28.** ...

#### Capítulo VII

#### Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección

**Artículo 29.** ...

**Artículo 30.** Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas. En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades **de las personas beneficiarias**, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

**Artículo 31.** ...

Dichas medidas se analizarán, determinarán, implementarán y evaluarán de común acuerdo con **las personas beneficiarias**.

**Artículo 32.** Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: I) Evacuación; II) Reubicación Temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles y V) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de **las personas beneficiarias**.

**Artículo 33.** ...

**Artículo 34.** Las Medidas Preventivas incluyen: I) Instructivos, II) Manuales, III) Cursos de auto protección tanto individuales como colectivos, IV) Acompañamiento de

personas observadoras de derechos humanos y periodistas; y VI) Las demás que se requieran.

**Artículo 35.** ...

**Artículo 36.** Se considera que existe uso indebido de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección por parte de la **persona beneficiaria** cuando:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

**Artículo 37.** Las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección podrán ser retiradas por decisión de la Junta de Gobierno cuando **la persona beneficiaria** realice un uso indebido de las mismas de manera deliberada y reiterada.

**Artículo 38.** La **persona beneficiaria** podrá en todo momento acudir ante la Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección, Medidas Urgentes de Protección, Estudio de Evaluación de Riesgo o Estudio de Evaluación de Acción Inmediata.

**Artículo 39.** ...

**Artículo 40.** La **persona beneficiaria** se podrá separar del Mecanismo en cualquier momento, para lo cual deberá externarlo por escrito a la Junta de Gobierno.

### Capítulo VIII Medidas de Prevención

**Artículo 41.** ...

**Artículo 42.** ...

**Artículo 43.** ...

**Artículo 44.** ...

**Artículo 45.** ...

### Capítulo IX Convenios de Cooperación

**Artículo 46.** ...

**Artículo 47.** ...

### Capítulo X Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

**Artículo 48.** ...

**Artículo 49.** ...

**Artículo 50.** ...

**Artículo 51.** ...

**Artículo 52.** El Fondo contará con un Comité Técnico presidido por **la Secretaría** o Secretario de Gobernación e integrado por **una persona** representante de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

**Artículo 53.** El Fondo tendrá un órgano de vigilancia integrado por un comisario o **comisaria** público y **una persona** suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto a las reuniones del comité técnico y tendrán las atribuciones que les confiere la Ley.

**Artículo 54.** ...

### Capítulo XI Inconformidades

**Artículo 55.** La inconformidad se presentará por escrito, debidamente firmada, ante la Junta de Gobierno y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan **a la persona peticionaria o persona beneficiaria** y las pruebas con que se cuente.

**Artículo 56.** La inconformidad procede en:

I. ...

II. ...

III. Caso de que la autoridad no acepte, de manera expresa o tácita, las decisiones de la Junta de Gobierno relacionadas con las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección otorgadas a la persona beneficiaria.

**Artículo 57.** Para que la Junta de Gobierno admita la inconformidad se requiere:

I. ...

II. Que se presente en un plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo de la Junta de Gobierno o de la respectiva autoridad, o de que la persona peticionaria o persona beneficiaria hubiese tenido noticia sobre la resolución definitiva de la autoridad acerca del cumplimiento de las Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección.

**Artículo 58.** ...

**Artículo 59.** En el caso del procedimiento extraordinario, la inconformidad se presentará ante la Coordinación y deberá contener una descripción concreta de los riesgos o posibles agravios que se generan a la persona peticionaria o persona beneficiaria.

**Artículo 60.** ...

**Artículo 61.** ...

**Artículo 62.** ...

**Artículo 63.** ...

## Capítulo XII

### Transparencia y Acceso a la Información

**Artículo 64.** ...

## Capítulo XIII

### Sanciones

**Artículo 65.** ...

**Artículo 66.** Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, **la servidora o servidor público** o miembro del mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, **persona peticionaria y persona beneficiaria** referidos en esta ley.

...

...

**Artículo 67.** A la **Servidora o Servidor Público** que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Periodista, persona peticionaria y persona beneficiaria, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta ley.

## Transitorios

**Único.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, a los 14 días de enero del 2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores.**

---

## LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

---

«Iniciativa que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada federal **Verónica María Sobrado Rodríguez** y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la **iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal**, al tenor de la siguiente:

### Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el documento “Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México”,<sup>1</sup> se establece que el transporte por vía terrestre es el modo más trascendental en México, en términos de producción, volumen y empleo. Más de la mitad del valor del comercio internacional de México se realiza por vía terrestre, y la mayor parte del mismo en la frontera con Estados Unidos.

Así también refiere que los instrumentos regulatorios más importantes para el transporte terrestre se relacionan con seguridad, dimensiones de peso y tamaño, la importación de vehículos usados y las emisiones. Sin embargo, afirma que México tiene uno de los récords más bajos en seguridad de carreteras dentro de los países miembros de la OCDE.

Muestra de lo anterior son los múltiples accidentes carreteros por “tractocamiones doblemente articulados”, comúnmente conocidos como “camiones de doble semirremolque.”

Por ende, es conveniente señalar que la Norma Oficial Mexicana, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, ha definido al “tractocamión doblemente articulado” como el vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación.”

Desafortunadamente, se ha señalado que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito; y que, según cifras de la ONU, 28 mil de éstos son provocados por camiones de doble remolque, en los que, de

acuerdo con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mueren mil personas al año.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP),<sup>2</sup> de una solicitud de información sobre los tractocamiones doblemente articulados, señaló que en los informes sobre “Estadística básica del Autotransporte Federal” de la Subsecretaría de Transporte de la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT, se registra que, en 2018 los vehículos doblemente articulados fueron 3 mil 740, representando el 0.77 por ciento del total del parque vehicular por tipo de arrastre (semirremolque y remolque).

En ese tenor, el CEFP refirió que la mayoría de los permisionarios de los vehículos doblemente articulados son particulares, en 2018, representaron 1.24 por ciento del total, cuando en 2012 aproximadamente conformaban el 2.0 por ciento.

Por lo que, es imperativo señalar que la regulación y el otorgamiento de permisos de autotransporte de carga en todos los caminos de jurisdicción federal, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, en los términos del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Así que, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de la regulación que ha establecido en los reglamentos respectivos, también lo ha hecho a través de la Norma Oficial Mexicana, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, como en la NOM-012-SCT-2-2014 y la NOM-012-SCT-2-2017; y el Aviso publicado en el DOF el 17 de julio de 2018, en el que se dio a conocer los procedimientos y requisitos para obtener la autorización expresa para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal con configuraciones de tractocamión doblemente articulado. Con lo que se continuó con la autorización de la circulación de los vehículos anteriormente citados.

En ese sentido, la NOM-012-SCT-2-2017, establece el peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino; y los tractocamiones doblemente articulados tienen una capacidad de peso de hasta 66.5 toneladas, con una longitud total máxima autorizada de 31.0 metros. Peso y longitud altos, comparados con los estándares de países de primer mundo. Aunado a ello, en muchas ocasiones excede el

máximo establecido, llevando a que en nuestro país se mantengan las cifras de altas muertes por accidentes de esa naturaleza.

Para ejemplificar lo anterior, tengo que señalar que Canadá marca como límite 50 toneladas de carga en un vehículo de 25 metros de longitud máxima. En Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Italia y Suiza, son 43 toneladas que además no rebasan los 20 metros de dimensión.

Estados Unidos autoriza hasta 24 metros de largo para uno de estos transportes, cargando no más de 40 toneladas, cuando se permite su circulación, porque en varios estados de la Unión Americana estos camiones están simplemente prohibidos.

Por lo anterior, se han emprendido diversos movimientos por parte de la sociedad civil, para que se dé la prohibición de la circulación de los tractocamiones doblemente articulados, así como la presentación de diversas iniciativas, tanto en esta Legislatura como en las anteriores; no obstante, sigue habiendo falta de voluntad, si no para prohibirlo, tampoco para reducir el peso y la dimensión de los mismos.

Los principales argumentos que se han vertido en contra de lo anterior han sido por los representantes de autotransportistas y organismos empresariales, quienes han estimado que la salida de estas unidades de las carreteras del país —según ellos— implicaría tres riesgos: un aumento del parque vehicular, más accidentes y alza en costos para usuarios y transportistas.

Debemos recordar que, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, a fin de garantizar el fomento del crecimiento económico; para ello, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general.

Asimismo, dicho precepto constitucional señala que el Estado apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y el beneficio general; concurriendo al desarrollo económico nacional, **con responsabilidad social**, el sector público, el sector social y el sector privado.

Por lo que “los gobiernos crean y emiten la regulación para alcanzar un objetivo de política pública, por ejemplo,

proteger la vida, minimizar el impacto de la actividad económica en el medio ambiente o informar a los consumidores. Las regulaciones bien diseñadas y de alta calidad no sólo podrían ayudar a alcanzar estas metas, sino que también generan más beneficios que costos para la sociedad.

En cualquier jurisdicción, el sector de transporte está sujeto a un sinnúmero de reglas y regulaciones con distintos objetivos de política pública, tales como: seguridad en carretera, recaudación de impuestos, promoción de la industria, así como la restricción del ejercicio del poder de mercado de las empresas. México no es la excepción. Además, la naturaleza transversal de la industria del transporte la convierte en un sector cuyo desempeño tiene impacto directo en otras industrias, afectando su disponibilidad, calidad y precio de los productos y servicios.

En el caso del transporte terrestre, la regulación relativa a los límites de pesos y dimensiones debe basarse en evidencia clara de que los beneficios de cualquier restricción regulatoria son muchos más que los costos potenciales”.<sup>3</sup>

Sin duda, tenemos la responsabilidad de ponderar la seguridad de todos los mexicanos y la iniciativa busca la reducción de accidentes y por tanto, la garantía de tránsito más seguro.

Por lo anterior, se propone la reducción del máximo de las dimensiones y del peso de los tractocamiones doblemente articulados, tomando como referencia las ya existentes en otros países, como lo es Estados Unidos de América.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

### **Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal**

**Artículo Único.** Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

**Artículo 50.** ...

...



Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.

**Queda prohibida la circulación en carreteras federales de tractocamiones doblemente articulados que excedan las 40 toneladas de peso y con una longitud total máxima de 24 metros.**

### **Transitorio**

**Único.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

### **Notas**

1 OCDE, “Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México. Resumen”, 2017, pág. 11.

2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados (CEFP), Solicitud de Información “tractocamiones doblemente articulados”, Palacio Legislativo de San Lázaro, CEFP/IFO/681/2019.

3 Op cit OCDE pág. 6

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 15 de enero de 2020.— Diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica).»

**Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.**

